NÚMERO 3946 MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE REPRESENTANTES

3ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE

Esc. GUSTAVO BORSARI BRENNA
(1er. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ
Y EL PROSECRETARIO SEÑOR TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI

XLVII LEGISLATURA QUINTO PERÍODO EXTRAORDINARIO

Texto de la citación

Montevideo, 5 de diciembre de 2014.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 10, a la hora 14, a solicitud firmada por cincuenta señores Representantes, de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento de la Cámara, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento), para informarse de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Código del Proceso Penal. (Aprobación). (Carp. 2963/014). (Informado). Rep. 1431 y Anexo I

JOSÉ PEDRO MONTERO VIRGINIA ORTIZ
Secretarios

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión.

Por aplicación de lo establecido por el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de los asuntos que figuran en la convocatoria.

S U M A R I O

Pág.

1.- Asistencias y ausencias 4
2.- Texto de la solicitud de convocatoria 4
3.- Asuntos entrados 5
5.- Exposiciones escritas 7
6.- Inasistencias anteriores 8

CUESTIONES DE ORDEN

7.- Declaración de gravedad y urgencia 8
11. Licencias 224
9.- Sesión extraordinaria 223

VARIAS

4.- Interrupción del receso 7

ORDEN DEL DÍA

8, 10, 12.- Código del Proceso Penal. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. N° 1431, de setiembre de 2014, y Anexo I, de diciembre de 2014. Carp. N° 2963 de 2014. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 8, 223, 241
— Texto del proyecto sancionado 163

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala (1), Andrés Abt, Auro Acosta, Nelson Alpuy, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, Daniel Aquino, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, Gustavo Bernini, Ricardo Berois, Daniel Bianchi, Marcelo Bistolfi Zunini, Gustavo Borsari Brenna, Cecilia Bottino, Heber Bousses, Eduardo Brenta (2), Irene Caballero, Graciela Cáceres, Daniel Caggiani, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa, Evaristo Coedo, Carlos Corujo, Beatriz Cuadrado, Hugo Dávila, Guillermo Facello, Carlos Gamou, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Gabriel Gianoli, Aníbal Gloodtdofsky, Óscar Groba, Mauricio Guarinoni, Jorge Guedkjian, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, María Elena Laurnaga, Orlando Lereté, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Rubén Martínez Huelmo (3), Sergio Mier, Orquídea Minetti, Gonzalo Mujica, Amin Niffouri, Gonzalo Novales, Nicolás Núñez, Julio Olivar, Raúl Olivera, Jorge Orrico, César Panizza, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Alberto Perdomo, Nicolás Pereira, Susana Pereyra, Nelson Pérez Cortelezzi, Pablo Pérez González, Mario Perrachón, Iván Posada, Luis Puig, Roque Ramos, Raúl Renom, Carlos Rodríguez Gálvez, Edgardo Rodríguez, Nora Rodríguez, Sebastián Sabini, Richard Sander, Berta Sanseverino, Jorge Schusman, Rubenson Silva, Mario Silvera, Robert Sosa, Walter Souto, Martín Tierno, Javier Umpiérrez, Juan Ángel Vázquez, Walter Verri y Dionisio Vivian.

Con licencia: José Andrés Arocena, Roque Arregui, Germán Cardoso, Álvaro Delgado, Gustavo Espinosa, Jorge Gandini, Rodrigo Goñi Romero, Felipe Michelini, Yerú Pardiñas, Daniel Peña Fernández, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Ana Lía Piñeyrúa, Jorge Pozzi, Daniel Radío, Gustavo Rombys, Alejandro Sánchez, Víctor Semproni, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Carmelo Vidalín y Horacio Yanes.

Faltan con aviso: Verónica Alonso, Walter De León, Martín Lema, Alma Mallo, Daniel Mañana, Graciela Matiauda, Martha Montaner, Miguel Otegui, Ricardo Planchon, Nelson Rodríguez Servetto y Pedro Saravia Fratti.

Sin aviso: Eleonora Bianchi.

Observaciones:

1. A la hora 15:05 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Jorge Guedkjian.
2. A la hora 15:05 comenzó licencia, siendo convocada en su lugar la Sra. Eleonora Bianchi.
3. A la hora 15:05 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Evaristo Coedo.

2.- Texto de la solicitud de convocatoria.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
PRESENTE

Los Representantes que suscriben solicitan, se convoque a sesión extraordinaria de acuerdo al literal B) del artículo 21 del Reglamento del Cuerpo, para el miércoles 10, a la hora 14, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) para informarse de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Código del Proceso Penal. (Aprobación). (Carp. 2963/014). (Informado). Rep. 1431 y Anexo I

Pablo ABDALA, Daniel AQUINO, Julio BATTISTONI, Gustavo BERNINI, Graciela CÁCERES, Daniel CAGGIANI, Felipe CARBALLO, Beatriz CUADRADO, Hugo DÁVILA, Walter DE LEÓN, Juan Carlos FERRERO, Raúl FORNÉ, Carlos GAMOU, Óscar GROBA, Doreen Javier IBARRA, Fernando ISABELLA, María Elena LAURNAGA, Andrés LIMA, José Carlos MAHÍA, Felipe MICHELINI, Sergio MIER, Orquídea MINETTI, Gonzalo MUJICA, Raúl OLIVERA, Jorge ORRICO, Ivonne PASSADA, Daniela PAYSSÉ, Guzmán PEDREIRA, Nicolás PEREIRA, Susana PEREYRA, Darío PÉREZ BRITO, Pablo PÉREZ GONZÁLEZ, Mario PERRACHÓN, Luis PUIG, Roque RAMOS, Carlos RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Edgardo RODRÍGUEZ, Nora RODRÍGUEZ, Gustavo ROMBYS, Alejandro SÁNCHEZ, Berta SANSEVERINO, Víctor SEMPRONI, Rubenson SILVA, Robert SOSA, Martín TIERNO, Daisy TOURNÉ, Javier UMPIÉRREZ, Carlos VARELA NESTIER, Dionisio VIVIAN, Jorge ZÁS FERNÁNDEZ".

3.- Asuntos entrados.

"Pliego N° 308

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

- por el que se aprueban en el marco de los conceptos de igualdad de género y concubinato, en el ámbito de la Seguridad Social Militar, idénticas normas a las vigentes en las Leyes del Banco de Previsión Social. C/3019/014

- *A la Comisión de Seguridad Social*

- por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y la extensión y prórroga de los créditos de IVA vigentes. C/3020/014

- *A la Comisión de Hacienda*

- por el que se crea el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. C/3021/014

La citada Presidencia remite copia del Oficio de la Suprema Corte de Justicia, relacionado con una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, sobre Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011. C/72/010

- *A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración*

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se concede una pensión graciable al señor Héctor Salva González. C/3022/014

- *A la Comisión de Seguridad Social*

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley, por el que se aprueba un Nuevo Código del Proceso Penal. C/2963/014

- *Se repartió con fecha 5 de diciembre*

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Rocha remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, sobre un nuevo aniversario del Día Internacional Contra la Violencia a la Mujer, y la necesidad de continuar en la lucha para la erradicación definitiva de dicho flagelo. C/116/010

- *A la Comisión Especial de Género y Equidad*

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante Richard Sander, sobre la previsión presupuestal y el costo que tuvo la realización del Censo 2012. C/2760/014

La Intendencia de Montevideo contesta la exposición escrita presentada por el señor ex Representante Gabriel Gianoli, referente a la falta de iluminación en Playa Zabala, Pajas Blancas y La Colorada. C/19/010

La Junta Departamental de Artigas contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Planchon, sobre la posibilidad de incluir como materia curricular Educación Ambiental. C/19/010

El Tribunal de Cuentas contesta el pedido de informes del señor Representante Edgardo Rodríguez, sobre una presunta retención de sueldos aplicada por la Intendencia de Tacuarembó a sus funcionarios. C/2736/014

La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes del señor Representante Juan Manuel Garino Gruss, sobre el número de denuncias recibidas en el período 2005-2014, por usurpación ilegal de terrenos en la zona comprendida desde el arroyo Pando hasta Atlántida. C/2979/014

- *A sus antecedentes*

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Miguel Jesús Otegui, sobre carencias de recursos humanos y materiales en el hospital de la ciudad de Paysandú, y en el centro hospitalario de Guichón. C/2430/013

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta los siguientes asuntos:

- pedidos de informes:
  - del señor Representante Jaime Mario Trobo, relacionado con la licitación pública efectuada por la Administración Nacional de Puertos para la adquisición de un equipo de dragado multipropósito. C/2945/014
  - del señor Representante José Carlos Cardoso, acerca del estado de la estructura y los pilares del puente sobre el arroyo San Miguel, departamento de Rocha. C/2966/014

- exposiciones realizadas por el señor Representante Carmelo Vidalín:
  - en sesión de 10 de setiembre de 2014, por la que solicita se concreten obras de caminería y de remodelación en varios puentes de la zona de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. S/C
  - en sesión de 16 de julio de 2014, referida a la necesidad de tomar medidas urgentes en virtud del impactante deterioro de la caminería rural de los departamentos del interior y a la conveniencia de realizar obras de vialidad en el departamento de Durazno. S/C
- exposiciones escritas presentadas:
  - por el señor Representante José Andrés Arocena, sobre la necesidad de iluminar el tramo de la Ruta Nacional Nº 7, en el acceso a la ciudad de Fray Marcos, departamento de Florida. C/19/010
  - por el señor Representante Gonzalo Novales, acerca de la necesidad de instalar instrumentos de seguridad en la perimetral de la ciudad de Dolores y el cruce con la Ruta Nacional Nº 96. C/19/010

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante Fitzgerald Cantero Piali, relacionado con las razones para disponer el embolsado de las facturas que se distribuyen a los clientes. C/2900/014

El citado Ministerio remite la información proporcionada por ANCAP en respuesta al pedido de informes del señor Representante Richard Sander, referente a la contratación de empresas, servicios tercerizados y pagos mensuales realizados en todo el país, desde el año 2013 a la fecha. C/2896/014

El Ministerio del Interior contesta las siguientes exposiciones escritas presentadas:

- por el señor Representante Hugo Dávila, acerca de dificultades para el traslado de pasajeros mediante el servicio de lanchas entre las ciudades de Bella Unión y Monte Caseros en la República Argentina. C/19/010
- por el señor Representante Mario Perrachón, sobre la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad en la Cárcel Departamental de Piedra de los Indios. C/19/010
- por el señor Representante Edgardo Rodríguez, referente a las dificultades que presentan los habitantes de varias localidades del departamento de Tacuarembó para efectuar el pago de facturas. C/19/010
- por el señor ex Representante Martín Lema, relacionada con un proyecto de ley por el que se incluye en el programa de Educación Inicial y Primaria, la tenencia responsable de animales. C/19/010
- por el señor Representante Alberto Casas, acerca de la construcción de rotondas en los accesos a las localidades de Mal Abrigo y Estación González. C/19/010
- por la señora ex Representante María del Carmen Pereira, relacionada con la necesidad de reforzar los controles ante el aumento de ataques a ómnibus y vehículos en los accesos a Montevideo. C/19/010
- por los señores Representantes Alberto Casas, Gustavo Cersósimo y Walter De León, sobre la necesidad de rediseñar y ejecutar obras en rutas nacionales del departamento de San José. C/19/010
- exposición realizada por la señora Representantes Berta Sanseverino y el señor ex Representante Mauricio Guarinoni, en sesión de 8 de abril de 2014, acerca de desarrollo humano y hábitat: una década de avances en Uruguay. S/C

La referida Secretaría de Estado acusa recibo de la exposición presentada por la señora Representante Lourdes Ontaneda, sobre la necesidad de brindar atención preferencial a la persona adulta mayor. C/19/010

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes pedidos de informes:

- del señor Representante Pedro Saravia Fratti, relacionado con el número de trabajadores amparados al seguro por desempleo desde el 2011 hasta la fecha. C/2090/012
- del señor Representante Guillermo Facello, acerca de las acciones realizadas para la inclusión y accesibilidad de personas discapacitadas. C/2335/013

El Ministerio de Desarrollo Social contesta el pedido de informes del señor Representante Juan Manuel Garino, referente a una actividad deportiva realizada en Montevideo y en los departamentos del interior, en el mes de setiembre de 2014, denominada "5K SER JOVEN NO ES DELITO". C/2959/014

- *A sus antecedentes*

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante José Andrés Arocena solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre la confidencialidad dispuesta para el proyecto de la minera Aratirí. C/3017/014

- *Se cursó con fecha 20 de noviembre*

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, relacionado con el adeudo de una empresa privada con la referida Administración por el suministro de gas propano industrial. C/3018/014

- *Se cursó con fecha 28 de noviembre*".

4.- Interrupción del receso.

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Está abierto el acto.

(Es la hora 14 y 18)

——La Cámara ha sido convocada, al amparo de lo dispuesto por el literal B) del artículo 21 del Reglamento, a fin de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso, según lo previsto por el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución de la República y por el literal C) del artículo 90 del Reglamento de la Cámara.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se levanta el receso.

5.- Exposiciones escritas.

Dese cuenta de la exposición escrita.

(Se lee:)

"El señor Representante José Carlos Cardoso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha, y por su intermedio a las Juntas Locales de La Coronilla y de Barra del Chuy, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de circulación en la Ruta Nacional Nº 9, "Coronel Leandro Olivera". C/19/010".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto de la exposición escrita:)

"Exposición del señor Representante José Carlos Cardoso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia de Rocha, y por su intermedio a las Juntas Locales de La Coronilla y de Barra del Chuy, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de circulación en la Ruta Nacional Nº 9, "Coronel Leandro Olivera".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Intendencia de Rocha y, por su intermedio, a las Juntas Locales de La Coronilla y de la Barra de Chuy, y a la Junta Departamental de Rocha. En las dos últimas Administraciones de Gobierno hemos planteado, insistentemente, nuestra preocupación por las condiciones de circulación en la Ruta Nacional Nº 9 Coronel Leonardo Olivera. Se trata de una vía de intenso tránsito internacional de vehículos de carga y de pasajeros, por lo que es de alta peligrosidad para quienes la deben cruzar de un lado a otro. Así lo demuestran las características de los numerosos siniestros que se registran anualmente. Respecto a los tréboles de acceso a los centros poblados, hemos venido reclamando su eliminación, por tratarse de estructuras con gran riesgo de accidentes. Aunque en nuestro departamento esas estructuras están siendo sustituidas por otros sistemas de circulación más eficaces, aún queda mucho por realizar. Tal es el caso de los tréboles de acceso a los balnearios de La Coronilla y de Punta del Diablo, cuya eliminación reclamamos. Según pudimos conocer, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se apresta a suprimir el trébol de La Coronilla, pero lo hace en una fecha próxima al comienzo de la temporada estival. Probablemente, se estará en plena obra cuando comiencen a llegar los turistas. Es necesario entonces garantizar la mayor seguridad posible en la circulación del tránsito y de los peatones. Por lo expuesto, solicitamos se proceda a instalar mayor iluminación y una adecuada señalización a ese tramo de la ruta que pasa por el balneario La Coronilla, a los efectos de que haya buenas condiciones de visibilidad y señales que sean claras y de fácil interpretación. También, hacemos propicio este planteo para reiterar que es imprescindible dotar de muy buena iluminación y señalización al trébol de acceso a la Barra de Chuy -donde la luz es inexistente- para que ese lugar sea perfectamente identificable a una razonable distancia. Conocemos la dinámica de la circulación en esa ruta, por esa razón alertamos oportunamente a los efectos de prevenir siniestros que provocan pérdidas irreparables. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha".

6.- Inasistencias anteriores.

——Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 12 de noviembre de 2014 a la hora 15:00.

Con aviso: Gerardo Amarilla, José Andrés Arocena, Ricardo Berois, Marcelo Bistolfi Zunini, Rodolfo Caram, Alberto Casas, Antonio Chiesa, Carlos Gamou, Aníbal Gloodtdofsky, Rodrigo Goñi Romero, Pablo Iturralde Viñas, Alma Mallo, Daniel Mañana, Graciela Matiauda, Martha Montaner, Gonzalo Novales, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo, Nelson Rodríguez Servetto, Richard Sander, Pedro Saravia Fratti y Mario Silvera.

Sin aviso: Javier Mallorca.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 12 de noviembre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Fernando Amado y Raúl Olivera.

Miércoles 19 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Daisy Tourné.

HACIENDA

Con aviso: Ana Lía Piñeyrúa y Richard Sander.

Miércoles 26 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Daisy Tourné y Pablo Iturralde Viñas.

Miércoles 3 de diciembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Daisy Tourné y Felipe Michelini.

Jueves 4 de diciembre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Carmelo Vidalín y Raúl Olivera".

7.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el único asunto que figura en el orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

8.- Código del Proceso Penal. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el único asunto del orden del día: "Código del Proceso Penal. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. N° 1431

1

CM/ 230

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 8 DIC. 2010

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración el adjunto proyecto de Código Procesal Penal elaborado por la Comisión creada por el artículo 21 de la Ley Nº 17.897 de 14 de setiembre de 2005, que fuera remitido en su oportunidad por el Poder Ejecutivo con fecha 7 de setiembre de 2009.

I- NECESIDAD DE LA REFORMA.

El sistema de administración de justicia penal, o más precisamente su funcionamiento, ocupan un lugar crecientemente relevante en la agenda de lo

que resulta problemático o tema de preocupación para la ciudadanía en general.

Por otra parte desde distintos sectores, los operadores vinculados al sistema de uno u otro modo, se han expresado coincidentemente, respecto de la necesidad de asumir una reforma del sistema penal.

Nuestro proceso penal se sustenta en el vigente Código del Proceso Penal que data de 1980, sancionado durante el gobierno de facto y se afilia a un sistema inquisitivo reformado que no se adecua a la previsión del artículo 22 de la Constitución de la República.

De hecho las demandas hacia el sistema de administración de justicia penal aumentan y se diversifican al ritmo en que lo hacen los distintos conflictos que ocurren en un contexto de creciente complejidad social.

En las dos últimas décadas, la sensibilidad ciudadana frente a los problemas de seguridad pública ha trasladado una legítima atención hacia el servicio de justicia penal y su capacidad para brindar respuestas.

No se trata, entonces, de que el sistema de justicia penal supla las actividades que en el área le son exigibles a otras instituciones, pero es importante que se asuma la necesidad de un adecuado instrumento para la resolución de los conflictos penales.

Un servicio de justicia eficiente se vincula con la consolidación del sistema democrático y éste necesita de herramientas para canalizar los conflictos sociales mediante un árbitro independiente de la conflictividad, de forma que medie entre el poder y los ciudadanos y logre finalmente reconocer y dar vigencia a los derechos de cada uno.

Si construir y fortalecer un sistema democrático implica necesariamente preservar y garantizar ámbitos de libertad social e individual, es necesario consolidar los mecanismos que aseguran la responsabilidad consiguiente. El principal camino para asegurar la eficiencia del derecho de todos y cada uno, es contar con una administración de justicia moderna, transparente, eficiente, segura, independiente y al alcance de todos los sectores sociales.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Podremos afirmar, entonces, que es imperioso encarar un proceso de transformación integral del actual sistema de persecución penal y juzgamiento de los delitos que hoy se encuentra vigente, la que se vuelve ineludible, frente a la obligación de adaptar nuestra legislación a los estándares mínimos que rigen en la materia.

En este contexto se sancionó la Ley Nº 17.897 de 14 de setiembre de 2005 denominada de Humanización del Sistema Penitenciario que en su artículo 21 creó una Comisión honoraria para la redacción de las "bases para la reforma del Proceso Penal". Dicha Comisión fue constituida por el Poder Ejecutivo en el mes de setiembre del año 2006, con el propósito de elaborar dichas bases.

Se integró con un representante del Poder Ejecutivo que la presidió, uno de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte, de la Universidad de la República, de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la Asociación Magistrados Judiciales, de la Asociación de Defensores de Oficio, del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de la Asociación de Actuarios Judiciales y del Ministerio de Economía y Finanzas.

En una primera etapa se abocó a elaborar las "bases para la reforma del proceso penal", tal como fue mandatada por la norma referida. Las mismas fueron aprobadas por consenso de los integrantes de la Comisión y fueron puestas en conocimiento de la Presidencia de la República y de las Comisiones de Constitución, Legislación y Códigos de ambas Cámaras Legislativas.

Tal como lo sugirió oportunamente la Secretaría de la Presidencia de la República y los Presidentes de las respectivas Comisiones de Constitución, Legislación y Códigos, la Comisión continuó la tarea de elaboración de un anteproyecto que recogiera los principios y premisas establecidos en las precitadas bases, desarrollándola durante casi tres años.

Con el convencimiento de la necesidad de una reforma integral del proceso penal el que no admite más modificaciones parciales, se dio cima a un

texto, fruto del consenso de dicha Comisión multirepresentativa el que pretende ser un aporte para su logro y que, seguramente, podrá ser enriquecido.

Para su concreción, se realizó un estudio comparativo de los Códigos aprobados, vigentes y proyectados en nuestro país, siendo el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica el referente primero de dicho trabajo. Del derecho extranjero se tuvieron en cuenta los códigos procesales penales vigentes en Latinoamérica, que cuentan con años de funcionamiento, tales como el de Chile, el de Perú, de la Provincia de Chubut de la República Argentina. Por otra parte, el Código General del Proceso constituyó un antecedente básico para las soluciones que se adoptaron en materia de estructuras procesales, medios impugnativos y actividad procesal en general.

La Comisión ha señalado que a lo largo de estos años de trabajo colectivo entre sus numerosos miembros que representan a los diversos actores del sistema judicial, con vigoroso intercambio constante de ideas y soluciones doctrinarias y prácticas llegó a soluciones de consenso.

El alejamiento de los representantes de la Asociación de Magistrados Judiciales acaeció por razones circunstanciales ajenas la filosofía y objetivos del presente anteproyecto.

II- EL SENTIDO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

Los objetivos y expectativas en que se basa la propuesta impulsada, de acuerdo a las bases oportunamente aprobadas por consenso por esta Comisión pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Obtener la estricta separación de funciones de los diversos sujetos que intervienen en el proceso penal.

2. Consagrar un proceso de partes contradictorio, por audiencias, concentrado y público, con plena vigencia del principio de inmediación, garantizando el control ciudadano.

3. Instaurar el principio acusatorio y simplificar el proceso.

4. Preservar y fortalecer la función jurisdiccional.

5. Valorizar el juicio como instancia institucional para la vigencia de la ley y para la resolución de los conflictos penales.

6. Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal, tanto en relación a la persecución de los delitos, como a la tutela de los derechos y garantías individuales.

7. Lograr un proceso de duración razonable.

8. Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente en relación a delitos complejos o de alto impacto social.

9. Favorecer una mayor intervención de la víctima del delito.

III- LOS ASPECTOS CENTRALES DEL ANTEPROYECTO

a) Sistematización de garantías.

El ordenamiento propuesto expone, de manera clara e integral, el sistema de derechos y garantías contenidas en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, los cuales rigen en todo el decurso del proceso penal.

Esta regulación se adapta a las previsiones constitucionales, que exigen un mayor nivel de precisión en esta materia, hace más accesible el conocimiento de los derechos y garantías y busca conferirle más dinamismo al conjunto normativo, facilitando de esta forma, su progresivo desarrollo y expansión.

b) Derechos del Imputado

En el anteproyecto se enumeran los derechos del imputado (Art.65), estableciéndose la consagración expresa del principio de inocencia, el carácter voluntario de su declaración, el derecho a guardar silencio y la obligación de que ella se realice en presencia de su defensor.

Para la verificación del cumplimiento del deber de información de los derechos que le asisten al imputado, se regula la obligación de dejar constancia de tal cumplimiento, independientemente de la autoridad que haya intervenido en ese acto.

Con relación al patrocinio letrado, se estableció una serie de medidas que facilitan su actuación, evitando que cualquier demora afecte los derechos de defensa del imputado. Así, entre otros aspectos, se desformaliza su designación y se prevé su intervención para los casos de urgencia, pudiendo ser designado por cualquier persona de confianza del imputado cuando este se encuentre privado de libertad. (Art. 66)

c) Derechos de las Víctimas.

Nuestro Código del Proceso Penal vigente prácticamente no reconoce ningún derecho a las víctimas a quienes ni siquiera menciona como tal.

El anteproyecto se encarga de revertir esa situación y ha procurado maximizar las instancias de participación de la víctima en varias dimensiones, en armonía con los principios básicos del sistema acusatorio. Se establece un catálogo de derechos (Art. 84), con una definición específica de quienes son contemplados como víctimas (Arts. 82 y 83), incluyendo las facultades que específicamente se les acuerdan.

d) Regulación del régimen de la acción en el proceso penal.

La regulación del régimen de la acción penal propuesto (Art. 85 y ss.), permite superar las limitaciones del principio de obligatoriedad, que impone la persecución oficial preceptiva frente a todos los hechos delictivos. Como se ha demostrado, la aplicación de este principio en forma estricta es irrealizable y produce un dispendio de esfuerzos para el sistema de justicia penal.

El sistema previsto por el anteproyecto corrige la situación actual, permitiendo al Ministerio Público racionalizar los recursos disponibles para la persecución penal y al mismo tiempo, ejecutar en forma eficiente la política criminal del Estado.

Como elemento esencial para lograr este objetivo, se establece y define el principio de oportunidad reglado (Art. 102), autorizando al Fiscal a prescindir de la persecución penal pública o abandonar la ya iniciada en los casos expresamente previstos.

No obstante, como limitación a la aplicación de este principio, se ha establecido su improcedencia cuando el hecho haya sido presumiblemente cometido por funcionario público en ejercicio de sus funciones o cuando la pena mínima prevista supere los dos años de privación de libertad.

En el caso del archivo provisional (Art.100), se prevé que la víctima que no esté de acuerdo con este criterio, pueda solicitar al jerarca del Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la proposición de diligencias de investigación, asegurando de esa forma la plena vigencia de la tutela judicial de sus derechos.

Desde la lógica de un sistema penal cuya respuesta represiva sea aplicada como *última ratio,* se elaboraron herramientas que posibilitan la obtención de respuestas eficientes en términos de pacificación, al mismo tiempo que permiten prescindir del comportamiento punitivo o atenuarlo, sin que ello sea entendido como una demostración de impunidad.

e) Indagatoria Preliminar.

Las mayores falencias de nuestro sistema procesal vigente se advierten en esta etapa del procedimiento y, por esa razón, su transformación es uno de los pilares de la reforma.

El anteproyecto presenta cambios paradigmáticos en cuanto a los roles y la forma en que debe impulsarse la investigación. El Ministerio Público, titular de la acción, es quien lleva adelante la investigación en los delitos de acción pública (Art. 44) para lo cual la Comisión ha entendido que debe constituirse como un órgano autónomo. La mera atribución de la investigación al Ministerio Público sin esta transformación, no contemplaría adecuadamente la envergadura de esta función.

En tal sentido, se requiere contar con vías procesales ágiles y con un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, el que deberá estar dotado de altos niveles de especialización para dirigir la indagatoria y actuar coordinadamente con otras oficinas estatales que hoy lo hacen de un modo aislado y sin responder a una política común de eficacia en la persecución penal.

El sistema propuesto en el Libro II Título I otorga a la indagatoria preliminar su verdadera finalidad, permitiendo al Ministerio Público preparar adecuadamente la formalización de la investigación.

Así resulta esencial destacar que esta actividad tiene carácter informativo, como consecuencia de ello, se establece la utilidad del registro de las actuaciones cumplidas, a diferencia de la formación del expediente en el sistema actual. Se resalta la desformalización para la recopilación de la prueba, con las limitaciones que se derivan del necesario respeto de los derechos humanos, exigiéndose la necesidad de fundar la petición de ciertas medidas y de requerir la orden judicial para su realización.

Se ha previsto el desarrollo de esta etapa con gran dinamismo y flexibilidad a los efectos de evitar dilaciones, sin dejar de prever el control de las actuaciones.

f) Medidas de coerción

Se consagra el principio general de libertad durante el proceso y el carácter provisional y excepcional de toda medida que la restrinja (Art.221), estableciéndose un catálogo de medidas limitativas de la libertad, además de la prisión preventiva (Art.224). De esta manera, se introduce una serie de alternativas, cuya finalidad es evitar que el encierro cautelar se aplique con generalidad.

Otra de las cuestiones esenciales del anteproyecto, consiste en que el Juez solamente puede disponer lo que le fue requerido por el Fiscal, careciendo de facultad para imponer per se medidas de coerción, aunque ello no impide que pueda considerar procedente la viabilidad de una medida menos gravosa de la que le fue requerida. (Art.230)

Con relación a la aplicación de la prisión preventiva, se establecen como requisitos generales para su procedencia la verificación de la existencia de las exigencias propias de su naturaleza cautelar; que existan elementos de convicción suficientes para presumir que el imputado es autor o partícipe del hecho presuntamente delictivo y que por la apreciación de las circunstancias del caso, sea presumible que el imputado obstaculizará la investigación o exista peligro de fuga, definiéndose ambos conceptos. (Arts. 227 y ss.)

Sin embargo y dentro de la lógica expuesta por la distribución de los roles en el proceso, la prueba sobre estos requisitos exigidos por el anteproyecto, estarán a cargo del fiscal, limitándose el juez a controlar la

legalidad y razonabilidad del requerimiento teniendo la obligación de resolverlo en forma fundada.

El anteproyecto regula la prisión preventiva como la medida cautelar más gravosa, la que deberá ser impuesta como ultima ratio. Bajo estos lineamientos se establecen limitaciones para su dictado.

Además, se prevén una serie de instrumentos que permiten el control, la sustitución o el cese de la medida dispuesta. (Arts. 230, 235, 236 y 238)

g) Regulación de la actividad probatoria

Se regulan los principios generales y las reglas de obtención de cada medio probatorio, incluyendo los que provienen de las más modernas tecnologías. (Arts. 143 a 215).

Se establece un cambio radical en cuanto a la producción e incorporación de la prueba que, se concentra en las audiencias de la fase del juicio, siguiendo los lineamientos del sistema acusatorio. Por excepción, en los casos expresamente previstos se prevé el diligenciamiento de prueba anticipada, a solicitud del Fiscal o de la Defensa (Arts. 216 a 218)

Asimismo, se llegó al consenso de no atribuir iniciativa probatoria al tribunal.

h) Las audiencias

La instauración de un sistema acusatorio debe caracterizarse por su aplicación en todas las etapas del proceso.

Las audiencias constituyen en el anteproyecto la etapa central del juicio, por lo cual se identifican y separan las funciones de acusar y juzgar a lo largo de las mismas.

En el anteproyecto, la intervención jurisdiccional por excelencia se manifiesta a través de la dirección del Juez, quien controla la actividad realizada por el Ministerio Público y la Defensa en las audiencias. (Arts.271 y ss.)

En la audiencia preliminar, la intervención jurisdiccional resalta en la decisión sobre la formalización de la investigación solicitada por el Ministerio Público para iniciar el procedimiento respecto de un imputado. Se pronuncia asimismo sobre la posibilidad de aplicación de medidas limitativas o privativas a la libertad ambulatoria del imputado y sobre los medios de prueba propuestos por las partes, pudiendo rechazar los que entienda inadmisibles, innecesarios o inconducentes. Dispone el diligenciamiento de los medios probatorios admitidos y, si fuera necesario convoca a audiencia complementaria para cumplir las restantes actividades hasta el dictado de la sentencia definitiva.

i) La competencia para disponer medidas de coerción

La Comisión por consenso de sus integrantes optó por la atribución de la competencia a un tribunal para disponer las medidas de coerción y a otro tribunal para pronunciar la decisión de mérito, siguiendo las líneas tendenciales de los antecedentes legislativos que se tuvieron en cuenta para la redacción de este anteproyecto.

En este sentido, se previó que antes de pronunciarse sobre la pertinencia de los medios probatorios ofrecidos, si el Tribunal dispone una medida limitativa o privativa de la libertad ambulatoria del imputado, deberá

declinar competencia para ante otro Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal (Art.272.5)

Si no dispone una medida limitativa, continúa conociendo en la causa por lo cual, se llegó al consenso de no establecer jueces con competencia exclusiva en materia de medidas limitativas de la libertad.

j) Estructuras procesales

Se reguló la tramitación de las pretensiones respecto de crímenes y delitos a través de la estructura principal del Proceso Ordinario, para el cual se prevén dos audiencias; Preliminar y Complementaria, ésta última eventual (Arts.271 a 273).

Asimismo, se regula la posibilidad de la tramitación de dichas pretensiones mediante la estructura del Proceso Extraordinario al cual se aplican las normas previstas para el proceso ordinario, en lo pertinente (Arts.275 y 276). Para su procedencia, se requiere solicitud del Ministerio Público fundada en que considere suficiente la prueba reunida en la indagatoria preliminar como para deducir la acusación, resolviéndose en definitiva (Arts. 271 a 274).

Se establece el proceso incidental innominado, en audiencia y fuera de audiencia (Arts. 281 y 282) y especiales como el de Recusación (Art.285), Contienda de Competencia (Art.286) y de Excarcelación Provisional (Arts.287 y 288).

Para la tramitación de las pretensiones referidas a las faltas, se prevé la aplicación del Proceso Ordinario o Extraordinario en lo pertinente, según corresponda (Arts. 277 y 278).

Se incorporaron dos procesos especiales, uno para la Extradición en los casos en que no exista Tratado ratificado por nuestro país (Art.332 a 353) y otro para el Habeas Corpus (Art.354 a 360).

k) Impugnación de las decisiones judiciales

A diferencia de lo que ocurre en el Código vigente, el sistema propuesto se caracteriza por una mayor racionalidad para el control de las decisiones jurisdiccionales y permite satisfacer las exigencias de los instrumentos internacionales ya que se posibilita el ofrecimiento y la producción de prueba en Segunda Instancia (Art. 370)

Se propone la vía recursiva en los términos previstos en el Código General del Proceso, con las excepciones que expresamente se prevén en el texto proyectado, que tienen en cuenta la particularidad de la materia penal (Arts.361 y 362).

Se establece un sistema de control de los defectos de la actividad procesal, prevaleciendo los principios de especificidad, subsanación y trascendencia, conforme la regulación prevista en el Código General del Proceso.

l) Proceso de Ejecución Penal.

En cumplimiento de las normas Constitucionales y los Tratados Internacionales ratificados por la República, el anteproyecto propone la creación de una jurisdicción especializada a cargo de Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia, tributarios del principio de judicialización de la ejecución de la pena.

En tal sentido se proponen cambios en la regulación de esta etapa, atribuyendo la competencia necesaria a estos tribunales especializados para lograr la concreción de los principios inmediación y celeridad (Arts. 289 a 331).

Así, será el Juez de Ejecución y Vigilancia quien dispone la concesión de las libertades condicional y anticipada, controlará las condiciones en que se

14

cumple la condena, los traslados, las internaciones hospitalarias, la regularidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los penados y sus solicitudes de salidas transitorias, laborales o domiciliarias.

La Comisión recuerda que, para el éxito de la reforma procesal penal que implica el nuevo sistema, se requiere una adecuada implementación en lo que refiere a recursos humanos, infraestructura y logística la que, por razones presupuestales y técnicas, podría efectivizarse en forma gradual, recogiendo la experiencia acumulada de otras legislaciones latinoamericanas, que han emprendido la reforma integral de sus sistemas de enjuiciamiento penal.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,

JOSÉ MUJICA
Presidente de la República

14

15

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

PROYECTO DE LEY

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y REGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

CAPITULO I
PRINCIPIOS BÁSICOS

Articulo 1- ***(Debido proceso legal)***.- No se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente.

Articulo 2- (***Juez natural***).- Los tribunales serán imparciales e independientes y estarán instituidos por la ley, de acuerdo con la Constitución de la República. Sus titulares serán designados conforme a normas generales y objetivas, ajenas al caso concreto.

Articulo 3- (***Reconocimiento de la dignidad humana***).- Toda persona, cualquiera sea su posición en el proceso y en particular aquella a quien se atribuya un delito, debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad del ser humano.

Articulo 4- (***Tratamiento como inocente***).- Ninguna persona a quien se atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada.

Articulo 5- (***Prohibición del "bis in idem"***).- Ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifique la calificación

jurídica o se afirmen nuevas circunstancias, toda vez que haya recaído sentencia ejecutoriada.

Se exceptúan los casos en que el proceso haya concluido por falta de presupuestos procesales o defectos de procedimiento.

Artículo 6- (*Oficialidad*).- El ejercicio de la acción penal es público y corresponde su promoción al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 7- (*Defensa técnica*).- La Defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y por ende, un derecho inviolable de la persona.

El imputado tiene derecho a ser asistido por Defensor Letrado desde el inicio de la indagatoria preliminar.

Artículo 8- (*Finalidad y medios*).- El proceso tiene como finalidad el juzgamiento del caso concreto, con todas las garantías del debido proceso, conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales y las disposiciones de este Código.

Artículo 9- (*Publicidad y contradicción*).- El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las limitaciones que se establecen en este Código.

Rige en este proceso el principio acusatorio. En aplicación de dicho principio, no se podrán iniciar actividades procesales, imponer prisión preventiva o medidas limitativas de la libertad ambulatoria, condenar o imponer medidas de seguridad, si no media petición del Ministerio Público.

Artículo 10- (*Duración razonable*).- Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, según se dispone en este Código. En su mérito, el tribunal adoptará las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la Justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Artículo 11- (*Gratuidad*).- El proceso penal será gratuito en cuanto al servicio social que se le presta al Estado.

Articulo 12- ***(Otros principios aplicables)***.- Se aplicará al proceso penal, en lo pertinente, los principios de inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso.

Articulo 13- El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso.

CAPITULO II
RÉGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

Articulo 14- ***(Interpretación e integración)***.-

14.1-Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es el juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido proceso.

En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución, de los principios generales de derecho y los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso y la efectividad de la defensa técnica.

14.2- En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios constitucionales y generales de derecho, a los principios específicos del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. Está vedada la solución analógica perjudicial al interés del imputado y la interpretación extensiva.

Articulo 15- ***(Leyes penales en el tiempo y eficacia procesal)***.-

15.1-Cuando las leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.

15.2-Cuando esas leyes supriman delitos existentes o disminuyan la pena, se aplicarán a los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso, determinarán la clausura del proceso o la extinción de la pena. En el segundo, sólo la modificación de la pena, en cuanto no se hallare ésta fijada por sentencia ejecutoriada.

15.3-Estas disposiciones se aplicarán a las leyes de prescripción.

Articulo 16- (*Ley procesal penal en el tiempo*).- Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.

Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o, en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior.

Articulo 17- (*Aplicación de la ley procesal en el espacio*).- Este Código regirá en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por el Estado.

TITULO II
DE LOS SUJETOS PROCESALES.

CAPÍTULO I
EL TRIBUNAL

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 18- (*Organización*).- La justicia en materia penal será impartida por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en el Interior con competencia en materia penal, los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia; los Juzgados de Faltas y los Juzgados de Paz, en el marco de la competencia atribuida constitucional o legalmente.

Articulo 19- (*Indelegabilidad*).- Sólo el tribunal es titular de la función jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del tribunal.

Dicha delegación sólo abarcará la realización de actos auxiliares o de aporte técnico, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.

Articulo 20- (*Facultades*).- El tribunal está facultado para:

a) Asignar al proceso el trámite que legalmente corresponda.

b)Dictar las autorizaciones judiciales que solicite el Ministerio Público para realizar actuaciones que priven, restrinjan o perturben el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución o que emanen de los principios generales de Derecho.

c) Rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes.

d)Rechazar "*in limine*" los incidentes manifiestamente improponibles y resolver las cuestiones formales que se planteen.

e) Dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo, u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.

f) Ordenar la subsanación de los vicios formales que presente la acusación.

g) Aplicar previsiones analógicas del Código General del Proceso en todo aquello no previsto en el presente Código y en cuanto no perjudiquen los derechos e intereses del imputado.

La omisión en el empleo de estas facultades, le hará incurrir en responsabilidad .

Articulo 21- (*Responsabilidad*).- Los magistrados son responsables por:

a) Las demoras injustificadas en proveer o señalar audiencias.

b) Proceder con dolo o culpa grave.

c) Sentenciar cometiendo error inexcusable.

Articulo 22- (*Clases de jurisdicción*).- La jurisdicción penal es común o especial.

22.1- Jurisdicción común, es la que tienen los tribunales penales que integran el Poder Judicial y comprende todos los crímenes, delitos y faltas, sin distinción de personas.

22.2- La jurisdicción especial es la militar y queda reservada exclusivamente al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares y a situaciones de excepción, en caso de estado de guerra.

Se entiende por delito militar aquel que vulnera exclusivamente, normas contenidas en el ordenamiento penal militar.

22.3- Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común. A esos efectos, el jerarca militar respectivo deberá en todo momento colaborar y brindar auxilio al órgano competente de la jurisdicción común.

SECCION II
DE LA COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA Y DEL GRADO

Articulo 23- (*Competencia de la Suprema Corte de Justicia en materia penal*).- La Suprema Corte de Justicia conoce:

23.1- En única instancia, en los casos previstos en la Constitución Nacional.

23.2- En los recursos de casación y revisión.

23.3- En consulta, respecto de aquellas causas en las que no hubiere existido apelación y en ejercicio de la superintendencia correctiva, administrativa y disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, sin que por ello se pueda afectar la independencia técnica de los Magistrados actuantes.

23.4- En los demás casos en los que este Código o leyes especiales, le asignen competencia.

Artículo 24- (*Tribunales de Apelaciones en lo Penal*).-

Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados en lo Penal y los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia.

Artículo 25- (*Jueces Letrados de Primera Instancia*).-

25.1- Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior conocen:

a) En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código.

b) En segunda instancia, de las apelaciones deducidas contra las sentencias definitivas dictadas por los Juzgados de Faltas y de Paz del Interior en materia de faltas.

c) En los casos en que la Ley 9581 de 8 agosto de 1936 establece la intervención judicial.

25.2- Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital conocen además, en el proceso de extradición.

Artículo 26- (*Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia*).- Los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia conocen en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen a partir del momento que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, resulten ejecutoriadas.

Mientras no se designen los Jueces de Ejecución y Vigilancia en el interior del país, conocerán provisoriamente, los Jueces Letrados en lo Penal del lugar de cumplimiento de la condena.

Artículo 27- (*Jueces de Faltas*).- Los Jueces de Faltas conocen en las causas que se promuevan por faltas cometidas en el departamento de Montevideo.

Artículo 28- (*Jueces de Paz del Interior*).- Los Jueces de Paz del Interior conocen exclusivamente en materia de faltas penales, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

Artículo 29- (*Reglas subsidiarias*).- Si no puede determinarse el órgano competente de acuerdo con las normas de los artículos anteriores, lo será el tribunal que haya prevenido en el conocimiento de los hechos y si ninguno previno, el del lugar en que se haya aprehendido al imputado.

Artículo 30- (*Proceso de ejecución*).- El Juez de Ejecución y Vigilancia del lugar donde se cumple la sentencia ejecutoriada, es el competente para conocer en este proceso.

SECCION III
DE LA COMPETENCIA POR RAZON DE TIEMPO

Artículo 31- *(Reglas para la determinación de turno).-*

Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, los Juzgados de Paz y los Juzgados de Faltas ejercerán sus funciones por turnos, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia.

SECCION IV
DE LA COMPETENCIA DE URGENCIA

Articulo 32- (*Competencia de urgencia*) .-

32.1- Los jueces de todas las materias son competentes para adoptar las medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces concurren simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente.

32.2- Todos los magistrados del Ministerio Publico podrán solicitar las medidas referidas en el numeral anterior, cuando se hallen próximos al lugar del hecho, dando cuenta inmediata al fiscal naturalmente competente.

SECCION V
DE LA CONEXIÓN Y ACUMULACION ENTRE PRETENSIONES Y PROCESOS

Articulo 33- (*Casos de conexión*).- Existe conexión cuando distintas pretensiones o procesos refieren:

33.1- A una persona por la comisión de varios delitos.

33.2- A varias personas por la comisión de un mismo delito.

33.3- A varias personas por la comisión de distintos delitos, cuando alguno de los delitos ha sido cometido:

a) Para ejecutar el otro;

b) En ocasión de éste;

c) Para asegurar el provecho propio o ajeno;

d) Para lograr la impunidad propia o de otra persona;

e) En daño recíproco;

f) En condiciones que determinen que la prueba de uno de ellos o de alguna de sus circunstancias, influya sobre la prueba del otro delito o de alguna de sus circunstancias.

Articulo 34- (***Planteo inicial de pretensiones conexas***).- Cuando se advierta inicialmente la conexión de pretensiones, ellas deberán ser planteadas en un proceso único.

Articulo 35- (***Acumulación de pretensiones por inserción***).-

35.1- Si una vez iniciado un proceso surgen pretensiones conexas con las ya deducidas que no hubieren dado lugar a proceso, deberán ser acumuladas por inserción en el mismo proceso.

35.2- No se procederá a la acumulación cuando se hubiere diligenciado íntegramente la prueba o cuando el tribunal disponga por resolución fundada la tramitación por separado.

Articulo 36- (***No acumulación de procesos***).- Cuando se hubieren promovido procesos separados, no procederá la acumulación de los mismos y estos serán tramitados y resueltos con independencia por el tribunal competente en cada uno de ellos.

SECCION VI
DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

Articulo 37- (***Competencia en cuestiones prejudiciales***).-

37.1- El juez del proceso penal es competente para entender en todas las cuestiones ajenas a su materia, que se planteen en el curso del proceso penal y resulten decisivas para determinar la existencia del delito o la responsabilidad del imputado.

37.2- La decisión del juez penal sobre las cuestiones a que alude este artículo, sólo tendrá eficacia en sede penal.

37.3- Si la cuestión prejudicial hubiera sido resuelta en la sede respectiva por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tendrá ésta en el proceso penal la misma eficacia que tiene en su sede natural.

Articulo 38- (***Sentencias contradictorias***).- Si la decisión de las cuestiones prejudiciales constituye fundamento principal y determinante de condena penal y las mismas cuestiones son objeto de una posterior sentencia contradictoria en su sede propia, podrá el perjudicado deducir recurso extraordinario de revisión.

SECCION VII
DE LA INCOMPETENCIA

Articulo 39- (***Incompetencia por razón de la materia o del grado***).-

39.1- La incompetencia por razón de materia o del grado es absoluta y puede hacerse valer de oficio por el tribunal, o por las partes en cualquier momento del proceso.

39.2- Lo actuado por un tribunal absolutamente incompetente es nulo, con excepción de lo dispuesto respecto de las medidas cautelares y de las decisiones que las modifiquen o hagan cesar, cuyos efectos subsistirán hasta que el juez competente resuelva sobre su mantenimiento o revocación.

Articulo 40- (***Incompetencia por razón de lugar o de turno***).- La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y sólo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia o por el tribunal de oficio al empezar su actuación, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

Articulo 41- (***Contienda de Jurisdicción***).- La Suprema Corte de Justicia resolverá los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar.

Articulo 42- (***Contienda de Competencia***).- Si por cualquier circunstancia, dos o más tribunales se declararen competentes o incompetentes para entender en un mismo asunto, cualquiera de ellos de oficio o a petición de parte, someterá la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta resolverá cuál de los tribunales debe entender en el asunto.

SECCION VIII

DE LA SUSTITUCIÓN Y SUBROGACIÓN

Articulo 43- (*Orden*).- En los casos de vacancia, licencia, impedimento, recusación o abstención, los jueces se subrogarán de la siguiente forma.

43.1- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

43.2- Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, por sorteo entre los miembros de los otros tribunales de la misma materia. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

43.3- El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, por el que comparta la oficina y en su defecto, por el que le preceda en el turno. Si todos estuvieran impedidos por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil.

43.4- El Juez Letrado de Primera Instancia del Interior por su orden, por el Juez de igual categoría con competencia penal, por el de igual categoría de otra competencia, por el Juez de Paz con sede en la misma ciudad y por el Juez de la misma categoría de la sede más inmediata.

43.5- Los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia, por el que le preceda en turno y si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados en lo Penal del departamento.

43.6- Los Jueces de Faltas y de Paz, por el que le preceda en turno.

En todos los casos de integración de tribunales pluripersonales, el miembro integrante continuará conociendo en el caso hasta su terminación. Si el impedimento es por causa de licencia, la integración se efectuará si ésta se prolonga por más de treinta días.

CAPÍTULO II
EL MINISTERIO PÚBLICO

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 44- ***(Función)***.-

44.1- El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. Con ese propósito, practicará todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación.

44.2- Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

Articulo 45- ***(Remisión)***.-

45.1- La intervención del Ministerio Público en el proceso, se regulará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y Fiscal.

45.2- La competencia de los fiscales se regulará en lo pertinente del mismo modo que la fijada para los tribunales, sin perjuicio de lo que establezca la ley orgánica del Ministerio Publico.

Articulo 46- ***(Atribuciones)***.-

46.1-El Ministerio Público tiene atribuciones para:

a) Dirigir la investigación de los delitos y faltas así como la actuación de la policía.

b) Disponer la presencia en su despacho del indagado, de testigos y peritos.

c) No iniciar investigación.

d) Proceder al archivo provisional

e) Ejercer el principio de oportunidad reglado.

f) Solicitar medidas cautelares.

g) Deducir acusación o solicitar el sobreseimiento.

h) Atender y proteger a víctimas y testigos.

46.2- Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, es parte en el proceso.

En las diligencias que se practiquen, el Fiscal Letrado actuará directamente o representado por el Fiscal Letrado Adjunto o por un funcionario letrado de la Fiscalía designado por él. En este último caso, bastará con una designación genérica para su efectiva representación.

Articulo 47- (*Independencia técnica*).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y los Fiscales Letrados, actuarán con absoluta independencia en el ejercicio de su respectiva competencia y en el plano técnico.

El Ministerio Público no recibirá órdenes ni directivas provenientes de ningún Poder del Estado, sin perjuicio de la superintendencia correctiva y administrativa que le compete al Fiscal de Corte.

Articulo 48- *(Subrogación del Ministerio Publico por omisión de acusar).-* Vencido el plazo para deducir acusación o su prórroga, el juez ordenará el pasaje del expediente al fiscal subrogante quien tendrá para expedirse los mismos plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al jerarca del Ministerio Publico.

Articulo 49- *(Información y protección a las víctimas).-*

49.1- Durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, de facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos.

49.2- Los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:

a) Entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que deben realizar para ejercerlos;

b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados;

c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo. Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto las actividad señalada en el literal a) de este inciso

SECCION II
LA POLICÍA

Artículo 50- ***(Función de la Policía en el proceso penal).-***

50.1- La Policía y la Prefectura Nacional Naval en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad a las instrucciones que les impartan los fiscales.

50.2- Asimismo, le corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los tribunales.

50.4- Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales, en la investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de conformidad a las previsiones de este Código.

Artículo 51- ***(Dirección del Ministerio Público).-***

51.1- Los funcionarios mencionados en el artículo anterior, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo a las instrucciones que éstos les impartan a los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia natural de las jerarquías respectivas.

51.2- También deberán cumplir las órdenes que les dirijan los jueces para la tramitación del procedimiento.

51.3- Asimismo, deberán cumplir de inmediato y sin más trámite las órdenes que les dicten o impartan los fiscales y los jueces, cuya procedencia,

conveniencia y oportunidad no podrán calificar, sin perjuicio de requerir la exhibición de la autorización judicial previa, cuando corresponda.

Artículo 52- ***(Comunicaciones entre el Ministerio Público y la autoridad administrativa).-*** Las comunicaciones que los fiscales y la autoridad administrativa deban dirigirse con relación a las actividades de investigación de un caso particular, se realizarán en la forma y por los medios más expeditivos posibles.

Artículo 53 - ***(Imposibilidad de cumplimiento).-***

El funcionario de la autoridad administrativa que por cualquier causa, se encuentre impedido de cumplir una orden que haya recibido del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la haya emitido y de su superior jerárquico en la institución a la que pertenezca.

El fiscal o el juez que haya emitido la orden, podrá sugerir o disponer las modificaciones que estime convenientes para su debido cumplimiento o reiterar la orden, si en su concepto no existe tal imposibilidad.

Artículo 54- ***(Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa).***- Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

a) Prestar auxilio a la víctima;

b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;

c) Resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no interviene personal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público designe.

Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de la individualización completa del o los funcionarios intervinientes.

d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos presten voluntariamente en el lugar del hecho, tratándose de los casos a que se alude en los literales b) y c) precedentes;

e) Recibir las denuncias del público;

f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otras normas legales.

Articulo 55- ***(Información al Ministerio Público).***- Recibida una denuncia, la autoridad administrativa informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá cuando corresponda, a realizar las actuaciones previstas en el artículo precedente, respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la autoridad competente.

Articulo 56 - ***(Control de identidad).***-

56.1- La autoridad administrativa podrá además sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal.

56.2- La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, las mismas sólo podrán ser utilizadas con fines identificatorios.

56.3- En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá

conducirla a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación.

56.4- La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma más expedita posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas, transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad.

Articulo 57- (*Derechos de la persona sujeta a control de identidad*).- En cualquier caso que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar, o a la persona que éste indique de su permanencia en la repartición policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas.

Articulo 58- (*Instrucciones generales*).- Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal imparta en cada caso, el Ministerio Público regulará mediante instrucciones generales, el procedimiento con que la autoridad administrativa cumplirá las funciones previstas en los artículos precedentes, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tome conocimiento y respecto de los cuales, los datos obtenidos sean insuficientes para estimar si son constitutivos de delito.

Articulo 59- (*Solicitud de registro de actuaciones*).- El Ministerio Público podrá requerir en cualquier momento los registros de las actuaciones de la policía.

Articulo 60- (*Examen de vestimentas, equipaje o vehículos*).- Se podrá practicar el examen de las vestimentas que lleve el detenido, del equipaje que porte o del vehículo que esté conduciendo, cuando existan serios indicios que permitan estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación.

Para practicar el examen de vestimentas, se comisionará a personas del mismo sexo del imputado y se ejecutarán todas las medidas compatibles con la

correcta ejecución de la diligencia, sin perjuicio de lo previsto en el presente Código.

Articulo 61- ***(Levantamiento de cadáver)***.- En los casos de muerte en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la policía relevará los datos concernientes al hecho. El levantamiento del cadáver podrá ser realizado previa instrucción u orden del fiscal competente, dejando registro de lo obrado, de conformidad con las normas generales de este Código. En ningún caso se procederá a la realización de esta diligencia sin conocimiento u orden fiscal.

Articulo 62- ***(Declaraciones del imputado ante la policía)***.-. La policía sólo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición de declarar, la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuera posible, la policía podrá consignar las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su responsabilidad.

Articulo 63- ***(Prohibición de informar)***.- Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encuentren o puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho presuntamente delictivo.

CAPÍTULO III
EL IMPUTADO

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 64- ***(Imputado)*** .-

64.1- Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya su participación en la comisión de un delito o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes, desde cualquier acto inicial de los procedimientos o durante el desarrollo de los mismos, hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique su conclusión.

64.2- El imputado es parte en el proceso con todos los derechos y facultades inherentes a tal calidad, en la forma y con los límites regulados en este Código.

Articulo 65- (*Derechos y garantías del imputado*).- Todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren la Constitución y las leyes.

Entre otros, tendrá derecho a :

a) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,

b) Designar libremente defensor de su confianza desde la primera actuación del Ministerio Público y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte. Si no lo tuviera se le intimara la designación del mismo, bajo apercibimiento de tenérsele por designado al defensor público que por turno corresponda;

c) Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes;

d) Solicitar del fiscal las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulan;

e) Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual deberá concurrir con su abogado con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación;

f) Conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada reservada y sólo por el tiempo que pueda mantenerse esa reserva, de acuerdo a las normas previstas en el título de la investigación preliminar;

g) Solicitar el sobreseimiento de la causa y recurrir contra la resolución que rechace la petición, en ambos casos mediante intervención de su defensor;

h) Guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;

i) Negarse a prestar juramento o promesa de decir la verdad;

j) No ser juzgado en ausencia.

Articulo 66- ***(Imputado privado de libertad).-*** El imputado privado de libertad tendrá además, las siguientes garantías y derechos:

a) Que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y la orden judicial que la haya dispuesto, salvo el caso de delito flagrante;

b) Que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o aprehensión, le informe sobre los derechos que le asisten;

c) Que cualquier persona proponga para él un defensor determinado, o bien solicitar que se le nombre un Defensor Público, a quien se le intimará la aceptación del cargo inmediatamente.

d) Ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención;

e) Solicitar al tribunal que le conceda la libertad ambulatoria;

f) Que la autoridad administrativa del lugar en el cual se encuentra detenido, informe en su presencia a un familiar o a la persona que éste indique, que ha sido detenido y el motivo de su detención;

g)Tener a sus expensas, las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en el que está detenido;

h) Entrevistarse privadamente con su defensor.

Articulo 67- ***(Reglas sobre la declaración del imputado).-***

67.1-. El tribunal interrogará al imputado en la primera oportunidad sobre su nombre, y demás datos personales para su identificación. La duda, error o falsedad sobre los datos obtenidos no retardarán ni suspenderán el desarrollo de la audiencia preliminar cuando sea cierta la individualización del imputado.

67.2-Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, el imputado podrá hacer nuevas declaraciones y aún solicitar al juez que se le reciba para ello

en audiencia no prevista especialmente en este Código, estándose a lo que resuelva el magistrado. A dicha audiencia, deberán concurrir todas las partes.

67.3- El tribunal se limitará a exhortarlo a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen, sin perjuicio de su derecho a no declarar.

67.4- Si el imputado no conoce el idioma español o si es sordo, mudo o sordo-mudo, el juez dispondrá en tales casos la utilización de peritos intérpretes reconocidos y la formulación de las preguntas y respuestas por escrito, cuando fuere necesario. El juez podrá autorizar también cualquier sistema de comunicación que se estime adecuado.

Articulo 68- ***(Confesión).-***

68.1- La confesión consiste en la admisión por el imputado de los cargos efectuados en su contra.

68.2.- Sólo tendrá valor probatorio cuando:

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción.

b) Sea prestada libremente ante el tribunal y en presencia de su defensor.

Articulo 69- ***(Inimputabilidad).-***

69.1- En cualquier etapa del proceso que se denuncie por alguno de los sujetos, o resulte manifiesto que el imputado en el momento de ejecutar el acto que se le atribuye se encontraba en uno de los casos previstos por los artículos 30 a 33 o 35 del Código Penal, previo dictamen pericial podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especializado.

69.2- Si durante la tramitación del proceso el imputado deviniere inimputable conforme lo expresado en el numeral anterior, previo dictamen pericial podrá ordenarse su internación en un establecimiento especializado.

69.3- El proceso proseguirá el tramite común hasta la sentencia definitiva. En tal circunstancia y previa solicitud fiscal, se declarará al encausado autor inimputable y se le impondrán medidas curativas en sustitución de la pena.

Articulo 70- ***(Minoría de edad).-*** Si en cualquier estado de los procedimientos se comprueba que cuando el imputado cometió el hecho tenía menos de

dieciocho años, se clausurarán las actuaciones y se remitirán los antecedentes al tribunal competente, estándose a lo que éste determine.

Articulo 71- ***(Rebeldía)***.- Queda prohibida la tramitación del proceso penal en rebeldía.

Articulo 72- ***(Declaración de rebeldía)***.-

72.1- Será considerado rebelde el imputado que debidamente citado ante el juez de la causa no comparece y no da justificación razonable de su incomparecencia.

72.2- Comprobada la rebeldía, el tribunal podrá declararla a solicitud del Ministerio Público y librará orden de detención.

72.3- La declaración de rebeldía suspenderá el proceso a su respecto a partir de la comprobación de ese estado.

72.4- Cuando cese la situación de rebeldía, el tribunal lo declarará y el proceso continuará según su estado.

SECCION II
LA DEFENSA

Articulo 73- ***(Derechos y deberes del Defensor)***.-

73.1-El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que ésta expresamente reserve su ejercicio exclusivo a este último.

73.2- El ejercicio de la defensa es un derecho y un deber del abogado que acepta el cargo y abarcará la etapa de conocimiento y la de ejecución.

73.3- El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, con todos los derechos y atribuciones de esa calidad.

73.4- El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público. El juez bajo su más seria responsabilidad funcional,

adoptará las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio de las medidas urgentes y reservadas.

73.5- Todo abogado tendrá derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención la confirmación de encontrarse una persona privada de libertad, en ese o en otro establecimiento, sin perjuicio de la acción de habeas corpus.

Si fuere requerido, el funcionario encargado de esa dependencia estatal deberá extender en el acto una constancia de la información solicitada, consignando que la persona no se encuentra privada de libertad en ese establecimiento.

Articulo 74- ***(Aptitud postulatoria).-*** -Sólo podrá ser defensor quien esté habilitado para ejercer la abogacia en el territorio nacional.

Articulo 75- ***(Designación inicial y aceptación del cargo).-***

75.1- La designación de defensor se efectuará antes de cualquier diligencia indagatoria, salvo las de carácter urgente.

75.2- Si requerido el imputado no realizara la elección, o el elegido no aceptare de inmediato o no se le encontrare, actuará el defensor público que por turno corresponda.

75.3- En todo caso el defensor deberá aceptarlo y constituir domicilio dentro del área correspondiente al tribunal.

Articulo 76- (*Defensa conjunta).-*

76.1- La defensa podrá ser ejercida hasta por dos abogados. En este caso, deberán constituir domicilio común y podrán intervenir en el proceso de manera alternativa, sin formalidad alguna.

76.2- Todo acto procesal realizado por un defensor será eficaz respecto de los restantes que integren esa defensa conjunta.

Articulo 77- (*Defensa común*).-

77.1- La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustente no fueren incompatibles entre sí.

77.2- Si el tribunal advierte una situación de incompatibilidad, la hará presente a los afectados y les otorgará un plazo de cinco días hábiles para que la resuelvan, o para que designen los defensores que se requieran a fin de evitar la incompatibilidad de que se trate.

77.3- Si vencido el plazo, la situación de incompatibilidad no ha sido resuelta o no han sido designados el o los defensores necesarios, el mismo tribunal determinará los imputados que deben considerarse sin defensor y procederá a asignar el defensor publico que por turno corresponda.

77.4- Las resoluciones sobre este punto serán irrecurribles.

Articulo 78- (*Efectos de la ausencia del defensor*).- La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación, acarreará la nulidad de la misma.

Articulo 79- *(Renuncia o abandono de la defensa).-*

79.1- La renuncia formal del defensor no liberará a éste de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que sean necesarios para salvaguardar los derechos del imputado.

79.2- El tribunal deberá notificar al imputado e intimarle la designación de nuevo defensor, concediéndole para ello un plazo de cinco días hábiles bajo apercibimiento de asignarle defensor público que por turno corresponda.

Articulo 80- *(Nombramiento ulterior).-* El imputado puede designar posteriormente otro defensor en reemplazo al anterior, pero el subrogado no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte el cargo.

Articulo 81- *(Prohibición de defensa propia).-* En ningún caso será admisible la defensa propia del imputado, aunque éste invoque y acredite su condición de abogado.

CAPÍTULO IV
LA VÍCTIMA

Articulo 82- ***(La víctima)***.-

82.1- Se considera víctima a la persona ofendida por el delito.

82.2-Al momento de formular instancia o denunciar el hecho podrá manifestar su intención de participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que este Código le asigna.

82.3- En la primera oportunidad procesal la víctima deberá proporcionar sus datos identificatorios, constituir domicilio dentro del radio del juzgado, comunicando los cambios sucesivos y designar abogado patrocinante.

82.4- A las víctimas carentes de recursos que así lo manifiesten, se les designará defensor público.

Articulo 83- (***Representación de la víctima***).-

83.1- En los delitos cuya consecuencia sea la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pueda ejercer los derechos que este Código le otorga, podrán legalmente representarla:

a) Los padres conjunta o separadamente;

b) El cónyuge o los hijos mayores de edad;

c) Los concubinos;

d) Los hermanos;

e) Los hijos adoptivos o padres adoptantes y

f) El tutor , curador o guardador.

83.2- A efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a determinada categoría, excluye a las comprendidas en las siguientes.

Articulo 84- ***(Derechos y facultades de la víctima)***.-

84.1- La víctima del delito ejercerá los derechos que le reconoce este Código, sin perjuicio de los deberes que en la defensa de su interés, deberá cumplir el fiscal.

84.2- Podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código y tendrá entre otros, los siguientes derechos:

a) Obtener información sobre el estado de las actuaciones y el contenido de las resoluciones judiciales que hayan sido dictadas, desde el inicio de la indagatoria preliminar;

b) Proponer prueba durante la indagatoria preliminar, coadyuvando con la actividad instructoria del fiscal;

c) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados realizados en contra suya o de su familia;

d) Solicitar medidas cautelares;

e) Insistir en el ejercicio de la acción penal, mediante la intervención del fiscal subrogante;

f) Ser oída por el tribunal antes de dictar resolución sobre el pedido de sobreseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso.

TITULO III

LA ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

SECCION I
DE LAS CUESTIONES PREVIAS

Articulo 85.- ***(De su falta)***.- Si el ejercicio de la acción penal estuviere condicionado por la Constitución o la ley a la previa realización de cierta actividad o la resolución judicial o administrativa de una cuestión determinada, no serán efectuadas actuaciones judiciales con respecto a la persona a que refiere la condición mientras subsista el impedimento, sin perjuicio de la

práctica de las medidas indispensables para la conservación de la prueba practicada en la forma y con las garantías previstas en este Código.

SECCION II
DE LA INSTANCIA

Articulo 86- ***(Concepto)***.-

86.1- La instancia es la manifestación inequívoca de voluntad del ofendido por un delito, en el sentido de movilizar el proceso penal para la condena de los responsables.

86.2- No constituye instancia la mera noticia de la ocurrencia del hecho.

Articulo 87- ***(Extensión)***.- La instancia dirigida contra uno de los coparticipes del delito se extiende a los otros restantes.

Articulo 88- ***(Legitimados para instar)***.- Están legitimados para instar los padres legitimos, naturales o adoptivos conjunta o separadamente por las ofensas que se hayan inferido a los hijos menores de edad; los hijos mayores de edad por las que se infieran a los padres cuando éstos sean incapaces o se hallen impedidos para actuar; el tutor, curador, guardador o tenedor aún de hecho, por las inferidas a las personas a su cargo; el marido o la esposa, por las hechas al otro cónyuge incapacitado o imposibilitado de actuar; el concubino o concubina more uxorio, por las ofensas inferidas al otro concubino incapacitado o imposibilitado de actuar.

Articulo 89- ***(Contenido de la instancia)***.- En la instancia deberá constar el lugar y fecha de presentación, el nombre, edad, estado, profesión u ocupación y domicilio de quien insta y el hecho al que alude.

Articulo 90- ***(Método para instar)***.- La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito, dejándose en todos los casos constancia en acta. También podrá deducirse necesariamente por escrito, ante las autoridades con funciones de policía.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Articulo 91- ***(Firma de la instancia).-*** La instancia que se formule por escrito será firmada por su autor, en presencia de la autoridad respectiva. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará con la impresión dígito pulgar derecha del interesado o, en su defecto, el dígito pulgar izquierdo. A continuación se dejará constancia que la persona conoce el texto del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformidad.

Articulo 92- ***(Confirmación de la voluntad de instar).-*** Al inicio de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público explicará a quien formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de instar, se la tendrá por bien formulada dejándose constancia en el acta respectiva. Si el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá volver a hacerlo por los mismos hechos.

Articulo 93- ***(Caducidad del derecho a instar).-*** El derecho a instar caduca a los seis meses contados desde la comisión del hecho presuntamente delictivo, o desde que el ofendido o la persona legitimada para instar, tuvo conocimiento del hecho.

Articulo 94- ***(Desistimiento).-***

94.1- Podrá desistirse de la instancia antes de que el Ministerio Público formalice la acusación.

94.2- Cuando la instancia haya sido formulada por uno de los padres, solamente el que instó tiene facultades para desistir.

Articulo 95- ***(Aceptación del desistimiento).-*** Para ser eficaz, el desistimiento deberá ser aceptado por el imputado. Se entenderá que lo acepta, si no manifiesta su oposición dentro de los tres días siguientes al de la notificación

Articulo 96- ***(Efectos del desistimiento).-*** El desistimiento aceptado dará por concluido el proceso, el cual no podrá volver a iniciarse por los mismos hechos.

Articulo 97- ***(Efecto extensivo).-*** En casos de desistimiento de la instancia, sus efectos se extenderán a todos los coparticipes del delito.

Articulo 98- ***(Procedimiento de oficio)***.- En los delitos de violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, rapto, traumatismo y lesiones ordinarias intencionales, se procederá de oficio en los siguientes casos:

a) Cuando el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio;

b) Cuando la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por si en juicio y no hubiere persona legitimada para instar;

c) Cuando el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores, guardadores o tenedores de hecho o de derecho o con abuso de las relaciones domésticas o de la cohabitación;

d) Cuando la persona agraviada fuere menor de dieciocho años y estuviere internada en un establecimiento público;

e) Cuando el delito fuere cometido por quien tuviere respecto de la persona agraviada responsabilidad en la atención de su salud o educación;

f) Cuando la persona agraviada estuviere respecto de quien cometió el delito, en una relación de dependencia laboral.

Articulo 99- ***(Delitos perseguibles a instancia)***.- Son perseguibles a instancia los siguientes delitos: rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que prevean la exigencia de este requisito formal.

CAPÍTULO II
EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD

Artículo 100- ***(Archivo provisional).-***

100.1- En tanto no se haya producido la intervención del tribunal, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparezcan elementos de juicio que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

100.2- La petición será siempre fundada y se someterá a la aprobación del tribunal quien resolverá en definitiva.

100.3- Asimismo, la víctima podrá solicitar al jerarca del Ministerio Publico la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación.

Artículo 101- ***(Facultad para no iniciar investigación).-*** En tanto no se haya producido la intervención del tribunal competente, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no sean constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta petición será siempre fundada y se someterá a la aprobación del tribunal quien resolverá en definitiva.

Artículo 102- ***(Principio de oportunidad).-***

102.1- El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad, o que el delito haya sido presumiblemente cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones;

b) Si se trata de delito culposo que haya irrogado al imputado una grave aflicción, cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que derivan de la aplicación de una pena;

c) Si se trata de delitos de escasa entidad, siempre que se considere que no hay interés público prioritario que justifique su ejercicio.

d) Si hubieren transcurridos cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría, no concurriendo alguna de las causas que suspenden o interrumpen la prescripción.

102.2- Esta petición será siempre fundada y se someterá a la aprobación del tribunal quien decidirá en definitiva controlando su regularidad formal.

TITULO IV
LA ACCION CIVIL

Artículo 103- (***Acción civil***).- La acción civil no podrá ejercerse en sede penal, sin perjuicio de las medidas cautelares que se puedan dictar a petición de parte.

Artículo 104- ***(Facultades de los sujetos de la acción civil).-*** La prohibición precedente no obsta a las facultades procesales que este Código reconoce a la víctima y al tercero civilmente responsable.

Artículo 105- ***(Ejercicio separado de las acciones civil y penal).-*** La acción civil y la acción penal que se fundan en el mismo hecho ilícito, deberán ejercitarse separada e independientemente en las sedes respectivas.

Artículo 106- (***Relación entre los procesos civil y penal).-*** La independencia señalada en el artículo anterior comprenderá a la totalidad de los procesos civil y penal, incluyendo los correspondientes fallos y sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.

Artículo 107- ***(Prueba trasladada, recurso de revisión).-*** Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse al otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Podrá interponerse igualmente en uno de ellos y en mérito a las resultancias del otro, el recurso de revisión civil o penal, que pudiere corresponder según el caso.

TÍTULO V
DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO I
DE LOS REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES

Articulo 108- ***(Remisión)***.- Se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo I, Secciones I, II, III y VI del Código General de Proceso, en lo pertinente, con las exclusiones y modificaciones que se expresan en los artículos siguientes.

Articulo 109- ***(Exclusiones)***.- No se aplican al proceso penal las disposiciones de los artículos 71.3, 71.4, 78, 84, 87 y 89 del Código General del Proceso.

Articulo 110- ***(Idioma)***.-

110.1- Los actos procesales deberán cumplirse en idioma español.

110.2- La declaración de personas que ignoren el idioma español, de sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o lenguaje gestual y los documentos o grabaciones en lengua distinta, o en otra forma de transmisión del conocimiento, deberán ser traducidos o interpretados, según corresponda.

Articulo 111- ***(Lugar)***.-

111.1- El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y el propio tribunal, si correspondiere, podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarque su competencia o si fuere necesario, en cualquier lugar del territorio nacional.

111.2- Excepcionalmente, podrán efectuarse diligencias probatorias en el extranjero, con autorización del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia respectivamente y con el consentimiento de las autoridades competentes del país requerido, conforme a la normativa aplicable.

Articulo 112- ***(Tiempo del proceso)***.- Los tribunales podrán habilitar días y horas según los requerimientos del proceso. Salvo expresa disposición en contrario, se considera hábil todo el tiempo necesario para el diligenciamiento de la prueba.

Articulo 113- ***(De los plazos procesales)***.- La iniciación, suspensión, interrupción, término y cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los actos del proceso penal, se regularán en lo pertinente por las normas del proceso civil con excepción de lo establecido en el articulo 92.2 del Código General del Proceso.

Articulo 114- ***(Forma de actuación)***.- Las sentencias del tribunal y las peticiones de cualquiera de las partes, serán siempre fundadas.

CAPITULO II

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN

Articulo 115- ***(Información)***.- Los medios masivos de comunicación deberán preservar en todo caso, el buen nombre y la identidad de las víctimas, testigos e imputados, bajo las responsabilidades emergentes por los daños y perjuicios causados.

Articulo 116- ***(Derechos del imputado)***.-

116.1- Toda persona respecto de la cual se haya informado por un medio masivo de comunicación su calidad de imputado en un proceso penal, tiene el derecho a que se publique gratuitamente en nota de similares características acerca de su sobreseimiento, absolución o de la clausura del proceso, cualquiera fuera la razón de la misma.

116.2- Si el medio de información se negare a ello, el interesado podrá acudir al procedimiento establecido en la ley correspondiente respecto al derecho de rectificación o de respuesta.

CAPITULO III

COMUNICACIONES

SECCION I
ENTRE AUTORIDADES

Artículo 117- (***Comunicaciones nacionales e internacionales***).- Cuando el tribunal deba dar conocimiento de su resolución a otras autoridades nacionales o internacionales, o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, podrá efectuar la comunicación por cualquier medio idóneo, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales.

SECCION II
A LAS PARTES Y A TERCEROS

Artículo 118- ***(Actos que se notifican).-***

118.1- Toda actuación judicial salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a las partes mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

118.2- Las providencias judiciales que sean pronunciadas en audiencia, se tendrán por notificadas en ella.

Articulo 119- (*Forma de las notificaciones*).-

119.1- Las notificaciones de las providencias judiciales salvo las que sean dictadas en audiencia, serán realizadas en los domicilios constituidos por las partes o en su defecto, en sus respectivos domicilios reales, cuando la ley no disponga especialmente otro modo de hacerlo, sin perjuicio de lo establecido sobre domicilio electrónico.

119.2- A los efectos de esta disposición, los despachos de los fiscales y de los defensores públicos se tendrán como sus respectivos domicilios procesales.

119.3- La sentencia definitiva se notificará a las partes con copia íntegra, autenticada por el actuario. Será notificada además al imputado en el establecimiento de reclusión o en su caso, en el domicilio constituido. Si ello no fuera posible, la diligencia se realizará en el domicilio constituido en autos por el defensor.

CAPITULO IV
DE LOS ACTOS DEL TRIBUNAL Y DE LAS PARTES

SECCIÓN I
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DEL TRIBUNAL

Articulo 120- (*Clasificación*).-

120.1- Sentencia es la decisión del tribunal sobre la causa o punto que se controvierte ante él.

120.2- Las sentencias son interlocutorias o definitivas.

120.3- Sentencia interlocutoria es la que resuelve una cuestión sobre algún artículo o incidente y definitiva es la que resuelve sobre lo principal.

120.4- Las demás providencias que dicta el tribunal son decretos de mero trámite.

Articulo 121- ***(Remisión).-*** Será de aplicación al proceso penal en lo pertinente, lo establecido en el Libro I, Título VI , Capítulo V del Código General del Proceso.

SECCIÓN II
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA

Articulo 122- (*Forma y contenido de la sentencia definitiva*).-

122.1-La sentencia definitiva deberá consignar:

a) La fecha en que se dicta, la identificación de los autos, el nombre del o de los acusados, la mención del representante del Ministerio Público y el defensor que actúan en el juicio y la mención del delito o delitos imputados.

b) Expresará a continuación por Resultandos, las actuaciones incorporadas al proceso relacionadas con las cuestiones a resolver, las pruebas que le sirvieron de fundamento, las conclusiones de la acusación y la defensa y finalmente, debidamente articulados, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados.

c) Determinará luego por Considerandos, el derecho a aplicar respecto de: la tipicidad de los hechos probados, la participación de los imputados, las circunstancias alteratorias de la pena y la modalidad concursal de los delitos.

122.2- La sentencia definitiva puede ser de absolución o de condena.

122.3- La sentencia de absolución examinará el mérito de la causa y destacará la falta de prueba o la existencia de causas de justificación, de inculpabilidad, de impunidad, o de extinción del delito.

122.4- La sentencia de condena expresará los fundamentos de la individualización de la pena y condenará a la que corresponda. También se pronunciará sobre la pena de confiscación y demás accesorias, así como respecto de la aplicación de medidas de seguridad, en su caso.

122.5- La sentencia que imponga medidas de seguridad curativas fundamentará la declaración de inimputabilidad y precisará el régimen de las mismas.

122.6- Dispondrá el destino de las cosas secuestradas y sujetas a confiscación,

122.7- La sentencia absolutoria o la que dispone el sobreseimiento, ordenará que las cosas secuestradas sean devueltas a la persona de quien se obtuvieron.

Articulo 123- (*Principio de congruencia*).-

123.1- La sentencia no podrá imponer pena ni medida de seguridad sin previa petición fiscal, ni superar el límite de la pena o medida requerida por el Ministerio Público.

123-2- No obstante, si por error manifiesto la pena requerida es ilegal, el juez la individualizara de acuerdo con la ley, con circunstanciada exposición de los fundamentos pertinentes, poniendo en conocimiento del hecho al jerarca del Ministerio Público.

Los errores del fiscal serán juzgados eventualmente, en vía administrativa.

Articulo 124- *(Principio de no reforma en perjuicio).-* En segunda instancia y en casación si sólo recurrió la parte del imputado, no se podrá modificar la sentencia en perjuicio de éste.

Articulo 125- (*Efecto extensivo*).- La sentencia de segunda instancia o de casación en el fondo, o de revisión que absuelva a uno de los copartícipes de un delito o establezca una calificación delictual o atenuantes que lo beneficie, debe extender sus efectos a los demás, aún cuando hubiere recaído sentencia ejecutoriada, salvo que se trate de circunstancias referidas sólo al primero.

En la misma sentencia, el tribunal modificará el fallo referido, en cuanto corresponda.

Articulo 126- (*Confiscación o destrucción de instrumentos o efectos destinados a actividades ilícitas).-* Al concluir el proceso penal, aún cuando no recayere sentencia de condena, el tribunal resolverá la confiscación o destrucción de los efectos materiales del delito y de los instrumentos con que fue ejecutado que pudieren ser destinados a actividades ilícitas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

Articulo 127- *(Efectos de la absolución).-*

127.1- La sentencia absolutoria ejecutoriada cierra el proceso definitiva e irrevocablemente en relación al imputado en cuyo favor se dicta.

127.2- La sentencia absolutoria ordenará cuando sea del caso, la libertad del imputado o la cesación de las medidas de coerción que se le hubieren aplicado.

127.3- Aunque la sentencia sea recurrida por el Ministerio Público, la libertad o cese de las medidas limitativas de la libertad del imputado, serán cumplidas con carácter provisional.

Articulo 128- *(Eficacia de la sentencia).-* Las sentencias ejecutoriadas producirán todos sus efectos sin perjuicio de la unificación de penas, cuando corresponda.

Articulo 129- ***(Unificación de penas).-*** La unificación de penas será tramitada en vía incidental, en la causa más antigua y la sentencia a recaer será considerada definitiva a todos sus efectos.

SECCION III
DE LA ACUSACION Y LA DEFENSA

Articulo 130- ***(De la acusación).-***La acusación se formulará por escrito y se ajustará formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia, en lo pertinente.

Deberá contener:

a) los hechos que en definitiva considere probados,

b) la calificación legal de los mismos,

c) la participación que, en ellos, hubiere tenido el o los imputados,

d) las circunstancias alteratorias concurrentes,

e) la petición de la pena o de la medida de seguridad, según corresponda.

Articulo 131- (***De la defensa).-*** La contestación de la defensa se formulará por escrito. Deberá ajustarse formalmente y en lo pertinente a las mismas reglas que rigen la sentencia.

SECCIÓN IV
DE LOS MODOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

Articulo 132- (***Pedido de sobreseimiento).-***

132.1- El Ministerio Público, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia ejecutoriada, podrá desistir del ejercicio de la acción penal solicitando el sobreseimiento por alguno de los fundamentos previstos en el artículo siguiente.

132.2- El tribunal deberá decretarlo sin más trámite, mediante auto fundado exclusivamente en dicha solicitud.

Articulo 133- ***(Procedencia del sobreseimiento).-*** El Ministerio Público deberá fundar el pedido de sobreseimiento en alguna de las siguientes causales:

a) Cuando el hecho no constituya delito.

b) Cuando agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba de que el hecho imputado se ha cometido o que el imputado haya participado en su comisión.

c) Cuando resulte de modo indudable que medió una causa de justificación, de inculpabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal.

Articulo 134- ***(Sobreseimiento a pedido de la defensa).-***

134.1-El tribunal podrá decretar el sobreseimiento a pedido de la defensa en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia ejecutoriada y podrá solicitarlo por los fundamentos previstos en el articulo anterior.

134.2-La defensa podrá solicitar el sobreseimiento una sola vez en la causa y en este caso, el incidente se sustanciará con el Ministerio Público. Si éste no dedujera oposición, el tribunal deberá decretarlo sin más trámite.

Articulo 135- (*Efectos*).- El sobreseimiento tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria, en lo pertinente.

Articulo 136- (*Clausura definitiva*).- Se clausurará definitivamente el proceso cuando concurra alguna de las siguientes causales:

a- Muerte del imputado.

b- Amnistía.

c- Gracia.

d- Indulto.

e- *"bis in idem"*.

f- Prescripción.

Dichas causales podrán ser declaradas en cualquier estado del juicio, de oficio o a petición de parte. En el primer caso, se notificará personalmente a las partes quienes tendrán el plazo perentorio de diez días para impugnar mediante recurso de apelación. En el segundo caso, la petición se tramitará por vía incidental.

SECCIÓN V
DE LAS AUDIENCIAS

Articulo 137- (*Presidencia y asistencia*).-

137.1- Las audiencias serán presididas por el tribunal.

137.2- Las audiencias se celebrarán con la presencia del Juez, del Ministerio Público, del Defensor y del Imputado. La ausencia de cualesquiera de estos sujetos procesales aparejará la nulidad de la audiencia, la cual viciará a los ulteriores actos del proceso y será causa de responsabilidad funcional de los dos primeros y del defensor, según corresponda.

Articulo 138- (*Publicidad*).- Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos:

a) Por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad.

b) Cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso, a juicio del juez y sin ulterior recurso.

c) Cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia, o comprometer un secreto protegido por la ley.

Articulo 139- (*Continuidad*).-

139.1- Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará en el acto la fecha de su reanudación, salvo razones fundadas.

139.2- De no establecerse plazo específico de prórroga, la audiencia deberá fijarse para la fecha más cercana posible, a los efectos de procurar la continuidad del proceso.

139.3- La no realización de cualquiera de las audiencias dentro de los plazos previstos en el presente Código por causas no imputables a las partes, generará responsabilidad administrativa del juez interviniente.

Articulo 140- (*Dirección*).- Las audiencias serán dirigidas por el tribunal. Este ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan y moderará la discusión, impidiendo derivaciones inadmisibles, impertinentes o inconducentes, sin coartar por ello el libre ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa.

Articulo 141- (*Disciplina y control*).- El tribunal deberá adoptar a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias para asegurar el normal y continuo desarrollo de las audiencias, así como la preservación de su decoro y eficacia, estando facultado especialmente para:

a) Disponer el alejamiento de toda persona que no guarde el respeto y silencio debidos en la sala e incluso podrá ordenar el retiro coactivo de ésta.

b) Prohibir al público y a la prensa el empleo de medios técnicos de reproducción y filmación, cuando ello perturbe la regularidad del acto.

Articulo 142- (*Documentación*).-

142.1- Lo actuado en audiencia se documentará en acta que se labrará durante su transcurso. Además, el tribunal dispondrá el registro de lo actuado mediante la utilización de medios técnicos apropiados.

142.2- Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar su fidelidad, estándose en este caso a lo que el tribunal resuelva en el acto. Esta decisión solo será susceptible del recurso de reposición.

TITULO VI

LA PRUEBA

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

Articulo 143-(*Actividad probatoria*).-

143.1- La actividad probatoria en los procesos penales está regulada por la Constitución, los Tratados aprobados y ratificados por nuestro país, por este Código y por leyes especiales.

143.2- Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público y la Defensa. El tribunal decidirá su admisión y podrá rechazar los medios probatorios innecesarios, inadmisibles o inconducentes.

143.3- Las resoluciones dictadas por el tribunal sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, serán apelables con efecto diferido.

Articulo 144- (*Objeto de la prueba).-* El objeto de la prueba en materia penal es:

a) La comprobación de los supuestos fácticos descritos en la ley como configurativo del delito imputado.

b) La averiguación de la participación del imputado en la comisión de los hechos y en que grado.

c) La concurrencia de una causa de justificación, de inimputabilidad, de inculpabilidad o de impunidad.

d) La existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la medida de su responsabilidad penal.

Articulo 145- ***(Certeza procesal).-***

145.1-. No se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en el proceso plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del imputado.

145.2- En caso de duda, deberá absolverse al imputado.

Articulo 146- (*Valoración).-* Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

El tribunal indicará concretamente cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión.

Articulo147- (*Medios de prueba*).- Son medios de prueba la testimonial, el careo, el reconocimiento, la documental, la pericial, la reconstrucción, la inspección judicial, los registros, las interceptaciones e intervenciones y cualquier otro medio no prohibido por la Constitución o la ley, que pueda utilizarse aplicando analógicamente las reglas que disciplinan a los expresamente previstos.

Articulo 148- (*Prueba trasladada).-* Las pruebas producidas en otro proceso sea nacional o extranjero, aún cuando no hubiere mediado contralor de la defensa serán apreciadas por el tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. La defensa podrá solicitar las medidas complementarias que estime del caso.

CAPITULO II
MEDIOS DE PRUEBA

SECCION I
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Articulo 149- (*Derechos del testigo*).- Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, se garantizará, la plena vigencia de los siguientes derechos a los testigos convocados:

a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.

b) A ser informado sobre las resultancias del acto procesal en el que ha participado.

Articulo 150- (*Deber de testimoniar*).- Nadie puede negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley.

Podrá disponerse el interrogatorio de toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados.

Articulo 151- (*Capacidad*).- Toda persona puede atestiguar, sin perjuicio de la facultad del tribunal de apreciar el valor de su testimonio.

Articulo 152- (***Exenciones al deber de testimoniar*).-**

152.1-Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, siempre que no sean denunciantes o damnificados, el cónyuge, aún cuando estuviere separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, los afines en primer grado, los concubinos more uxorio, los padres e hijos adoptivos, los tutores y curadores y los pupilos.

152.2-Antes de iniciarse la declaración y bajo sanción de nulidad, las personas mencionadas serán informadas de su facultad de abstenerse. Ellas podrán ejercer dicha facultad aún durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

Articulo 153- (*Abstención de rendir testimonio*).- Deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial.

153.1-Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se lo haya confiado.

153.2- Los militares y funcionarios públicos si conocen de una información clasificada como reservada o confidencial, salvo que el juez a solicitud de parte considere imprescindible la información. En ese caso, requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar al o los funcionarios públicos que correspondan.

Articulo 154- (*Citación*).-

154.1- Para el examen de testigos, se librará orden de citación en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción en que incurrirá para el caso de incumplimiento.

154.2- En casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio inclusive verbal, dejándose constancia.

154.3- El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

154.4- No se descontará del salario del testigo compareciente el tiempo que estuvo a disposición del tribunal. A su solicitud, se expedirá constancia de su comparecencia.

Articulo 155- (*Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero*).-

155.1-Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar su testimonio, se podrá comisionar la recepción de su declaración por exhorto u oficio al órgano competente de su residencia, siempre que sea difícil o gravosa su concurrencia. A tales efectos, podrá utilizarse el medio técnico más apropiado.

155.2-Sin embargo, si la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio lo requieran, el testigo deberá comparecer a la audiencia que se señale.

155.3- Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto por las normas sobre cooperación judicial internacional.

Articulo 156- (*Compulsión y arresto*).-

156.1- Si el testigo no compareciere sin mediar causa justificada, será conducido por la fuerza pública.

156.2- Si después de comparecer el testigo se negare a declarar, será puesto a disposición del tribunal competente por la responsabilidad penal que le pudiere corresponder.

156.3- Cuando el testigo carezca de domicilio o cuando exista temor fundado de que se oculte, fugue o ausente, el tribunal podrá disponer de oficio o a petición de parte, su arresto a los solos efectos de asegurar su declaración. El mismo no podrá exceder las doce horas.

Articulo 157- (*Testimonio de altas autoridades y miembros del cuerpo diplomático*).-

157.1- No tienen la obligación de comparecer el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, los Intendentes Municipales, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en actividad, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, los Jueces y los Fiscales Letrados..

Estas personas rendirán su declaración a su elección, en su domicilio o en su despacho. El acto de la audiencia no será publico.

157.2- Tampoco tienen obligación de comparecer los miembros del Cuerpo Diplomático o Consular acreditados en el Uruguay. Estas personas rendirán su testimonio conforme a las normas del Derecho Internacional.

Articulo 158- (*Testigo imposibilitado*).- La persona que no pueda concurrir al tribunal por estar físicamente impedida, será examinada en su domicilio o en el lugar donde se encuentre. En este caso, así como en el del artículo anterior, las partes deberán comparecer al acto y formular las preguntas que estimen pertinentes, bajo contralor del juez.

Articulo 159- (*Incomunicación*).- Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. El tribunal resolverá si deberán permanecer incomunicados en la antesala después de declarar.

Articulo 160- (*Reglas para el examen de los testigos*).-

160.1-Antes de comenzar la declaración, el juez advertirá al testigo de su deber de decir la verdad y se le instruirá acerca de las penas con que el Código Penal castiga el falso testimonio.

160.2- Se procederá a interrogar a cada testigo sobre lo siguiente:

a) Su nombre, apellido, edad, estado, profesión u oficio y domicilio y si es extranjero, además los años de residencia en el país.

b) Si conoce al imputado y a los demás interesados en el resultado del proceso, si tiene con alguno de ellos parentesco, amistad, enemistad o relaciones de cualquier clase, dando detalles y si tiene interés de cualquier orden en la causa.

c) Sobre todos los demás hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad con respecto a los hechos que son objeto del proceso.

d) Acerca de todas las circunstancias que sirvan para apreciar su credibilidad y especialmente sobre la razón de sus dichos.

160.3- La declaración de los testigos se sujetará al interrogatorio que efectúen las partes. Estos serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte. Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas a los testigos con el fin de aclarar sus dichos. A solicitud de alguna de las partes el tribunal podrá autorizar nuevo interrogatorio de los testigos que ya hubieren declarado en la audiencia.

160.4- El juez podrá rechazar cualquier pregunta que juzgue inconducente, innecesaria, dilatoria, sugestiva, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio cuando lo considere del caso.

El testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el tribunal lo autorice.

Articulo 161- (*Testigo sospechoso de delito*).-

161.1- Si de la declaración de una persona citada como testigo surgieren indicios que la hicieren sospechosa de delito, se suspenderá la diligencia y en adelante se le aplicará el estatuto del imputado.

161.2- La declaración como testigo de una persona que luego pasa a ser considerada como imputado, no podrá utilizarse en su perjuicio.

Articulo 162- (*Testigos menores de dieciocho años de edad*).-

162.1- El interrogatorio de los testigos menores de dieciocho años, será conducido por el tribunal en base a las preguntas presentadas por el fiscal y la defensa. Podrá recurrirse al asesoramiento de un psicólogo forense u otro profesional especializado. Por regla general no podrán ser interrogados directamente por las partes.

162.2- A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proceso, podrá adoptarse una o más de las siguientes medidas :

a) Pantallas de cristal para ocultar al testigo del imputado, u otros elementos que constituyan barrera física con el mismo efecto.

b) Prestar testimonio desde una sala adyacente al tribunal a través de un circuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto.

c) Recepción en privado, excluyéndose de la sala del tribunal al público y a los medios de prensa.

d) Examen del testigo a través de un intermediario designado por el tribunal, con la función de asistirlo a comprender el interrogatorio. Esta medida será tenida especialmente en cuenta tratándose de menores de doce años de edad.

e) Presencia de un acompañante como apoyo emocional, mientras el testigo presta testimonio. Este puede ser cualquier adulto en que él confíe, siempre que no sea parte, testigo u otro sujeto del proceso.

Articulo 163- (*Testigo que no conozca el idioma*).- Si el testigo no sabe darse a entender por desconocer el idioma español, se utilizarán los servicios de un intérprete.

Articulo 164- (*Testigos discapacitados*).-

a) Tratándose de testigos con discapacidad intelectual o mental se aplicarán las reglas previstas en los artículos precedentes.

b) Al testigo con dificultades de audición y comunicación se le proveerá de un intérprete.

c) Al testigo que no se comunica mediante el habla, se le proveerá de sistemas de comunicación alternativo

d) Al testigo no vidente que deba suscribir el acta, le será leída por el actuario o secretario del tribunal.

Articulo 165- (*Testigos intimidados*).-

165.1- Cuando exista peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo, el tribunal podrá disponer una o mas de las medidas previstas en el artículo 162 de este Código.

165.2- Asimismo, se podrá disponer la reserva de su identidad, de los demás datos personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. Sus datos filiatorios y toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos sobres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la causa y del titular del Ministerio Público interviniente. Uno de los sobres quedará en poder de éste y el otro se remitirá al juez que corresponda. Cuando se establezca esta medida, se dispondrá

además la prohibición de divulgar de cualquier forma su identidad o de cualquier otro dato conducente a ella.

Articulo 166- (*Declaración de la víctima*).-

166.1- Para la declaración de la víctima rigen las mismas reglas prescritas que para la declaración de los testigos.

166.2- Tratándose de víctimas de delitos sexuales menores de dieciocho años personas con discapacidad física, mental o sensorial, la filmación de la entrevista pericial efectuada a la víctima en la etapa de la investigación, podrá incorporarse como prueba testimonial, en cuanto se hayan cumplido las garantías procesales reguladas en este Código, sin perjuicio del derecho de las partes a que se efectúen los correspondientes interrogatorios complementarios o ampliatorios.

Articulo 167- (*Testimonio filmado*).-

167.1-En los casos en que se considere conveniente por las características del testimonio o por sus particulares circunstancias, podrá disponerse la filmación, agregándose el soporte como parte integrante del acto.

167.2- Asimismo, se adoptarán los medios técnicos tendientes a preservar la genuinidad del soporte de la filmación.

SECCION II
DEL CAREO

Articulo 168- (*Procedencia*).-

168.1- Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias importantes. El imputado también podrá solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.

168.2- No procederá el careo entre el imputado y los testigos referidos en los artículos 163 a 166 de este Código.

Articulo 169- (*Reglas del careo*).-

169.1- El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo y les preguntará si las confirman o modifican.

169.2- Acto seguido, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar a los sometidos a careo, exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción que determinaron la procedencia de la diligencia.

SECCION III
DEL RECONOCIMIENTO

Articulo 170- (*Reconocimiento*).- El reconocimiento es el acto ordenado por el tribunal, por el que alguna persona o cosa determinada es examinada o inspeccionada por aquél, o por las personas cuyo informe o testimonio puede ser conveniente para la investigación.

Articulo 171- (*Reconocimiento de personas*).-

171.1- El reconocimiento de personas por testigos, se hará con las reglas de la declaración testimonial y con los siguientes requisitos:

a) Cada testigo lo hará por separado, describiendo previamente al aludido y expresando si antes le ha sido exhibido, debiendo hacerlo desde un lugar donde no pueda ser visto por aquél.

b) El aludido elegirá lugar en la fila de varias personas de aspecto semejante.

c) El declarante dirá si en la fila está la persona aludida y la señalará, manifestando las diferencias que encuentre con su percepción anterior.

171.2- No podrá estar presente en una fila de personas más de un imputado.

171.3- De todo lo actuado se redactará acta y si es posible, se dejará registro mediante el empleo de medio técnico idóneo.

171.4- Deberá presenciar el acto el defensor del imputado.

Articulo 172- (*Reconocimiento por imágenes*).- Cuando no se pudiere efectuar el reconocimiento de personas en las condiciones indicadas en el

artículo anterior, se podrán utilizar imágenes fotográficas o filmicas, observando las mismas reglas en lo pertinente.

Artículo 173- (*Otros reconocimientos*).-

Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las reglas que anteceden, en lo pertinente. Sin perjuicio de labrar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos.

Artículo 174- (*Reconocimiento de cosas*).- Antes del reconocimiento de una cosa se invitará a la persona que debe efectuarlo a que la describa. En lo demás, regirán las disposiciones precedentes.

SECCION IV
DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

Artículo 175- (*Incorporación*).-

175.1-. Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa o prohibición legal o necesidad de previa orden judicial.

175.2-. Durante la etapa de investigación, el fiscal podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición y en caso de negativa, solicitar al tribunal la orden de incautación correspondiente.

175.3- Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado.

175.4- Tampoco podrán admitirse como medio de prueba ni ser utilizadas en modo alguno, las misivas y otras comunicaciones del imputado con su defensor y con personas amparadas por secreto profesional. Esta excepción no rige si

dichas personas son también imputadas, ni cuando aquéllas son medios para la preparación, ejecución o encubrimiento del delito.

Articulo 176- (*Reconocimiento del documento*).-

176.1- Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. Podrán ser llamados también a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos.

176.2- Podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad del documento.

Articulo 177- (*Traducción, transcripción y visualización de documentos*).-

177.1- Todo documento redactado en idioma distinto del español, deberá estar traducido por traductor público para ser incorporado al proceso.

177.2- Cuando el documento consista en una cinta magnetofónica, se dispondrá su transcripción en un acta con intervención de las partes.

177.3- Cuando el documento consista en una cinta de video, se ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las partes.

Articulo 178- (*Instrumentos públicos*).- En lo relativo a la autenticidad de los documentos públicos y la fe que de ellos emana, se aplicarán las disposiciones del derecho civil, salvo que el delito imputado consista en la falsedad material o ideológica del mismo.

SECCION V
DE LA PRUEBA POR INFORMES

Articulo 179- (*Requerimiento de informes*).- Podrán requerirse informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados. El incumplimiento de este requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe o el ocultamiento de datos, generará las responsabilidades correspondientes, sin

perjuicio de las diligencias de inspección, revisión o incautación que fueren necesarias.

SECCION VI
DE LA PRUEBA PERICIAL

Artículo 180- (*Procedencia*).-

180.1- Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.

180.2- Los informes deberán emitirse con imparcialidad, atendiéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito.

180.3- En la audiencia, los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará que sean interrogados por las partes. Los interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte.

180.4- Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas al perito con el fin de aclarar sus dichos.

Artículo 181- (*Remisión*).- La prueba pericial se regirá por lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo III, Sección V del Código General del Proceso, en lo pertinente.

Artículo 182- (*Actuación de los peritos oficiales*).-

182.1- El Ministerio Público podrá requerir como peritos a los miembros del Instituto Técnico Forense, de la Policía Técnica y de otros organismos estatales especializados, que le presten auxilio en la etapa de investigación.

182.2- Asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de expertos de los organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitar al fiscal o al tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente, presentarlos como peritos en la audiencia de prueba.

Artículo 183- (*Honorarios del perito*).- Los peritos designados a solicitud de las partes tendrán derecho a cobrar honorarios. Si la designación fuera efectuada a solicitud del Ministerio Público o de la Defensa Pública, los honorarios serán de cargo del Estado a través del órgano jerarca del solicitante respectivamente, salvo que actúen en cumplimiento de su función pública.

SECCION VII
DE LOS INDICIOS

Artículo 184.- *(Concepto de indicio).-*

184.1-Indicios son las cosas, estados o hechos personales o materiales, ocurridos o en curso, aptos para convencer en alguna medida, acerca de la verdad de las afirmaciones o de la existencia de un hecho que es objeto del proceso, toda vez que no constituyan un medio de prueba específicamente previsto.

184.2- Para que los indicios puedan servir de base a una resolución judicial, deberán estar plenamente probados, ser inequívocos y ligar lógica e interrumpidamente el punto de partida y la conclusión probatoria.

SECCION VIII
DE LA INSPECCION JUDICIAL Y DE LA RECONSTRUCCION DEL HECHO

Artículo 185- (*Inspección judicial*).-

185.1- Podrá comprobarse mediante la inspección de personas, lugares y cosas, las huellas, rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado, describiéndolos detalladamente y recogiendo o conservando en lo posible, lo que tenga eficacia probatoria.

185.2- El tribunal describirá el estado actual del objeto de la inspección y en cuanto sea posible, verificará el preexistente. En caso de desaparición o alteración de los rastros u otros efectos, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

Artículo 186- (*Examen corporal del imputado*).-

186.1- Durante la indagatoria preliminar el juez a solicitud de las partes, puede ordenar el examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación.

186.2- Con esa finalidad, aún sin el consentimiento del imputado pueden efectuarse pruebas biológicas y mínimas intervenciones corporales, siempre efectuadas por profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundadamente un daño para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario, se contará con un previo dictamen pericial.

186.3- Si el examen corporal puede ofender el pudor de la persona, sin perjuicio de que el examen lo realice un médico legista u otro profesional especializado, a petición del imputado debe ser admitida la presencia de una persona de su confianza, labrándose acta del resultado del mismo.

Articulo 187- *(Reconstrucción del hecho)*.-

187.1- La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se cometió de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas diligenciadas, debiendo practicarse con la mayor reserva posible.

187.2-La diligencia se realizará bajo la dirección del tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la misma y sus detalles.

187.3-No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción y cuando participe, regirán las reglas previstas para su declaración.

187.4- El tribunal tomará las medidas del caso para procurar que la concurrencia del público y de los medios de información al acto respectivo, no perturben el desarrollo de la diligencia.

Articulo 188- (*Participación de testigos y peritos*).-

188.1- La inspección judicial y la reconstrucción del hecho deben realizarse preferentemente con la participación de testigos y peritos.

188.2- Asimismo, se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tomen fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la causa.

SECCION IX
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER Y AUTOPSIA

Articulo 189- (*Identificación de cadáver*).-

189.1- Si se tiene conocimiento de la ocurrencia de una muerte presuntamente violenta, antes de procederse al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, se le identificará por todos los medios adecuados.

189.2- La diligencia deberá ser dirigida por el fiscal o quien lo represente con la intervención del médico legista y del personal policial especializado en criminalística.

Articulo 190- (*Autopsia o reconocimiento*).-

190.1- En los casos de muerte en que se sospeche la existencia de un delito o cuya causa no esté determinada se practicará la autopsia, y sólo el reconocimiento cuando el estado del cadáver no la permita, pudiendo incluso disponerse la exhumación.

190.2- El médico actuante describirá minuciosamente la operación e informará sobre la naturaleza de las lesiones, el origen y la causa del fallecimiento y sus

circunstancias, debiendo procurar que la integridad corpórea del cadáver quede restablecida al máximo.

190.3- Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la identificación y conservación de los objetos y elementos que se extraigan del cadáver.

SECCIÓN X
DE LOS REGISTROS

Artículo 191- (*Objeto*).-

191.1-. La autoridad administrativa por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquél, podrá inspeccionar o disponer registros en lugares abiertos cosas o personas, cuando existan motivos suficientes para considerar que se encontrarán rastros de delito, o que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga.

191.2- El registro tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su realización se labrará acta y cuando sea posible, se recogerán o conservarán los elementos materiales útiles.

191.3- Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si éstos han desaparecido o han sido alterados, se describirá su estado actual procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. De la misma forma se procederá cuando la persona buscada no sea hallada en el lugar.

191.4- De ser posible, se levantarán planos de señales, elementos descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica adecuada y necesaria al efecto.

191.5- La autoridad administrativa por orden del fiscal o por sí dando cuenta inmediata a aquél, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se

ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública.

191.6- La retención sólo podrá durar dos horas, luego de lo cual se debe recabar inmediatamente orden judicial para extender en el tiempo la presencia de las personas retenidas.

Articulo 192- (*Registro de personas*).-

192.1- Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, la autoridad administrativa por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquél, procederá a registrarlo. Antes de su realización, se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado.

192.2- El registro se efectuará respetando la dignidad y el pudor de la persona y por persona del mismo sexo.

192.3- El registro puede comprender también el equipaje, bultos, así como el vehículo utilizado. De todo lo actuado se labrará acta.

Articulo 193- *(Registro de lugares no destinados a habitación).-*

Cuando existan motivos razonables para considerar que en determinado edificio o lugar cerrado se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes provenientes de actividad delictiva o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará autorización judicial para el allanamiento y registro respectivos.

Articulo 194- (*Contenido de la resolución*).-

194.1- La resolución de la autoridad competente contendrá: el nombre del fiscal autorizado, la fecha en que se realizará la diligencia, la finalidad específica del allanamiento y la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado.

194.2-Dispuesto el registro, se dará aviso previo a la persona a cuyo cargo estuviere el local, vehículo, buque o aeronave, salvo que a criterio del tribunal, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

Articulo 195-(*Registro de lugares destinados al culto*).- Para el allanamiento y registro de templos y lugares cerrados destinados a cualquier culto cuya celebración sea organizada por instituciones con personería jurídica, se requerirá el aviso a las personas que estén a su cargo directo e inmediato, salvo que a criterio del juez, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

Articulo 196- *(Registros especiales).-*

196.1- El Ministerio Publico podrá solicitar al tribunal el registro de edificios o lugares públicos destinados a oficinas de la Administración Central, Municipal y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, buques y aeronaves privados del Estado, Municipios y Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y se hará efectivo previo aviso al jerarca correspondiente, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia. En estos casos no regirán las limitaciones de tiempo establecidas en el articulo 198 de este Código.

196.2- Para el registro de la Casa de Gobierno, del Palacio Legislativo, de las sedes centrales de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, de los Ministerios o de dependencias militares se requerirá la autorización previa y por escrito del Presidente de la Republica o de los presidentes de los demás órganos afectados por la medida, respectivamente, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia. En estos casos no regirán las limitaciones de tiempo establecidas en el articulo 198 de este Código.

196.3- Con relación al allanamiento y registro de sedes y oficinas de misiones diplomáticas o consulares extranjeras, de organismos internacionales y residencias de sus funcionarios, así como de buques y aeronaves de guerra, se aplicarán los tratados y convenciones internacionales respectivos, en lo pertinente.

196.4- Para los casos en que no exista convención o tratado aplicable, regirán en subsidio, las disposiciones de las convenciones sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y consulares ratificadas por nuestro país.

Articulo 197- (*Desarrollo de la diligencia*).-

197.1- La orden de allanamiento será notificada al morador o a cualquier persona mayor que se encuentre en el lugar. Al notificado se le invitará a presenciar el registro y cuando no se encuentre nadie, ello se hará constar en acta. Si la finca estuviere cerrada y nadie respondiere a los llamados de la autoridad, se procederá a su apertura mediante la intervención de cerrajero, con auxilio de la fuerza publica.

197.2- Al terminar el registro, el lugar quedará debidamente cerrado.

197.3- La diligencia se detallará en acta, que firmará el morador o encargado del lugar. Si éste no puede o no quiere hacerlo, se dejará constancia de ello, entregándosele una copia de la misma.

Articulo 198- (*Registro domiciliario*).-

198.1- El allanamiento y registro de morada o de sus dependencias, solamente podrá realizarse en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol.

198.2- Se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sólo sea en forma transitoria.

198.3- No obstante, podrá efectuarse el registro en horas de la noche, cuando medie consentimiento expreso del jefe del hogar, otorgado por escrito y firmado por éste. Si entre cónyuges o concubinos existen discrepancias sobre el otorgamiento del consentimiento, será válido el otorgado por escrito, por uno de los dos miembros de la pareja. De igual modo se procederá cuando son varios los jefes de familia.

SECCIÓN XI
DE LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE BIENES

Articulo 199- (*Solicitud del Fiscal*).-

199.1- Cuando el propietario o poseedor a cualquier título se niegue a entregar o exhibir un bien que constituye el cuerpo del delito o que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, el fiscal solicitará al juez que ordene su incautación o su exhibición forzosa. La petición deberá ser fundada.

199.2- La autoridad administrativa no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trate de una intervención en delito flagrante o en peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. Cuando exista peligro por la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerla el fiscal. En estos casos se requerirá al juez la correspondiente resolución confirmatoria.

Articulo 200- (*Contenido de la resolución*).-. La resolución de la autoridad competente especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y de ser necesario, otorgará autorización para obtener copia o similar, con indicación del sitio en el que tendrá lugar la diligencia.

Articulo 201- (*Diligencia de secuestro o exhibición*).-.

201.1- Obtenida la autorización, el fiscal la ejecutará inmediatamente contando con el auxilio de la fuerza pública. Señalará día y hora para la realización de la misma y si no perjudica su finalidad, lo hará con citación de las partes. Al inicio de la diligencia se entregará copia de la autorización al interesado, si se encuentra presente.

201.2- Los bienes objeto de incautación serán registrados y debidamente individualizados. De la ejecución de la medida se labrará acta, identificando a quien asume la responsabilidad o custodia del material incautado y será firmada por los intervinientes en el acto.

Articulo 202- (*Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos*).-

202.1-. El fiscal o la autoridad administrativa con autorización del tribunal, podrá devolver a la víctima o a terceros los objetos incautados. Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieran ninguna relación con el delito.

La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, con citación de todos los interesados que resulten de los antecedentes, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario.

202.2- Los bienes sustraídos a la víctima le serán entregados a ésta.

Articulo 203- (*Entrega definitiva*).- Una vez concluida la causa penal, si en el plazo de treinta días de notificado el interesado no fueran deducidas pretensiones en sede civil sobre las cosas entregadas provisionalmente, dicha entrega se tornará definitiva.

Articulo 204- (*Cosas no reclamadas*).-

204.1- Transcurrido un año de ejecutoriada la sentencia definitiva u otra forma de conclusión de la causa, o del archivo de la investigación preliminar, el tribunal podrá disponer el remate de las cosas secuestradas que no hubieran sido reclamadas o cuyas respectivas reclamaciones hubieran sido desestimadas por sentencia ejecutoriada.

204.2- El producto del remate quedará a la orden del tribunal y los interesados podrán hacer valer sus derechos sobre esa suma, mientras no se produzca la caducidad respectiva.

SECCION XII
DE LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS

Articulo 205- (*Incautación de documentos*).-

205.1- Los documentos públicos y privados pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación.

205.2- Quien tenga en su poder los documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso su original, salvo que

invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la resolución del tribunal.

Articulo 206- (*Copia de documentos incautados*).-

206.1-. El fiscal deberá restituir los documentos incautados manteniendo copia de los mismos, salvo que aquéllos sean indispensables para la investigación, en cuyo caso se expedirá copia si el interesado lo solicita.

206.2- Debe entregársele copia del acta realizada a la persona u oficina en la cual se efectuó la incautación.

SECCION XIII
DE LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL Y ELECTRÓNICA

Articulo 207- (*Autorización*).-

207.1-. El Ministerio Público solicitará al tribunal competente la interceptación, incautación y ulterior apertura de cualquier correspondencia, envío postal correo electrónico, dirigido o enviado al imputado aún bajo nombre supuesto, o de aquellos que le fueren atribuibles por cualquier motivo.

207.2- Están excluidas de la autorización prevista en este artículo, las comunicaciones que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo.

207.3- Tratándose de tercero, podrán dictarse las mismas medidas siempre que el juez tenga motivos seriamente fundados para suponer que de las mencionadas comunicaciones, pueda resultar la prueba de la participación en un delito.

207.4- En todos los casos previstos en este artículo se labrará el acta correspondiente.

Articulo 208- (*Ejecución*).-

208.1- Recabada la autorización, el fiscal efectivizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación.

208.2- El fiscal examinará el contenido del envío postal retenido. Si tiene relación con la investigación, dispondrá su incautación dando cuenta al tribunal. Si no tuviere relación con el hecho investigado, será devuelto a su destinatario.

Articulo 209- (*Obligación de la persona requerida*).- Quien tenga en su poder la correspondencia requerida está obligado a entregarla inmediatamente al fiscal, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la decisión del tribunal.

SECCION XIV
DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

Articulo 210- *(Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación).-*

210.1- Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un hecho punible, el fiscal podrá solicitar al juez la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. El tribunal resolverá inmediatamente mediante trámite reservado, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal.

210.2- La orden judicial puede dirigirse contra terceras personas en los mismos términos de lo dispuesto en el articulo 207.3 de este Código.

210.3-. No se pueden interceptar las comunicaciones entre el imputado y su defensor, salvo que el tribunal lo ordene por estimar fundadamente que el abogado puede tener responsabilidad penal en los hechos investigados. De ello se dejará constancia en la respectiva resolución.

210.4- La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre del afectado por la medida y de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la

forma, alcance y duración de la medida, al igual que la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia.

210.5- Si los elementos de convicción tenidos en cuenta para ordenar la medida, desaparecieran o hubiera transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, deberá ser interrumpida inmediatamente.

Articulo 211- (*Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación).-*

211.1- La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación de que trata el artículo anterior, será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro.

211.2- El fiscal dispondrá la transcripción escrita de la grabación, labrándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales.

Articulo 212- (*Intervención de las comunicaciones de altas autoridades públicas).-*

212.1- El fiscal solo podrá solicitar al tribunal la intervención de las comunicaciones del Presidente de la Republica, Vicepresidente de la República, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario de la Presidencia de la Republica, Miembros del Directorio del Banco Central del Uruguay, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, previa autorización del Fiscal de Corte.

212.2- La misma autorización será necesaria para solicitar al juez, la prórroga de la medida.

SECCIÓN XV
DE LA VIDEOVIGILANCIA

Articulo 213- (*Presupuesto y Ejecución*).-

213.1- El fiscal con noticia al juez y sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

a) Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes;

b) Utilizar otros medios técnicos especiales en lugares abiertos expuestos al público.

213.2- Se requerirá autorización judicial cuando dichas actividades se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados.

SECCIÓN XVI
DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LA RESERVA TRIBUTARIA

Articulo 214- (*Levantamiento del secreto bancario*).-

214.1- El tribunal por resolución fundada podrá ordenar a solicitud del fiscal el levantamiento del secreto bancario, en los términos previstos en el articulo 25 del Decreto- Ley 15.322 del 17 de Setiembre de 1982.

214.2- También podrá disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas depositadas y cualquier otro bien económico o financiero y aún el bloqueo e inmovilización de las cuentas.

214.3- Dispuesta la incautación, el fiscal observará el procedimiento señalado en los artículos 205 y 206 de este Código.

Articulo 215 - (*Levantamiento de la reserva tributaria*).-

215.1- El tribunal a pedido del fiscal podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la administración tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando ello resulte necesario y pertinente para el esclarecimiento del hecho investigado.

215.2- La administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenadas por el juez.

CAPITULO III
PRUEBA ANTICIPADA

Articulo 216- (*Supuestos de la prueba anticipada).-* El fiscal o el defensor podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en forma anticipada en los siguientes casos:

a) Declaración de testigos e informe de peritos, cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente.

b) Declaración de testigos, cuando exista la probabilidad de que la espera a la realización de las audiencias del proceso, les cause un perjuicio severo o ponga en riesgo serio la calidad de la prueba testimonial.

c) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles.

d) El diligenciamiento de cualquier medio probatorio, cuando el transcurso del tiempo pudiere frustrar su realización o perjudicar su eficacia.

Articulo 217- (*Procedimiento).-*

217.1- La parte que solicite el diligenciamiento de prueba anticipada deberá precisar su objeto y las razones de su importancia para el proceso. También indicará el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia.

217.2- El trámite se dispondrá con citación de la parte contraria, salvo que esa comunicación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

En este último caso, una vez diligenciada la misma se dará conocimiento de lo actuado a la contraparte, quien tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba en la etapa procesal oportuna.

217.3- La prueba anticipada se diligenciará de conformidad con las reglas referidas al medio probatorio pertinente.

Articulo 218- (*Impugnabilidad*).-

218.1- La parte contra quien se pide la medida podrá oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación en el plazo de la citación. El tribunal resolverá sin ulterior recurso.

218.2- La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio.

218.3- Cumplida la medida si mediare agravio, cualquiera de las partes podrá apelar conforme a lo dispuesto en éste Código, sin efecto suspensivo.

TITULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I
REGLA GENERAL

Articulo 219- (*Principio*).- Es atribución del tribunal adoptar las medidas cautelares reguladas en este título cuando ello le fuere requerido en forma.

CAPITULO II
DE LA PRIVACIÓN O LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD FÍSICA DEL IMPUTADO

SECCIÓN I

SOBRE LA LIBERTAD FÍSICA DE LAS PERSONAS

Articulo 220- (*Estado de inocencia*).- En todo caso el imputado será tratado como inocente hasta tanto no recaiga sentencia de condena ejecutoriada. La prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena..

Articulo 221- (*Principio general*).- Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a lo dispuesto en las normas constitucionales.

Articulo 222- (*Flagrancia delictual*).- Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos:

a) Cuando una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito;

b) Cuando inmediatamente después de la comisión del delito, una persona fuere sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo;

c) Cuando en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuere hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito.

Articulo 223- *(Detención en flagrancia delictual).-* La autoridad administrativa deberá detener aún sin orden judicial, al que sea sorprendido en flagrancia delictual.

En las mismas circunstancias cualquier particular podrá proceder a la detención y entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.

En tales casos se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Publico, quien tomará las medidas pertinentes y pondrá al detenido a disposición del tribunal competente, el que adoptará las medidas que correspondan.

SECCION II
MEDIDAS DE COERCION

Artículo 224- (*Medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria*).-

224.1- El fiscal podrá solicitar al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado, su integridad o la de la víctima, o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que se indican a continuación:

a) Deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal;

b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez, o ante la autoridad que él designe;

d) La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;

e) La retención de documentos de viaje;

f) La prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

g) El retiro inmediato del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;

h) La prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido económico adecuada y proporcional a la importancia del caso que se está investigando.

i) El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;

j) La vigilancia del imputado, mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o de su ubicación física;

k) Prohibición de abandonar el domicilio o residencia por determinados días u horarios, en forma que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias.

l) Cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, en las condiciones previstas en la ley;

m) La prisión preventiva, en el caso en que las medidas limitativas anteriormente descriptas no fueren suficientes para asegurar los fines indicados precedentemente.

224.2.- Las medidas de coerción enunciadas en este artículo pueden ser complementadas con medidas cautelares respecto de bienes del imputado o de terceros, dictadas por el juez a solicitud de parte.

Artículo 225- ***(Medidas limitativas durante la indagatoria preliminar).-*** Asimismo, desde el inicio de la indagatoria preliminar el tribunal a petición del Ministerio Publico solamente podrá disponer las medidas referidas en los literales a), d) y f) del artículo precedente, con la finalidad de asegurar el resultado de la investigación por el plazo que el tribunal disponga.

SECCION III
DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Artículo 226- ***(Procedencia de la prisión preventiva).-*** Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva.

Artículo 227- ***(Requisitos para disponer la prisión preventiva).-*** Iniciado el proceso, el tribunal a petición del Ministerio Público podrá decretar la prisión preventiva del imputado, siempre que se acredite sumariamente y en forma simultánea que existen elementos de convicción suficientes de que:

a) presuntamente el delito imputado se ha cometido,

b) presuntamente el imputado ha tenido participación en la comisión del mismo y

que es indispensable para no entorpecer la investigación o que exista peligro de fuga del imputado.

Artículo 228- (*Entorpecimiento de la investigación*).- Se entenderá que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación, cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizarla mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios, o cuando exista la presunción de que podrá inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros, a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

Artículo 229- (*Peligro de fuga*).- Para determinar la existencia de peligro de fuga se tendrán en cuenta entre otras, las siguientes pautas:

a) Desarraigo determinado por la ausencia de domicilio o residencia habitual asiento de la familia, o de sus negocios o trabajo y de las facilidades con que cuente para abandonar el país o de permanecer oculto.

b) Las circunstancias, la naturaleza del hecho y la gravedad de la pena asignada al delito imputado.

c) Que el imputado oculte información sobre su identidad o domicilio, o que los hubiera proporcionado falsamente.

Artículo 230- (*Sustitución de la prisión preventiva*).-

230.1- Podrá suspenderse o no aplicarse la prisión preventiva sustituyéndola por otra medida limitativa de la libertad ambulatoria, cuando:

a) se trate de imputadas cursando los últimos meses de embarazo;

b) de imputadas madres durante el primer año de lactancia;

c) de imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe médico correspondiente;

d) de imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos, considerando las circunstancias del delito cometido.

230.2- El juez a pedido de parte podrá ordenar la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial adecuado, cuando proceda la

prisión preventiva pero se acredite por informe pericial que el encausado sufre una grave enfermedad física o una alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud.

Artículo 231- (*Prohibición de imponer prisión preventiva*).-

231.1- No se impondrá prisión preventiva :

a) Cuando se trate de procedimiento por faltas;

b) Cuando el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de inhabilitación;.

c) Cuando el tribunal considere que en caso de recaer sentencia condenatoria, se le aplicará al encausado alguna pena alternativa a la privación de libertad.

231.2- Sin perjuicio de ello, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio hasta su finalización, presentarse a los actos de procedimiento para los cuales sea citado y posibilitar el efectivo cumplimiento de la sentencia a recaer.

Artículo 232- (*Trámite de la solicitud*).-

La solicitud de prisión preventiva deberá formularse por el fiscal en audiencia o fuera de ella tramitando de acuerdo a las disposiciones de este Código.

Artículo 233- (*Contralor del cumplimiento de la prisión preventiva*).-

233.1- El tribunal que impuso la prisión preventiva será competente para supervisar la ejecución de la medida.

233.2- Corresponderá a este magistrado conocer de las solicitudes formuladas en ocasión de su cumplimiento, sin perjuicio de la intervención del Juez de Ejecución y Vigilancia, toda vez que en el desempeño de su función éste advierta la violación de los derechos humanos del imputado. En tal caso, pondrá los hechos en conocimiento del juez competente, estándose a lo que éste resuelva en definitiva.

Artículo 234- (*Condiciones de cumplimiento de la medida cautelar*).- La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, separados de aquellos lugares de reclusión donde son alojados los condenados con sentencia ejecutoriada. La autoridad competente dispondrá lo necesario para el efectivo cumplimiento del designio legal.

Articulo 235- ***(Revocación o sustitución).-***

En cualquier estado del proceso y antes de que haya recaído sentencia de condena ejecutoriada, el Juez a petición de parte podrá disponer la revocación o sustitución de la prisión preventiva, toda vez que hayan desaparecido los presupuestos en que se haya fundado su imposición.

Articulo 236- ***(Procedimiento de la revocación o sustitución).-***

236.1- La solicitud podrá ser formulada por la parte interesada, en audiencia o por escrito fuera de ella.

236.2- Si se efectuare fuera de audiencia, del petitorio se conferirá vista a la contraria, la que dispondrá de un plazo máximo de tres días para pronunciarse. El juez dispondrá a su vez, de un plazo máximo de quince días para dictar resolución fundada..

236.3- Si se efectuare en audiencia, se tramitará y resolverá en la misma.

236.4- En ambos casos, la resolución denegatoria será apelable sin efecto suspensivo en la forma y plazo previstos en éste Código.

Articulo 237- ***(Incumplimiento de medidas limitativas de la libertad).-***

237.1- Podrá imponerse prisión preventiva al imputado cuando haya incumplido alguna de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en el artículo 224 de este Código.

237. 2- En este caso, el fiscal podrá solicitar la imposición de prisión preventiva la que se tramitará por el mismo procedimiento establecido en el articulo precedente-

Artículo 238- ***(Límite temporal).-***

238.1- Cesará la prisión preventiva en las siguientes situaciones:

a) Cuando el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal.

b) Cuando el imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada.

c) Cuando el imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anticipada.

d) Cuando hayan transcurridos más de tres años contados desde el momento efectivo de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación.

e) Al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzara a cumplirse la pena privativa de libertad.

f) Al disponer el sobreseimiento o recaer sentencia absolutoria.

238.2- Para resolver estas cuestiones, el trámite se seguirá por la vía incidental.

SECCION IV
DE LAS CAUCIONES

Artículo 239- ***(De las cauciones).-*** La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real.

Al acordarla, el juez podrá imponer al imputado todas o algunas de las siguientes obligaciones:

a) Fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento del juez o tribunal que conozca en la causa.

b) No concurrir a determinados lugares.

c) Presentarse a la autoridad los días que ésta determine.

d) Permanecer en su domicilio durante un horario determinado.

La resolución que imponga estas restricciones no causa estado. El juez podrá fijar un plazo para su duración y en cualquier momento ampliarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto.

Artículo 240- ***(Finalidad de las cauciones).-*** Las cauciones tienen por finalidad asegurar que el imputado cumpla los deberes impuestos por el juez.

Articulo 241- ***(Determinación de las cauciones).-*** Para determinar la calidad y el monto de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica y antecedentes del imputado, la naturaleza del daño causado y el monto aproximado de las reparaciones civiles que puedan corresponder. El juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de infringir los deberes impuestos.

Articulo 242- ***(Caución juratoria).-*** La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez y procederá en los casos siguientes:

a) Cuando sea presumible que se pueda beneficiar con la suspensión condicional de la pena.

b) Cuando el imputado sea notoriamente pobre y desvalido.

Articulo 243- **(*Caución real*).-** La caución real consistirá en la afectación que en garantía de la suma fijada por el juez, se haga por el mismo imputado o por otra persona, de bienes determinados, muebles o inmuebles.

Podrá constituirse en forma de depósito de dinero u otros valores cotizables, otorgando hipoteca o prenda, o cualquier otra forma de garantía que resulte eficaz y suficiente a criterio del juez.

Articulo 244- **(*Caución personal*).-**

244.1- La caución personal consiste en la obligación que conjuntamente con el imputado asume uno o más fiadores solidarios, de pagar la suma que el juez fije de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo precedente.

244.2- Puede constituirse en fiador quien tenga capacidad para contratar y sea además, persona de notoria honradez y solvencia económica. Esta última se comprobará mediante la exhibición de títulos o documentos formales.

El juez apreciará la existencia de todos estos requisitos.

Articulo 245- (*Forma de las cauciones*).- Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en acta suscrita ante el actuario o secretario en su caso.

En el caso de lo dispuesto por el artículo 243 de este Código en cuanto fuere pertinente, el acta se labrará por el actuario en presencia del juez, o por el secretario en presencia del presidente del tribunal respectivo, disponiéndose su inscripción en el registro correspondiente, a cuyo efecto bastará con el simple testimonio del acta de caución.

Articulo 246- (*Fijación de domicilio y notificaciones*).-

246.1- En el acto de prestar caución el imputado, el fiador y todo otro otorgante de la misma, deberá fijar domicilio dentro del radio del juzgado para las citaciones y notificaciones ulteriores.

246.2- En caso de que el imputado no pudiere fijar domicilio dentro del radio del juzgado, se tendrá por tal el constituido en autos por su defensor.

Las citaciones y notificaciones que deban hacerse al imputado, se harán también al caucionante cuando tuvieren relación con las obligaciones de éste.

Articulo 247- (*Extinción de la liberación bajo caución*).- Las cauciones se harán efectivas si el imputado no comparece a la citación que se le haga durante el proceso.

En tal caso y sin perjuicio de librar orden de prisión contra el imputado, el juez fijará un plazo no mayor de veinte días para que comparezca, notificando de ello en los domicilios constituidos a éste y al caucionante, apercibiéndolos de que al vencimiento de ese plazo la caución se hará efectiva si el imputado no comparece o no se justifica debidamente un caso de fuerza mayor que impida su comparecencia.

Al vencimiento del plazo, el juez dictará resolución declarando sin efecto la liberación provisional.

Articulo 248- (*Efectividad de las cauciones*).-

248.1- En la resolución prevista en el inciso final del artículo precedente, el juez dispondrá que se haga efectiva la caución por la vía de apremio.

248.2- Cuando la caución consista en inmuebles hipotecados o cosas dadas en prenda, se venderán en remate público y al mejor postor, previa tasación.

248.3- Los títulos de deuda pública y valores cotizables, se enajenarán por corredores de bolsa al precio corriente en plaza.

248.4- La fianza personal se ejecutará contra bienes del fiador o fiadores solidarios, hasta hacer efectiva la cantidad que se haya fijado al admitir la referida fianza.

248.5- En todos los casos actuará como ejecutante el Fiscal Letrado de Aduana y Hacienda ante la sede civil competente. El destino del producido será asignado al Poder Judicial en calidad de recursos de libre disposición destinados a solventar gastos en el fortalecimiento de las oficinas judiciales en materia penal.

Articulo 249- ***(Cancelación de las cauciones).-*** La caución será cancelada y las garantías serán restituidas:

a) Cuando revocada la excarcelación, el imputado fuere sometido a prisión.

b) Cuando se absuelva en la causa o se sobresea al imputado.

c) Cuando recayese pronunciamiento firme otorgando la libertad condicional del condenado.

Articulo 250- ***(Sustitución del caucionante).-*** Si el caucionante por motivos fundados no puede continuar como tal, podrá pedir al juez que lo sustituya por otra persona que él presente y ofrezca análogas garantías.

Si el juez considera aceptable la causa y apta la persona propuesta, dispondrá la sustitución.

La sustitución aceptada por el juez libera al precedente caucionante sólo para el futuro.

Artículo 251- ***(Autorización para salir del país).-*** El excarcelado provisional podrá ser autorizado a salir del país, con conocimiento de causa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la caución sea de carácter real o personal;

b) Que *"prima facie"* no sea necesaria la presencia del imputado a los efectos de la indagatoria;

c) Que la autorización se conceda por un lapso prudencial, determinado por el juez en la respectiva resolución.

En caso de incumplimiento de regreso al país, el juez aplicará lo dispuesto en los artículos 248 y 249 de este Código

Articulo 252- ***(Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento).-***

El tribunal deberá disponer el cese de la prisión preventiva cuando dicte sentencia absolutoria o se decrete el sobreseimiento, aunque dichas resoluciones no se encuentren ejecutoriadas.

En tales hipótesis, se podrá imponer en sustitución de la prisión preventiva alguna de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 224, cuando éstas se consideren necesarias para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

CAPITULO III
DE LAS CAUTELAS ASEGURATIVAS SOBRE LOS BIENES

Articulo 253- ***(Medidas sobre los bienes del imputado)***

253.1- El juez podrá decretar a petición del Ministerio Público o de la víctima las medidas cautelares sobre los bienes del imputado que estime indispensables para proteger los derechos de las víctimas, siempre que exista peligro de su lesión o frustración.

253.2-También podrá decretar dichas medidas sobre bienes del tercero civilmente responsable, previa justificación sumaria del vinculo.

253.3- La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente.

253.4- El juez fijará la extensión de la medida y exigirá la previa prestación de garantía real o personal, salvo que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante, o que se trate del Estado u otra persona jurídica de derecho público.

253.5- Estas medidas se ajustarán en cuanto a su objeto y limitaciones, a los principios establecidos en el Código General del Proceso y leyes especiales.

Articulo 254- ***(Excepciones).-*** Las medidas previstas en el artículo precedente, no podrán ordenarse contra el Estado ni contra personas jurídicas de Derecho Público.

Articulo 255- ***(Transferencia de las medidas cautelares a la sede civil).-*** La víctima deberá acreditar que dedujo demanda civil dentro de los treinta días de efectivizadas las medidas. En este caso, el tribunal las transferirá a la sede correspondiente. Si así no lo hiciere, el afectado por las medidas podrá solicitar su levantamiento lo que el tribunal dispondrá con citación contraria.

Articulo 256- ***(Recursos).-*** Cuando la resolución ordene la medida solicitada u otra similar, la misma será apelable sin efecto suspensivo.

Articulo 257- ***(Cumplimiento de las medidas).-*** Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente después de haber sido decretadas y se notificará a la parte a quien perjudica, una vez cumplidas.

LIBRO II

DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO

TÍTULO I

PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS

Articulo 258- El proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda instancia y casación.

CAPÍTULO I

DE LA INDAGATORIA PRELIMINAR

Articulo 259- (***Formas de inicio***).-

259.1- La investigación de un hecho presuntamente delictivo deberá iniciarse:

a) Cuando exista flagrancia delictual;

b) Por denuncia o instancia, formulada de acuerdo a las previsiones de este Código;

c) Por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

259.2- Cuando el fiscal tome conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, deberá disponer las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme lo dispuesto en este Código.

Artículo 260- ***(La denuncia).-*** Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un presunto hecho delictivo. También podrá formularse la denuncia ante la autoridad administrativa competente o ante cualquier tribunal con competencia penal, los que deberán remitirla inmediatamente al Ministerio Público.

Artículo 261- ***(Forma y contenido de la denuncia).-***

261.1- La denuncia podrá formularse en forma escrita o verbal y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación *de la o las* personas involucradas en el mismo y en su caso de quienes lo hayan presenciado o tengan noticia de él.

261.2- La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la formula ante el funcionario que la reciba y cuando no supiere o no pudiere firmar lo hará otra persona a su ruego.

261.3- En el caso de denuncia verbal, el funcionario actuante dejará constancia por escrito, la que será firmada por el denunciante y por el propio funcionario. Si el denunciante no sabe o no puede firmar, lo hará un tercero a su ruego.

Artículo 262- ***(Reserva de las actuaciones de investigación).-***

262.1- La actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso, no se integrará en ningún caso a éste, salvo cuando se requiera la intervención del tribunal.

262.2- Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal.

262.3- Sin embargo, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación. En este caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, y se podrá fijar un plazo de hasta cuarenta días para su mantenimiento, previa autorización judicial. Dicho plazo podrá ser

prorrogado por el juez mediante petición fundada del Ministerio Público hasta por un plazo máximo de seis meses.

262-4- El imputado y su defensor podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva o que la limite en cuanto a su extensión, a las piezas o actuaciones comprendidas en la misma o a las personas a quienes afectare.

262.5- Sin perjuicio de lo establecido, no se podrá decretar la reserva para el imputado y su defensor respecto de su declaración, de los informes brindados por peritos referentes a su persona, o de cualquier otra actuación en que hubiere intervenido él o su defensor.

262.6- Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto.

Artículo 263- ***(Solicitud de diligencias).-*** Durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes.

Artículo 264- ***(Personas citadas por el fiscal).-*** Si en el desarrollo de la investigación el fiscal requiere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si el citado no comparece, el fiscal podrá solicitar al juez que así lo disponga, incluyendo su conducción compulsiva si es necesario.

Artículo 265- ***(Formas de comparecencia del imputado ante el fiscal).-***

265.1- Durante la investigación preliminar, el imputado deberá comparecer ante el fiscal cuando éste lo disponga.

265.2- Si no comparece voluntariamente, el fiscal podrá solicitar al juez que ordene su conducción.

265.3- Cuando el imputado se encuentre privado de su libertad, el fiscal solicitará al juez su conducción ante él, toda vez que ello sea necesario a los fines de la investigación.

Artículo 266- ***(Comparecencia del imputado).-***

266.1- Cuando el imputado comparezca ante el fiscal, deberá hacerlo asistido de defensor. Si se trata de su primera declaración, antes de comenzar el interrogatorio, el fiscal le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atribuye, los resultados de la investigación en su contra y su derecho a no declarar.

266.2- El imputado no podrá negarse a proporcionar su identidad, debiendo responder a las preguntas que con tal fin se le formulen, registrándose todo lo actuado.

Artículo 267- ***(Registro de las actuaciones).-*** El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realice, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma del imputado, su defensor y la víctima.

La constancia de cada actuación deberá consignar por lo menos, la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas intervinientes, así como una breve relación de sus resultados.

Artículo 268- ***(Duración máxima de la investigación preliminar cuando el imputado no está privado de libertad).-*** La investigación preliminar no podrá extenderse en ningún caso por un plazo mayor de un año contado desde su inicio, cuando el imputado no se encontrare privado de libertad. En casos excepcionales debidamente justificados, el fiscal podrá solicitar al juez la ampliación del plazo hasta por un año más, estándose a la resolución irrecurrible del magistrado actuante.

Artículo 269- ***(Formalización de la investigación).-***

269.1- El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno iniciar el procedimiento respecto de un imputado, por medio de la intervención judicial.

269.2- Si el fiscal decide formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrare detenido, solicitará al tribunal por escrito el señalamiento de audiencia.

La solicitud deberá contener en forma clara y precisa:

a) La individualización del o los imputados y de su defensor;

b) La relación circunstanciada del o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica;

c) La participación atribuida al imputado;

d) La expresión de los preceptos legales aplicables;

e) Los medios de prueba de que el Ministerio Público pensare valerse en el juicio.

g) La solicitud de medidas limitativas de la libertad ambulatoria y/o cautelares, en su caso.

269.3- Si el imputado se encontrare detenido, el fiscal deberá solicitar el señalamiento de la audiencia mencionada en forma inmediata a su detención. En este caso podrá hacerlo verbalmente cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral anterior.

Articulo 270- (***Efectos de la formalización de la investigación***).- La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

CAPÍTULO II

DE LAS AUDIENCIAS

Articulo 271- (***Audiencia preliminar***).-

271.1- Conforme a lo dispuesto por el articulo 137 de este Código, la audiencia preliminar será presidida por el tribunal y a ella deberán comparecer el fiscal y el imputado asistido de defensor, y podrá ser realizada en una o varias sesiones.

271.2- Si el imputado no hubiera designado defensor, el tribunal le intimará su designación previo a la realización de ésta, de acuerdo a lo previsto en el articulo 65 de este Código. A efectos de que el defensor designado pueda

prestar su aceptación al cargo y comparecer, podrá prorrogarse la audiencia por veinticuatro horas.

271.3- Si el imputado se encontrare detenido, se convocará audiencia dentro de veinticuatro horas, cumpliéndose lo previsto en el articulo 16 de la Constitución de la República.

271.4- La víctima será citada y si comparece deberá tener asistencia letrada.

Artículo 272- (*Desarrollo de la audiencia preliminar).-*

272.1- El juez interrogará al imputado sobre sus datos identificatorios conforme a lo previsto en el articulo 67.1 de este Código y le informará sobre el derecho de ejercer su defensa, pudiendo guardar silencio. A continuación conferirá traslado al fiscal para que fundamente su solicitud de formalización de la investigación.

272.2- Luego el imputado será interrogado directamente por el fiscal y el defensor, en ese orden y el tribunal podrá formular las preguntas que estime pertinentes.

272.3- A continuación se le conferirá traslado al defensor para que formule los descargos y ofrezca los medios de prueba que estime necesarios.

272.4- Inmediatamente el tribunal deberá resolver:

a) Sobre la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación y en su caso de la vía extraordinaria, disponiendo la sujeción del imputado al proceso.

b) Sobre todas las cuestiones formales que obstaren al desarrollo del debate que hubieren sido planteadas por las partes o advertidas de oficio.

c) Sobre la aplicación de medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria y / o cautelares.

Si el imputado se encontrare detenido, el tribunal deberá dictar esta resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de la Constitución de la República.

272.5- Si el tribunal dispone una medida limitativa o privativa de la libertad ambulatoria, en la misma resolución declinará competencia para ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal que por turno corresponda . El juez que

104

asuma el conocimiento de la causa deberá cumplir con las actividades de la audiencia preliminar pendientes, conforme a lo previsto en el siguiente numeral de este artículo, a cuyos efectos convocará a audiencia en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del expediente

272.6- A continuación el tribunal se pronunciará sobre los medios probatorios propuestos, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes y procederá al diligenciamiento de la prueba.

Artículo 273- ***(Audiencia complementaria).-***

273.1- Si la prueba no hubiera podido diligenciarse en su totalidad en la audiencia preliminar, se citará a las partes para una audiencia complementaria a esos efectos en el mas breve tiempo posible, con los requisitos previstos en el artículo 137 de este Código.

273.2- Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

273.3- Las partes podrán proponer hasta la deducción de la acusación diligencias probatorias que no pudieron ser ofrecidas oportunamente, por ser claramente supervinientes o referidas a hechos nuevos, acreditando los motivos y la necesidad de las mismas. El tribunal resolverá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 272.6 de este Código.

273.4- Concluida la recepción de pruebas, el tribunal conferirá traslado sucesivamente al Ministerio Público para que deduzca acusación o solicite el sobreseimiento del imputado y a la defensa para que conteste.

273.5- Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal podrá solicitar prórroga de la audiencia para deducir acusación por un plazo máximo de diez días corridos. Igual prórroga podrá ser solicitada por la defensa para su contestación. El tribunal resolverá en ambos casos en forma irrecurrible.

273.6- El fiscal podrá modificar en la acusación o antes de ella, la pretensión formulada al solicitar la formalización de la investigación respecto de la calificación delictual.

273.7- Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro del plazo de los quince días siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

273.8- Todo lo actuado se documentará conforme lo dispuesto en el artículo 142 de este Código.

Articulo 274- ***(Resoluciones dictadas en audiencia). -***

274.1- Las resoluciones dictadas en el curso de las audiencias admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.

274.2- La sentencia interlocutoria dictada conforme lo dispuesto en el articulo 272.4 de este código, admite el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Si se dispone el archivo de las actuaciones, la resolución será apelable con efecto suspensivo.

274.3- Todas las resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba serán apelables con efecto diferido

TITULO II

PROCESO EXTRAORDINARIO EN MATERIA DE CRÍMENES Y DELITOS.

Articulo 275- ***(Procedencia).-*** Si el Ministerio Público entendiera suficiente la prueba reunida para fundar la acusación podrá acumular a la solicitud de formalización de la investigación, la petición de tramitación por la vía del proceso extraordinario.

Articulo 276- ***(Procedimiento).-*** El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el proceso ordinario en lo pertinente y con las siguientes puntualizaciones:

a) Formulada la solicitud de tramitación por el proceso extraordinario, se conferirá traslado a la defensa de acuerdo a lo previsto en el articulo 272.3, resolviéndose en la forma indicada en el articulo 272.4 de este Código.

b) De no admitirse la tramitación por esta vía, el juez proseguirá con los tramites del proceso ordinario.

c) Tanto la acusación fiscal como la contestación de la defensa, podrán formularse verbalmente.

TITULO III

PROCESO EN MATERIA DE FALTAS

Articulo 277- ***(Procedimiento).-*** Serán de aplicación al procedimiento por faltas lo dispuesto en el Libro II Títulos I y II de este Código en lo pertinente.

Articulo 278- ***(Titularidad de la acción penal).-*** La titularidad de la acción penal en materia de faltas corresponde a los Fiscales Letrados Adjuntos y a los Fiscales Letrados Departamentales.

TITULO IV

PROCESOS INCIDENTALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 279- ***(Procedencia).-*** Corresponde tramitar por vía incidental las cuestiones diferentes de la principal, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a las mismas, siempre que no proceda a su respecto otro medio de tramitación.

Articulo 280- ***(Principio de la tramitación incidental).-*** Todos los incidentes que se susciten en el proceso, si no tienen en la ley un procedimiento propio deberán tramitarse en la forma prevista por las disposiciones de este Título.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Articulo 281- ***(Incidente en audiencia).-*** Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formularán verbalmente y oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el tribunal sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia como causal de impugnación al deducir recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

Articulo 282- ***(Incidente fuera audiencia).-***

282.1- La demanda incidental se planteará por escrito confiriéndose traslado por seis días.

282.2- Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme a lo dispuesto en el Título VI del Libro I de este Código.

El tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba y la concentrará en una sola audiencia, al término de la cual se oirá a las partes acerca del resultado de la misma.

282.3- Contestado el traslado, si se tratare de un asunto de puro derecho o si las partes no ofrecieran prueba o diligenciada la que correspondiera, el tribunal se pronunciará en una única sentencia.

Articulo 283- ***(Recurso).-***

283.1- La resolución que no admita el incidente será susceptible de los recurso de reposición y apelación sin efecto suspensivo.

283.2- La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible del recurso de apelación sin efecto suspensivo.

Articulo 284- ***(Forma de sustanciación del incidente fuera de audiencia).-***

El incidente que se plantee fuera de audiencia, se tramitará en pieza separada del principal sin suspender el curso del proceso hasta la citación para sentencia, salvo que el juez declare a petición de parte, que obsta al desarrollo de aquél. Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición.

CAPITULO III
INCIDENTES ESPECIALES

SECCIÓN I
RECUSACIÓN

Articulo 285- ***(Remisión).-*** El incidente de recusación se regirá por lo dispuesto en los artículos 325 a 328 del Código General del Proceso.

SECCIÓN II
CONTIENDA DE COMPETENCIA

Articulo 286- ***(Remisión).-*** El incidente de contienda de competencia se regirá por lo dispuesto en el artículo 331 del Código General del Proceso.

SECCION III
INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN PROVISIONAL

Artículo 287- ***(Oportunidad procesal).-*** La solicitud de libertad provisional podrá formularse en cualquier estado de la causa, hasta tanto no haya recaído sentencia de condena ejecutoriada.

Artículo 288- ***(Trámite de la solicitud).-***

288.1- La solicitud de excarcelación provisional podrá formularse en audiencia o fuera de ella.

288.2- Presentada por escrito fuera de audiencia, se conferirá vista al Ministerio Público el que deberá pronunciarse en el plazo de setenta y dos horas contado desde el momento de la recepción del pedido. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar la ampliación de dicho plazo hasta por diez días. El juez dispondrá de igual plazo para resolver.

288.3- Propuesta la solicitud en audiencia, el fiscal se pronunciará en ese acto y el juez deberá resolver en la misma. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar prórroga para expedirse hasta por diez días y de igual plazo dispondrá el juez para pronunciarse.

288.4- La sentencia interlocutoria que recaiga se notificará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de este Código.

LIBRO III

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 289- ***(Principio general).-*** Ninguna pena o medida de seguridad podrá ejecutarse sino en cumplimiento de sentencia definitiva ejecutoriada.

CAPITULO I
OBJETO Y PROCEDIMIENTO

Artículo 290- ***(Objeto).-*** La actividad procesal de ejecución comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las condenas penales y el trámite y decisión de las cuestiones sobrevinientes relativas a las penas y a las medidas de seguridad.

Artículo 291- ***(Juez competente).-*** En sede de ejecución conocerá el Juez de Ejecución y Vigilancia. Además de los cometidos que le asigna este Código y otras leyes, corresponde especialmente al Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia:

a) Velar por el respeto de los derechos humanos en todo el ámbito de su competencia. Con fines de vigilancia y contralor, podrá hacer comparecer ante sí a condenados, imputados y a funcionarios del sistema penitenciario.

111

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

b) Salvaguardar los derechos de los internos que cumplan condena, medidas de seguridad o prisión preventiva, dando cuenta en este último caso al tribunal competente, de los abusos y desviaciones que en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario, se puedan producir.

c) Controlar la regularidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los penados, superiores a treinta días. Dichas sanciones serán comunicadas al Juez de Ejecución y Vigilancia dentro del plazo de cinco días desde el inicio de su efectivo cumplimiento. Recibida la comunicación resolverá en única instancia.

d) Resolver, con informe del Director del establecimiento penitenciario y de los organismos técnicos pertinentes, la clasificación y las progresiones o regresiones de las etapas respectivas.

e) Recibir, tramitar y resolver acerca de peticiones o quejas que formulen los internos o sus defensores respecto del trato penitenciario, pudiendo recabar a esos efectos los informes pertinentes.

f) Resolver las solicitudes de salidas transitorias, laborales o domiciliarias de los penados, de acuerdo a los requisitos establecidos por la normativa vigente.

g) Controlar la regularidad de los traslados de los penados efectuados por la autoridad administrativa. Dichos traslados serán comunicados dentro del plazo de cinco días de su efectivización. Recibida la comunicación el juez resolverá en definitiva.

h) Autorizar las internaciones hospitalarias. En casos de urgencia, después de efectuada la internación, se le dará cuenta de inmediato para su aprobación.

i) Autorizar la salida del país del penado, en las mismas condiciones de tramitación previstas respecto del imputado, en el artículo 251 de este Código.

j) Realizar visitas o inspecciones a los establecimientos carcelarios cada vez que lo considere necesario y por lo menos una vez, cada treinta días.

k) Conocer y resolver en primera instancia sobre la concesión y revocación de los beneficios de las libertades condicional y anticipada.

l) Conocer y resolver la revocación de la suspensión condicional de la pena.

m) Conocer y resolver en el proceso de unificación de penas.

Artículo 292- ***(Competencia por razón de lugar).-***

292.1- Una vez ejecutoriada la sentencia de condena, se remitirán los autos al Juez de Ejecución y Vigilancia del lugar donde se cumpla la pena o medida de seguridad.

292.2- Si la sentencia hubiere quedado ejecutoriada sólo para alguno de los imputados, deberá cumplirse inmediatamente a su respecto, a cuyos efectos se formará pieza con testimonio de aquella, con constancia de la fecha en que quedó ejecutoriada y con las actuaciones referentes a la identificación y antecedentes del penado.

Artículo 293- ***(Liquidación de la pena).-*** Una vez recibidos los autos, se efectuará la liquidación de la pena impuesta, determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquidación se notificará al fiscal y al defensor y de no deducirse oposición dentro del plazo de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma tramitará por la vía incidental.

Articulo 294- ***(Criterios aplicables).-*** A los efectos del cómputo de la liquidación deberá descontarse el tiempo de detención o de limitación de la libertad sufrida por el condenado, en el país o en el extranjero.

Deberá descontarse un día de prisión o limitación de la libertad, en las hipótesis siguientes:

a) Por cada día o fracción de efectiva detención en el país o en el extranjero, incluyendo el arresto domiciliario o la internación hospitalaria.

b) Por cada dos días o fracción de efectivo cumplimiento, en los casos previstos de los literales j), k) y l) del articulo 224 de este Código.

c) Por cada diez días o fracción de efectivo sometimiento a cada una de las medidas indicadas en los literales a) a h) del artículo 224 de este Código.

d) Por cada dos días de trabajo o estudio cumplidos durante la reclusión, por todo el tiempo que esté debidamente documentado.

Artículo 295- ***(Comunicación).-***

295.1- Cuando la pena deba ser cumplida en reclusión en todo o en parte, el tribunal comunicará dicha circunstancia a la autoridad penitenciaria, indicando la fecha de su finalización.

295.2- Si el condenado se hallare en libertad y correspondiere su reclusión, el tribunal ordenará inmediatamente su detención. Una vez aprehendido y liquidada la pena, efectuará dicha comunicación.

Artículo 296- **(*Revisión*).-** El cómputo de la pena es siempre reformable, aún de oficio cuando se compruebe la existencia de un error.

TITULO II

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

CAPITULO I

DE SU CUMPLIMIENTO

Artículo 297- ***(Cumplimiento).-*** Las penas privativas de libertad serán cumplidas en la forma que establezcan las leyes especiales, teniendo el tribunal los poderes y deberes que en ellas se establezcan y los que señala el artículo 291 de éste Código

CAPITULO II

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Artículo 298- ***(Presupuestos).-***

298.1- La libertad condicional es un beneficio que se otorga a los penados cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, pueda formularse un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por la ley.

114

298.2- Si al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, el penado se hallare en libertad, se suspenderá su reintegro a la cárcel hasta tanto se resuelva de oficio si se le otorga la libertad condicional, la que se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos siguientes.

298.3- El liberado condicional queda sujeto a Vigilancia de la Autoridad, en los términos de lo dispuesto por el Código Penal, por el saldo de pena que resultare de la liquidación respectiva.

Artículo 299- ***(Trámite).-***

299.1- Aprobada la liquidación, el Juez de Ejecución y Vigilancia solicitará al Instituto Técnico Forense dentro del plazo de tres días la planilla de antecedentes judiciales del penado, actualizada a no más de sesenta días de su emisión.

299.2- Si dicha planilla no registra que haya sido condenado por nuevo delito, el Juez de Ejecución y Vigilancia previa vista al Ministerio Público, podrá conceder la libertad condicional. Se liquidará el saldo de pena a cumplir, computando el tiempo de vigilancia a que refiere el artículo 102 del Código Penal, a partir del momento en que el penado fue puesto en libertad. Si conforme a la liquidación efectuada, la vigilancia estuviere cumplida, el juez declarará extinguida la pena, efectuando las comunicaciones pertinentes.

299.3- En caso de existir saldo de pena, el condenado quedará sujeto a vigilancia de la autoridad y a su término el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si no hubiere sido condenado por la comisión nuevo delito, previa vista al Ministerio Público se declarará extinguida la pena efectuándose las comunicaciones pertinentes.

299.4- No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional, si agregada la respectiva planilla de antecedentes, resulta que el penado fue condenado por la comisión de nuevo delito durante el lapso en que estuvo en libertad provisional.

Artículo 300- ***(Impugnación).-*** La sentencia que deniegue la libertad condicional podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y

apelación con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda.

CAPÍTULO III
DE LA LIBERTAD ANTICIPADA

Artículo 301- ***(Presupuestos).-***

301.1- La libertad anticipada es un beneficio que podrá otorgarse a los penados que se hallaren privados de libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por este Código.

301.2- El liberado queda sujeto a Vigilancia de la Autoridad en los términos de lo dispuesto en el Código Penal, por el saldo de pena que resulte de la liquidación respectiva.

301.3- Este beneficio podrá otorgarse a pedido de parte y de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) Si la pena recaída es de prisión o multa cuando por defecto de cumplimiento haya de transformarse en prisión, podrá solicitarse cualquiera fuere el tiempo de reclusión sufrida;

b) Si la condena es de penitenciaría, cuando el penado haya cumplido la mitad de la pena impuesta;

c) Si se hubieran establecido medidas de seguridad eliminativas aditivas a una pena de penitenciaría, el beneficio podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, disponiendo el cese de dichas medidas.

Artículo 302- ***(Trámite).-***

302.1- La petición será formulada en forma escrita por el penado o su defensor ante el Juez de Ejecución y Vigilancia, quien dispondrá la agregación de los siguientes recaudos:

a) La planilla de antecedentes actualizada del Instituto Técnico Forense y reliquidación de la pena por redención de la misma por trabajo o estudio, si correspondiere;

b) El informe de conducta carcelaria proporcionado por el director o responsable del establecimiento, quien deberá remitirlo a la sede judicial dentro del plazo de cinco días contados desde que haya recibido la solicitud y todo informe documentado referente a aptitudes de resocialización del penado.

302.2- El juez resolverá previa vista del Ministerio Público, mediante resolución fundada.

302.3- Concedida la libertad anticipada, se efectuará la liquidación del saldo de pena a cumplir bajo vigilancia de la autoridad. A su término, el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si el penado no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, se declarará extinguida la pena previa vista al Ministerio Público, efectuándose las comunicaciones pertinentes.

Artículo 303.- ***(Impugnación).-***

303.1- La sentencia que la concede podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación en subsidio con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda.

303.2- En caso denegatorio, ésta no podrá ser solicitada hasta que no hayan transcurrido seis meses de ejecutoriada la resolución que la deniega.

Artículo 304 - ***(Libertad anticipada en caso de unificación de penas pendiente).-***

304.1- En los casos en que un encausado tenga pendiente el dictado de sentencia de unificación de penas y se encontrare recluido cumpliendo una sentencia de condena ejecutoriada, podrá impetrar el beneficio de la libertad anticipada, independientemente del estado de las otras causas.

304.2- El juez procederá conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, debiendo solicitar informes sobre las causas en trámite a efectos de estimar provisoriamente, la posible pena de unificación a recaer en la unificación. Tal estimación no implicará prejuzgamiento.

304.3- En caso de concederse la libertad anticipada, ella comprenderá todas las causas pendientes de unificación y se procederá a efectuar una liquidación provisoria del término de vigilancia, teniendo en cuenta la estimación de la pena unificada.

304.4- La sentencia que concede el beneficio se comunicará a los jueces de las demás causas a sus efectos.

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 305- ***(Presupuestos).-*** Al dictar sentencia de condena, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal podrá otorgar en el mismo acto el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un primario absoluto o legal.

b) Que la pena impuesta sea de prisión o de penitenciaría hasta tres años.

Artículo 306- ***(Efectos).-***

306.1- El condenado que obtenga el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, permanecerá bajo vigilancia de la autoridad por el plazo de un año. Dicho plazo se contará desde la fecha en que la sentencia de condena quedó ejecutoriada.

306.2- Cumplido el referido plazo, el juez solicitará la agregación de la planilla de antecedentes actualizada.

306.3- Si de ella resultare que el penado no hubiere sido condenado por nuevo delito durante el término de vigilancia y previa vista al Ministerio Público, se

tendrá por extinguido el delito y por no pronunciada la sentencia, ordenándose la cancelación de la inscripción en el registro respectivo.

CAPITULO V
CUMPLIMIENTO Y REVOCACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Artículo 307- ***(Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad).-***

307.1- Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 230 de este Código, podrá aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será competente para dictar resolución el Juez de la causa.

307.2- Si las circunstancias excepcionales a que refiere el artículo 230 se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el propio penado y se tramitará por vía incidental.

Articulo 308- ***(Enfermedad del condenado).-***

308.1- Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad síquica o física, la dirección del establecimiento deberá comunicarlo al Juez de Ejecución y Vigilancia, quien previo los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado.

308.2- En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el traslado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de la medida adoptada.

308.3- El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será computado como cumplimiento efectivo de la pena.

Artículo 309- ***(Vigilancia).-***

309.1- El penado liberado condicional o anticipadamente o con suspensión condicional de la pena, quedará sometido a la vigilancia del Patronato Nacional

de Encarcelados y Liberados en las condiciones previstas en el artículo 102 del Código Penal.

309.2- El Juez de Ejecución y Vigilancia supervisará la forma concreta de la vigilancia y podrá disponer de otras modalidades o asumirlas directamente si lo viere del caso, o pedir colaboración a otras instituciones públicas o privadas.

309.3- La vigilancia será ejercida de manera que no perjudique al vigilado y le permita atender normalmente sus actividades habituales.

309.4- Si el condenado considera que la vigilancia no se cumple en debida forma, podrá ocurrir verbalmente ante el Juez de Ejecución y Vigilancia, quien dispondrá las medidas que estime necesarias.

Artículo 310- ***(Revocación de la libertad condicional o anticipada).-*** Si antes del cumplimiento íntegro de la pena en libertad condicional o anticipada, el penado comete nuevo delito por el que resulte condenado o quebrante los deberes impuestos por la autoridad, el Juez de Ejecución y Vigilancia podrá revocar el beneficio y disponer su reintegro a la cárcel, siguiendo el mismo procedimiento que para su concesión. En caso de revocación, el tiempo que el condenado haya estado en libertad vigilada, no se computará como cumplimiento de pena.

Artículo 311- ***(Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena).-***

311.1- Cuando el penado hubiera cometido nuevo delito antes de quedar ejecutoriada la primera sentencia, la suspensión que esta hubiera decretado no tendrá efecto, sin necesidad de declaración especial.

311.2- Si durante el término de vigilancia el penado hubiere sido condenado por nuevo delito o incumpliere las obligaciones impuestas, se revocará el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, continuando con lo que al estado de dicha causa corresponda.

120

TITULO III

EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS

CAPITULO I

PENAS DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN

Artículo 312- ***(Inhabilitación absoluta).-*** La inhabilitación absoluta para cargos, empleos públicos y derechos políticos, determinará que el Juez de Ejecución y Vigilancia comunique la pena a la Corte Electoral y organismo que corresponda, según el caso.

Artículo 313- ***(Inhabilitación especial)***.- En casos de penas de inhabilitación especial, el Juez de Ejecución y Vigilancia dispondrá solamente las comunicaciones del caso.

Artículo 314- ***(Penas de suspensión).-*** Si la pena fuera de suspensión, el juez ordenará la comunicación de la sentencia al organismo en que revistiera el condenado.

Artículo 315- ***(Cese anticipado de pena accesoria).-***

315.1- Si mediaren circunstancias excepcionales, podrá concederse al condenado el cese anticipado de su pena accesoria.

315.2- La cuestión será tramitada en la forma dispuesta en el artículo 302 de este Código y el Juez de Ejecución y Vigilancia podrá otorgarlo si hubiere transcurrido la mitad de la pena y estimare acreditada la circunstancias excepcionales invocadas y la rehabilitación del condenado.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

CAPITULO II

DE LAS PENAS PECUNIARIAS, SUSTITUTIVAS Y ACCESORIAS

Artículo 316- ***(Pena de multa) .-***

316.1- Si se condena al pago de una multa, ésta deberá ser abonada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

316.2- Si el pago no se efectúa dentro del plazo, se intimará de oficio al condenado para que lo verifique dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse a la sustitución de la multa por prisión. Dicho apercibimiento se hará efectivo sin necesidad de otro trámite y sin perjuicio del otorgamiento de la libertad condicional, si correspondiere.

316.3- Si consta que el condenado fuera notoriamente pobre, se procederá directamente a la sustitución de la multa por la imposición de un régimen de vigilancia de la autoridad, conforme a lo previsto en el articulo 102 del Código Penal.

Artículo 317- ***(Penas accesorias).-*** El juez ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan en los casos de penas accesorias a las de prisión o penitenciaría previstas en el Código Penal.

Artículo 318- ***(Pena de confiscación).-*** La pena de confiscación de los instrumentos con que se haya cometido el delito y los efectos del mismo, será ejecutada de oficio por el Juez de Ejecución y Vigilancia quien dispondrá el destino que corresponda según su naturaleza.

CAPITULO III

DE LAS PENAS ALTERNATIVAS

Artículo 319- ***(Regla general).-*** En los supuestos en que la ley establezca penas alternativas, el Juez de Ejecución y Vigilancia deberá fiscalizar su cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 290 y siguientes de este Código, según corresponda.

TITULO IV

EXTINCIÓN DE LA PENA

Artículo 320- ***(Regla general).-*** Cuando se configure una causa de extinción de la pena, el Juez de Ejecución y Vigilancia formulará de inmediato la declaración correspondiente, ordenando la clausura de los procedimientos, las comunicaciones pertinentes y el archivo de! expediente, teniendo por definitiva la libertad del condenado.

Artículo 321- ***(Prescripción de la pena).-***

321.1- Verificada la prescripción de la pena de acuerdo a las normas del Código Penal, será declarada por el Juez de Ejecución y Vigilancia y aparejará la clausura de los procedimientos pendientes y el archivo del expediente, teniéndose por definitiva la libertad.

321.2- La prescripción de la pena se declarará de oficio, aún cuando no fuere alegada. Si lo fuere, tramitará como incidente.

TITULO V

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 322- ***(Enumeración).-*** Las medidas de seguridad a regularse en el presente Código, son:

a) Eliminativas.

b) Curativas.

c) Preventivas.

Artículo 323- ***(Regla general).-*** El Juez de Ejecución y Vigilancia comunicará a la autoridad administrativa a cargo de la aplicación de las medidas de seguridad, los plazos de vigencia de éstas y el deber de informar sobre el estado de las personas sometidas a ellas o sobre otras circunstancias del caso.

CAPITULO II
MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINATIVAS

Artículo 324- ***(Cumplimiento).-***

324.1- La sentencia que imponga una medida de seguridad eliminativa deberá determinar el mínimo y el máximo de su duración.

324.2- La medida comenzará a ejecutarse en los establecimientos adecuados, luego de cumplida la pena impuesta en la sentencia.

324.3- El Juez de Ejecución y Vigilancia tendrá sobre las personas sometidas a medidas de seguridad eliminativas los mismos cometidos de vigilancia establecidos en este Código para el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Artículo 325- ***(Cese.).-*** Vencido el plazo mínimo de su duración, el juez encargado de la ejecución y vigilancia solicitará informes al establecimiento donde se cumple la medida, pudiendo decretar el cese cuando dichos informes hagan prever la readaptación del penado.

CAPITULO III
MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS

Articulo 326- ***(Cumplimiento).-***

326.1- Las medidas de seguridad curativas se cumplirán en un establecimiento especial o centro de asistencia para enfermos mentales o bajo el cuidado de una persona fuera de dicho centro y sujetas a condiciones determinadas.

326.2- Los peritos del Instituto Técnico Forense asesorarán al Juez de Ejecución y Vigilancia sobre el régimen de cumplimiento de las medidas de seguridad curativas y sus modificaciones.

326.3- El centro hospitalario correspondiente deberá informar al juez por lo menos cada tres meses, de la evolución del internado.

Articulo 327- ***(Cese).-***

327.1- El cese de las medidas de seguridad curativas será dispuesto por el Juez de Ejecución y Vigilancia cuando hayan desaparecido las causas que les sirvieron de fundamento, previo dictamen pericial del Instituto Técnico Forense e informe de la dirección del centro asistencial.

327.2- El cese se dispondrá de oficio a solicitud del defensor o su curador, previo dictamen fiscal, siguiéndose el procedimiento de los incidentes.

CAPITULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS

Articulo 328- ***(Vigilancia de la autoridad).-*** Se aplicará lo establecido en el articulo 298.3 de este Código a la sentencia que sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad en los casos previstos en los artículos 92, 94 y 100 del Código Penal en lo pertinente.

Artículo 329- ***(Caución de no ofender).-*** Si la sentencia impone la caución de no ofender, se estará a lo establecido en el artículo 101 del Código Penal.

TITULO VI
DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE PENAS

Artículo 330- ***(Concepto).-*** Las sentencias ejecutoriadas recaídas en los procesos conexos producirán todos sus efectos, sin perjuicio de la unificación de penas por reiteración de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 del Código Penal o eventual aplicación de medidas de seguridad.

Artículo 331- ***(Trámite).-***

331-1- El Juez de Ejecución y Vigilancia formalizará el incidente de unificación de penas en la causa más antigua. A esos efectos se tendrá en cuenta la fecha de la audiencia preliminar respectiva. Se intimará al condenado para que designe defensor en este proceso, bajo apercibimiento de tenérsele por designado al Defensor Público que por turno corresponda.

331.2- A los efectos del trámite se remitirán los expedientes originales o testimonios según corresponda.

331.3- Recepcionados los mismos e integrado el cúmulo, se conferirá traslado al Ministerio Público para que se deduzca requisitoria de unificación de pena dentro del plazo de seis días. De igual plazo dispondrá el defensor para contestar la acusación fiscal, teniéndose presente a todos sus efectos lo dispuesto en el artículo 129 de éste Código.

LIBRO IV

PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I
REGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN

CAPÍTULO I
REGIMEN

Artículo 332- ***(Normas aplicables).-*** El proceso de extradición se regirá por las normas de los Tratados o Convenciones internacionales ratificadas por la República que se encuentren vigentes.

En defecto de dichos instrumentos o en caso de insuficiencia de los mismos, se aplicarán las siguientes disposiciones.

Artículo 333- ***(Procedencia de la extradición).-***

333.1- Cuando fueren requeridos al efecto, los tribunales competentes de la República entregarán a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional para ser sometida a proceso o cumplir la pena privativa de libertad a que hubiere sido condenada en el Estado requirente, con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente Título.

333.2- Para que proceda la extradición es necesario que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer en el delito en que funda su solicitud, haya sido o no cometido en dicho Estado.

Artículo 334- ***(Improcedencia de la extradición).-*** La extradición no procede:

a) Cuando el requerido haya cumplido la pena correspondiente al delito que

motiva el pedido, o cuando de cualquier manera se hubiere extinguido la pretensión punitiva del Estado con anterioridad a la solicitud.

b) Cuando estén prescriptos el delito, el ejercicio de la acción penal o la pena impuesta, según la legislación nacional o la del Estado requirente.

c) Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado, en un tribunal de excepción o *"ad-hoc"* en el Estado requirente.

d) Cuando se trate de delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos, o delitos comunes cuya represión obedezca a motivos políticos. No serán considerados como delitos políticos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los actos de terrorismo.

e) Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad o que la situación de la persona pueda verse agravada por algún otro motivo.

f) Cuando la conducta que motiva el pedido de extradición no se encuentre prevista como delito en ambas legislaciones. Para dicha comprobación, no se atenderá a la denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones típicas.

g) Cuando la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad o cuando la pena que aún le resta por cumplir, sea inferior a seis meses.

Artículo 335- ***(Pena de muerte y prisión perpetua).-*** En ningún caso se autorizará la entrega cuando la pena a aplicarse por el Estado requirente, sea la pena de muerte o la prisión perpetua.

Artículo 336- ***(Nacionalidad).-*** La nacionalidad de la persona reclamada, no impedirá la sustanciación del pedido de extradición y en su caso, la entrega.

CAPITULO II
SOLICITUD

Artículo 337- ***(Forma de la solicitud).-*** La solicitud de extradición será formulada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por el representante del Estado requirente, o directamente de Gobierno a Gobierno, y deberá ser acompañada de la documentación requerida por este Código.

Artículo 338- ***(Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo).-*** El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento, puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia, no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo.

Artículo 339- ***(Documentación requerida).-*** La solicitud de extradición deberá ser acompañada de los siguientes documentos, debidamente traducidos:

a) Si se trata de un imputado, copia auténtica del auto de sujeción a proceso o del auto que disponga la privación de libertad, así como copia de las piezas procesales en que se funda la resolución. Tratándose de un condenado, deberá acompañarse copia auténtica de la sentencia de condena.

b) Una relación de los hechos atribuidos a la persona reclamada, con indicación del tiempo y lugar de comisión, su calificación jurídica y los elementos de prueba correspondientes.

c) Transcripción de las disposiciones legales aplicables referidas a la descripción típica, las circunstancias alteratorias, la prescripción del delito y de la pena, clase y monto de la pena conminada, sistema de aplicación de la misma y normas procesales que autorizan el arresto.

d) Toda información que permita la identificación del reclamado, incluso fotografías, ficha dactiloscópica y mención de su probable domicilio o paradero en el territorio nacional.

Artículo 340- ***(Solicitud por más de un Estado).-***

340.1- Cuando la extradición de una persona se pida por diferentes Estados por un mismo delito, el órgano jurisdiccional competente dará preferencia a la solicitud del Estado que haya prevenido en el conocimiento de aquél.

340.2- Si se tratare de hechos diferentes, dará preferencia al pedido formulado por el delito más grave y si se los reputara de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad en el pedido.

CAPITULO III

ARRESTO PREVENTIVO

Artículo 341- ***(Norma general).-***

341.1- En situaciones de urgencia, podrá solicitarse el arresto preventivo de la persona reclamada vía Interpol, debiendo indicar el Estado requirente, la intención de presentar un pedido formal de extradición y la existencia de una orden judicial de arresto o de un fallo condenatorio.

341.2- El juez competente ordenará que la persona reclamada permanezca privada de libertad o dispondrá en su caso una medida alternativa al arresto. También podrá disponer la incautación de efectos o instrumentos del delito que el reclamado tenga en su poder.

341.3- Efectivizada la detención del reclamado, la misma será comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores el que a su vez lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Estado requirente.

341.4- El Juez Letrado interviniente deberá convocar a audiencia dentro de las

cuarenta y ocho horas desde que se produjo la detención. En la misma, se intimará a la persona detenida la designación de defensor bajo apercibimiento de designársele el Defensor Público que por turno corresponda. De inmediato, se le tomará declaración a los efectos de verificar su identidad y se le informará sobre los motivos invocados por el Estado requirente para solicitar su entrega.

Artículo 342- ***(Cese del arresto).-***

342.1- Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la audiencia, el Estado requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del arresto, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar respecto de la persona requerida y de sus bienes.

342.2- A partir del vencimiento de dicho plazo, si el pedido de extradición no se presentara dentro de los quince días subsiguientes, el juez dispondrá la libertad definitiva del requerido, la devolución de los efectos incautados y el archivo del expediente. Todo ello se dispondrá en audiencia y con intervención de las partes, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo siguiente.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO

Artículo 343- ***(Competencia del tribunal).-***

343.1- Recibido el pedido de extradición, el Poder Ejecutivo con intervención de la Autoridad Central, lo cursará a la Suprema Corte de Justicia para que ésta lo envíe al Juzgado Letrado en lo Penal de la Capital que por turno corresponda.

343.2- La fecha de la resolución judicial extranjera que ordena el pedido de extradición, determina el turno de los tribunales uruguayos.

Artículo 344- ***(Representación del Estado requirente).-***

344.1- En la solicitud de extradición o posteriormente hasta la audiencia de debate, el Estado requirente podrá designar apoderado abogado, el que deberá estar inscripto en la matrícula nacional. Previo al ejercicio de su cargo, éste deberá aceptarlo y constituirá domicilio dentro del radio del tribunal.

344.2- El letrado designado actuará en el proceso de extradición como parte formal, en interés del Estado requirente y con todos los derechos y atribuciones de tal calidad, para el ejercicio de una adecuada representación y control de los actos procesales

Articulo 345- ***(Intervención del Ministerio Publico).-*** En el proceso de extradición, el Ministerio Publico actuará como dictaminante técnico, ejerciendo el contralor formal y sustancial de los actos procesales, sin perjuicio de la facultad de pedir la postergación de la entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 de éste Código.

Articulo 346- ***(Recepción del pedido de extradición).-*** Recibida la solicitud, el juez ordenará su detención con las formalidades legales y la incautación de efectos del delito, si el reclamado no está privado de su libertad o sometido a medidas limitativas de la libertad física, debiendo procederse de acuerdo a lo establecido en lo dispuesto en el artículo 341.4 de éste Código.

Articulo 347- ***(Trámite).-***

347.1- El tribunal convocará a audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el reclamado fue puesto a su disposición y a la misma comparecerá éste asistido de defensor, el Ministerio Público y el abogado del Estado requirente.

347.2- En la audiencia se informará a la persona requerida, sobre el contenido de la solicitud y ésta podrá expresar su consentimiento al pedido de entrega o

manifestar su oposición.

347.3- La oposición podrá fundarse en las siguientes excepciones:

a) No ser la persona reclamada.

b) Defectos de forma de la solicitud de extradición o de la documentación acompañada.

c) Improcedencia del pedido.

347.4- El tribunal, oídos los abogados del Estado requirente y de la persona requerida y el Ministerio Público, resolverá la cuestión en la misma audiencia con arreglo a la ley más favorable al requerido. De advertirse defectos formales que se indicarán con precisión, se dispondrá que éstos se subsanen en un plazo que no podrá superar los treinta días, contados desde la fecha de la detención.

347.5- Si no se subsanaren los defectos indicados en el plazo establecido, dispondrá el archivo del pedido y la libertad definitiva del requerido.

347.6- Si el pedido reuniera los requisitos formales necesarios o las deficiencias fueran subsanadas, el juez dispondrá la prisión preventiva del reclamado, pudiendo las partes proponer prueba. El juez convocará a una audiencia, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor de quince días la cual se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en el art. 276 de este Código.

347.7- Previo al dictado de sentencia, se oirá al Ministerio Público.

Artículo 348- ***(Impugnación).-***

348.1- La sentencia definitiva que admita o deniegue la extradición será apelable con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda.

348.2- La resolución del tribunal que homologue el consentimiento del reclamado a la extradición no admite apelación.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Artículo 349- ***(Comunicación al Poder Ejecutivo)***.- La sentencia definitiva ejecutoriada que declara procedente la extradición, será comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo, a fin de que éste provea lo necesario para la entrega del reclamado al Estado requirente.

Artículo 350- ***(Postergación de la entrega).-***

350.1- Si el requerido estuviera sometido a juicio en la República, su entrega sólo podrá ser diferida hasta la conclusión del proceso o la extinción de la condena cuando la ley reprima el delito atribuido en esa causa con un mínimo de penitenciaría, o cuando estime prima facie que la pena a recaer en definitiva tendrá esa naturaleza.

350.2- En los demás casos, se decretará la suspensión del juicio nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

Artículo 351- ***("Non bis in idem").-*** Negada la extradición de una persona, la misma no podrá solicitarse nuevamente por el mismo delito, salvo que la negativa se fundara en la insuficiencia o falta de documentación.

Artículo 352- ***(Principio de especialidad).-*** La persona extraditada no podrá ser juzgada en el Estado requirente por otro u otros delitos cometidos con anterioridad al pedido de extradición y no comprendidos en éste.

Artículo 353- ***(Descuento del tiempo de privación de libertad).-*** El tiempo que la persona reclamada haya permanecido detenida en la República, deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva del Estado requirente.

134

TITULO II
PROCESO DE *"HABEAS CORPUS"*

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

Artículo 354- (*Concepto*).- La de *"habeas corpus"* es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana.

Artículo 355- ***(Casos de suspensión de garantías).-*** Cuando las situaciones previstas en el artículo anterior se hubieren producido por efecto de la adopción de medidas prontas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución de la República, procederá también la acción de *"habeas corpus"*. En este caso, ella estará restringida a la comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales formales, anuencia o comunicación a la Asamblea General o Comisión Permanente en su caso, control del trato, lugar y condiciones de la reclusión o traslado y de la efectividad de la opción por salir del país, cuando proceda.

Artículo 356- ***(Legitimación).-***

356.1- Esta acción puede ser deducida por el propio interesado, por el Ministerio Público, por cualquier persona y aún promoverse de oficio.

356.2- La autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en estos procedimientos, sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus superiores y su derecho de patrocinio letrado.

Articulo 357- ***(Competencia).-***

357.1- Conocerá de esta acción el Juez Letrado con competencia en materia penal de turno del lugar de los hechos aducidos y si ello no fuere fácilmente determinable, cualquier Juez Letrado con competencia en materia penal.

357.2- En este proceso están vedadas la excepción y la declinatoria de competencia y el tribunal actuante sólo cederá ante el que esté conociendo en procedimientos relativos al sujeto involucrado que sea competente según las reglas generales.

357.3- La actuación del juez en este proceso no produce prevención.

357.4- Cuando se trate de denuncia de torturas o malos tratos a personas privadas de libertad que estén a disposición de algún juez, éste será el único competente.

357.5- Si el sujeto involucrado es menor de dieciocho años, conocerá la Justicia de Adolescentes.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Articulo 358- ***(Demanda).-***

358.1- La demanda de *"habeas corpus"* podrá formularse sin necesidad de patrocinio letrado, por escrito o verbalmente, labrándose acta en este último caso y deberá en lo posible, individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, establecer una relación sucinta de los hechos relevantes, indicar lugar de detención y funcionario responsable si se supiere su identidad y proponer los

medios de prueba de que se disponga. Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de *"habeas corpus" o* penal, con relación al mismo sujeto.

358.2- La Suprema Corte de Justicia, determinará el lugar de presentación de la demanda en los días y horas inhábiles.

Articulo 359- ***(Trámite).-***

359.1- Recibida la demanda, el tribunal ordenará sin dilación que la autoridad aprehensora o a la que son atribuidos otros actos denunciados, informe sobre los hechos y explique y justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación, con remisión de testimonio de todas las actuaciones

359.2- Según los casos, el tribunal podrá constituirse para inspeccionar las dependencias administrativas referidas, ordenar que la autoridad requerida presente ante él al detenido e interrogar directamente a la persona en cuyo amparo personal se actúa. Asimismo podrá disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, las que podrá asumir en audiencia con citación del Ministerio Público, de la autoridad requerida y del promotor del procedimiento.

359.3- Toda la actuación del tribunal será cumplida en los lapsos más breves que sea posible, con habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles que se requieran, hasta la sentencia.

359.5- Si las alternativas del procedimiento lo requieren, el tribunal proveerá de Defensor Público a la persona en cuyo favor se actúa.

Articulo 360- ***(Sentencia).-***

360.1- Concluido el procedimiento el juez dictará sentencia que deberá pronunciarse en audiencia si la hubiera, o dentro de las veinticuatro horas de completados los informes y eventuales probanzas.

360.2- Si el juez entendiere que la aprehensión o los otros actos denunciados son arbitrarios, ordenará la libertad de la persona detenida o el cese de los otros actos y la autoridad a la que se dirige la orden, deberá cumplirla de

inmediato. El juez deberá disponer asimismo, que se dé cuenta a quien corresponda por las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar por los actos arbitrarios.

LIBRO V

MEDIOS IMPUGNATIVOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 361- Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario

Articulo 362- ***(Enumeración y remisión).-***

362.1- Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, queja por denegación de apelación o de casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad.

362.2- También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad, conforme a lo establecido en este Código.

362.3- Serán aplicables al proceso penal las disposiciones contenidas en Libro I, Título VI, Capítulo VII del Código General del Proceso sobre "Medios de Impugnación de las resoluciones judiciales", con las puntualizaciones, modificaciones y exclusiones que se establecen en el presente Título.

Articulo 363- ***(Legitimación para impugnar).-***

363.1- Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales el fiscal y el defensor del imputado.

363.2- El imputado también puede interponer los recursos de apelación y casación contra la sentencia definitiva, con asistencia letrada.

363.3- La víctima y los terceros que comparezcan en el proceso solo tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente.

CAPITULO I

RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 364- ***(Efectos de la apelación de la sentencia definitiva).-*** La apelación de la sentencia definitiva suspende su ejecución. No obstante, en caso de apelación de sentencia absolutoria se decretará la libertad provisional del imputado.

Artículo 365- ***(Efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias).-*** El recurso de apelación de sentencia interlocutoria se admite:

365.1- Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal *"a quo"* se suspende desde que quede firme la providencia que concede el recurso, y hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior.

No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada.

365.2- Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia que concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior. El tribunal superior, una vez recibida la pieza decidirá dentro de cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal.

Cuando resuelva la suspensión, lo comunicará de inmediato al tribunal inferior.

365.3- Con efecto diferido en los casos expresamente establecidos por este Código.

Artículo 366- ***(Procedencia de la apelación suspensiva y no suspensiva).-***

La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación.

En todos los demás casos, la apelación de interlocutorias no tendrá efecto suspensivo, salvo que una disposición de este Código en forma expresa, disponga lo contrario.

Artículo 367- ***(Resolución del tribunal inferior).-***

367.1- Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el tribunal la admitirá si fuere procedente y expresará el efecto con que la admite.

367.2- Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá interponer el recurso de queja pertinente.

Articulo 368- ***(Exclusiones).-*** No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales.

CAPITULO II

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA

Artículo 369- ***(Remisión).-*** Se aplicarán al proceso penal en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 116, 257 , 259 y 344 del Código General del Proceso.

Articulo 370- ***(Prueba en Segunda Instancia).-***

370.1- Las partes podrán ofrecer nuevos elementos probatorios en los respectivos escritos de interposición y contestación a la apelación, sin las limitaciones establecidas en el artículo 253.2 del Código General del Proceso, las que podrán ser ordenadas por el tribunal de alzada para ser diligenciadas en la audiencia.

370.2- De admitirse la prueba, el tribunal dispondrá su recepción en la

audiencia convocada, la que se diligenciará conforme a las disposiciones de este Código.

CAPITULO III

RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 371- ***(Procedencia.).-*** El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, sean definitivas o interlocutorias, que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso.

Artículo 372- ***(Remisión y particularidades).-*** Con respecto al recurso de casación en materia penal se aplicaran en lo pertinente, las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo VII, Sección VI del Código General del Proceso, con las siguientes precisiones y modificaciones.

372.1-. El imputado podrá interponer el recurso por si, en forma escrita y fundada, en cuyo caso será indispensable la asistencia letrada.

372.2- La interposición del recurso de casación tiene efecto suspensivo hasta la resolución definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 127 de este Código.

372.3- Cuando se dictare sentencia sobre el fondo regirá lo establecido en los artículos 124 y 125 de este Código.

372.4- Tratándose de causa cuya primera instancia se hubiera cumplido integramente ante Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, tendrán legitimación para interponer el recurso de casación el Fiscal Letrado departamental y el defensor público en su caso.

A tales efectos, deberá notificarse la sentencia de segunda instancia al Fiscal Letrado Departamental y el Defensor Público.

CAPITULO IV

RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 373- ***(Procedencia).-*** El recurso de revisión procede en todo tiempo y solamente a favor del condenado, contra las sentencias condenatorias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzgada, dictadas por cualquier tribunal.

Articulo 374- ***(Causales).-*** Procede la revisión exclusivamente en las causales siguientes:

a) Si los hechos establecidos como fundamentos de la condena, resultan inconciliables con los que fundamentan otra sentencia penal ejecutoriada.

b) Si después de la condena sobrevienen nuevos elementos de prueba o circunstancias que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió o que concurrieron causas obstativas de la responsabilidad penal.

c) Si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley penal como delito. En tal supuesto, la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle extinguida o no pueda proseguir, en cuyos casos se podrán emplear otros medios probatorios.

d) Si corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.

Artículo 375- ***(Legitimación activa) .-***

375.1- Pueden interponer el recurso de revisión:

a) El condenado por si o por apoderado con facultades expresas y en caso de

incapacidad su representante legales.

b) Cualquiera de los sucesores a titulo universal del condenado o su cónyuge supérstite.

c) El Ministerio Público y el último defensor en la causa.

375.2- La muerte o incapacidad mental del condenado, no impedirá que se deduzca el recurso para rehabilitarlo socialmente.

Artículo 376- ***(Interposición del recurso).-*** El recurso de revisión se deducirá ante la Suprema Corte de Justicia en escrito que deberá contener bajo pena de inadmisibilidad, la individualización de la causa anterior, la concreta referencia de los hechos, la proposición de las pruebas respectivas y la mención de las disposiciones legales en que se funde.

Artículo 377- ***(Trámite del recurso).-*** Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia ordenará que se eleve el expediente y lo sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

Artículo 378- ***(Facultad de suspensión de la ejecución).-*** La Suprema Corte de Justicia podrá en cualquier momento, suspender la ejecución de la sentencia recurrida si en apreciación primaria considerare fundado el recurso. En este ultimo caso, podrá disponer la prestación de garantías

Artículo 379- ***(Efectos de la sentencia).-***

379.1- Si estimare fundada la revisión, la Suprema Corte de Justicia anulará la sentencia impugnada y pronunciará directamente la sentencia definitiva que corresponda o mandará que se inicie un nuevo proceso por ante el tribunal competente, remitiendo la causa al Ministerio Público.

379.2- En ningún caso podrá recaer condena mas severa que la revisada.

Artículo 380- ***(Nuevo proceso).-*** Si la Suprema Corte de Justicia dispusiera la sustanciación de nuevo proceso, no podrán modificarse en perjuicio del condenado las conclusiones de la sentencia en revisión y estarán impedidos los

magistrados que conocieron en el anterior.

TITULO II
DE LAS NULIDADES

Articulo 381- ***(Reglas generales y procedimiento).-*** Son aplicables al proceso penal las reglas y procedimientos establecidos en los artículos 110 a 116 del Código General del Proceso en lo pertinente, con las variantes que resultan de los artículos siguientes.

Artículo 382- ***(Causales de nulidad insubsanable).-*** Son causales de nulidad insubsanable:

a) La infracción al principio del *"non bis in idem"*.

b) La falta de jurisdicción o la falta de competencia por razón de la materia o del grado, con la excepción y previsiones establecidas en el articulo 39 de este Código.

c) La infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, intervención, asistencia y representación del imputado.

d) La infracción a las disposiciones que establecen la intervención necesaria del Ministerio Público.

Articulo 383- ***(Declaración de nulidad insubsanable).-***

383.1- La nulidad insubsanable debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso o en vía de revisión, con citación de las partes por seis días. En caso de oposición, se seguirá la vía incidental.

383.2- Las partes también podrán promover dicha declaración por vía incidental.

383.3- La resolución que declara la nulidad será apelable con efecto suspensivo.

144

Articulo 384- ***(Validez remanente de las actuaciones de prueba).-*** Cuando se hubieren practicado actuaciones judiciales sin advertir la falta de algún presupuesto para el ejercicio de la acción penal, la nulidad que sea declarada al respecto no alcanzará a las diligencias probatorias ejecutadas con las garantías debidas, las que mantendrán su validez en el caso de ser removido el impedimento.

TITULO III
DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CODIGO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 385- ***(Derogación).-***

385.1- Deróganse a partir de la vigencia de este Código, el Código del Proceso Penal (Decreto Ley No. 15.032 del 7 de julio de 1980) sus modificaciones y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente.

385.2- No obstante lo establecido en el inciso anterior, las referidas disposiciones continuarán aplicándose a los asuntos en trámite judicial hasta la sentencia definitiva
de primera instancia, inclusive.

Articulo 386- El presente Código entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Diario Oficial.

145

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

INDICE GENERAL.

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO I
LOS PRINICIPIOS BASICOS Y EL REGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

CAPITULO I- Principios básicos
Artículos 1 a 13.

CAPITULO II- Régimen de la norma procesal penal

Artículos 14 a 17

TITULO II
DE LOS SUJETOS PROCESALES

CAPITULO I. El Tribunal

Sección I- Disposiciones generales.

Artículos 18 a 22

Sección II. Competencia por razón de la materia y de grado.

Artículos 23 a 30.

Sección III. Competencia por razón de tiempo.

Articulo 31

Sección IV Competencia de urgencia.

Articulo 32.

Sección V. Conexión y acumulación entre pretensiones y procesos.

Artículos 33 a 36.

Sección VI. De las cuestiones prejudiciales.

Artículos 37 y 38

Sección VII. De la incompetencia.

Artículos 39 a 42.

Sección VIII. Se la sustitución y subrogación.

Artículo 43.

CAPITULO II. El Ministerio Público.

Sección I. Disposiciones generales.

Artículos 44 a 49

Sección II, La Policía.

Artículos 50 a 63

CAPITULO III. El Imputado

Sección I. Disposiciones generales.

Artículos 64 a 72

Sección II La Defensa.

Artículos 73 a 81.

CAPITULO IV. La Victima.

Artículos 82 a 84

TITULO III
LA ACCION PENAL

CAPITULO I- Presupuestos para el ejercicio de la acción penal.

Sección I- De las cuestiones previas.

Artículo 85.

Sección II –De la instancia.

Artículos 86 a 99.

CAPITULO II- Excepciones al principio de obligatoriedad.

Artículos 100 a 102.

TITULO IV
LA ACCION CIVIL

Artículos 103 a 107

TITULO V

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO I- De los requisitos de los actos procesales.

Artículos 108 a 114

CAPITULO II- Normas sobre información.

Artículos 115 y 116

CAPITULO III- Comunicaciones.

Sección I- Entre autoridades.

Artículo 117.

Sección II- A las partes y a terceros.

Articulo 118 y 119.

CAPTIULO IV- De los actos del Tribunal y de las partes.

Sección I- De la clasificación de los actos del tribunal.

Artículos 120 y 121.

Sección II- De la sentencia definitiva.

Artículos 122 a 129.

Sección III- De la acusación y la defensa.

Artículos 130 y 131.

Sección IV- De los modos extraordinarios de conclusión del proceso.

Artículos 132 a 136.

Sección VI- De las audiencias.

Artículos 137 a 142.

TITULO VI
LA PRUEBA

CAPITULO I- Reglas generales.

Artículos 143 a 148.

CAPITULO II- Medios de prueba.

Sección I- De la prueba testimonial.

Artículos 149 a167.

148

Sección II- Del careo.

Artículos 168 y 169.

Sección III- Del reconocimiento.

Artículos 170 a 174

Sección IV- De la prueba documental.

Artículos 175 a 178.

Sección V- De la prueba por informes.

Artículo 179.

Sección VI- De la prueba pericial.

Artículo 180 a 183.

Sección VII-De los indicios.

Artículo 184.

Sección VIII- De la inspección judicial y de la reconstrucción del hecho.

Artículos 185 a 188.

Sección IX- De la identificación del cadáver y autopsia.

Artículos 189 y 190.

Sección X- De los registros.

Artículos 191 a 198

Sección XI- De la exhibición e incautación de bienes.

Artículos 199 a 204.

Sección XII- De la exhibición e incautación de actuaciones y documentos públicos y privados.

Artículos 205 y 206

Sección XIII-De la interceptación e incautación postal y electrónica.

Artículos 207 a 209.

Sección XIV- De la intervención de comunicaciones.

Artículos 210 a 212.

Sección XV- De la videovigilancia.

Articulo 213.

149

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Sección XVI- Del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.

Articulo 214 y 215.

CAPITULO II- Prueba anticipada.

Artículos 216 a 218.

TITULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I- Regla general.

Articulo 219.

CAPTIULO II- De la privación o limitación de la libertad física del imputado.

Sección I- Sobre la libertad física de las personas.

Artículos 220 a 223.

Sección II- Medidas de coerción.

Artículos 224 y 225

Sección III- De la prisión preventiva.

Artículos 226 a 238.

Sección IV- De las cauciones.

Artículos 239 a 252.

CAPITULO III- De las cautelas asegurativas sobre los bienes.

Artículos 253 a 257.

LIBRO II

DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO

TITULO I
PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS

Articulo 258.

CAPITULO I- De la indagatoria preliminar.

Articulo 259 a 270.

CAPITULO II- De las audiencias.

Artículos 271 a 274

TITULO II

PROCESO EXTRAORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS

Artículos 275 y 276.

TITULO III

PROCESO EN MATERIA DE FALTAS

Artículos 277 y 278.

TITULO IV
PROCESOS INCIDENTALES

CAPITULO I- Disposiciones generales.

Artículos 279 y 280.

CAPITULO II- Procedimiento.

Artículos 281 a 284.

CAPITULO III-Incidentes especiales.

Sección I- Recusación.

Articulo 285.

Sección II- contienda de competencia.

Articulo 286.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Sección III- Incidente de excarcelación provisional.

Artículos 287 y 288.

LIBRO III

DEL PROCESO DE EJECUCION

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 289.

CAPITULO I- Objeto y procedimiento.

Artículos 290 a 296.

TITULO II
DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

CAPITULO I- De su cumplimiento.

Articulo 297.

CAPITULO II- De la libertad condicional.

Artículos 298 a 300.

CAPITULO III- De la libertad anticipada.

Artículos 301 a 304.

CAPITULO IV- De la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Artículos 305 y 306.

CAPITULO V- Cumplimiento y revocación de los beneficios.

Artículos 307 a 311.

TITULO III

EJECUCION DE LAS PENAS

CAPITULO I- Penas de inhabilitación y suspensión

Artículo 312 a 315.

CAPITULO II- De las penas pecuniarias, sustitutivas y accesorias.

Artículos 316 a 318.

CAPÌTULO III-De las penas alternativas.

Artículo 319

TITULO IV
EXTINCION DE LA PENA

Artículos 320 y 321.

TITULO V
MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO I- Normas generales.

Artículo 322 y 323.

CAPITULO II-Medidas de seguridad eliminativas.

Artículo 324 y 325.

CAPITULO III-Medidas de seguridad curativas.

Artículos 326 y 327

CAPITULO IV- Medidas de seguridad preventivas.

Artículos 328 y 329.

TITULO VI
DEL PROCESO DE UNIFICACION DE PENAS

Artículos 330 y 331.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

LIBRO IV
PROCESOS ESPECIALES

TITULO I
REGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICION

CAPITULO I- Régimen.

Artículos 332 a 336.

CAPITULO II- Solicitud.

Artículos 337 a 340.

CAPITULO III- Arresto preventivo.

Artículos 341 y 342.

CAPITULO IV- Procedimiento.

Articulo 343 a 353.

TITULO II
PROCESO DE "HABEAS CORPUS"

CAPITULO I-Normas generales.

Artículos 354 a 357.

CAPITULO II- Procedimiento.

Artículos 358 a 360.

LIBRO V
MEDIOS IMPUGNATIVOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículos 361 a 3632.

CAPITULO I- Recurso de apelación.

Artículos 364 a 368.

CAPITULO II- Trámite ante el Tribunal de Alzada.

Artículos 369 y 370

CAPITULO III-Recurso de casación.

Artículos 371 y 372.

CAPITULO IV- Recurso de revisión.

Artículos 373 a 380.

TITULO II
DE LAS NULIDADES

Artículos 381 a 384.

TITULO III
DEROGACIONES, OBSERVANCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículos 385 y 386.

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y DEL RÉGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS BÁSICOS

ARTÍCULO 1º. (Debido proceso legal).- No se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente.

ARTÍCULO 2º. (Juez natural).- Los tribunales serán imparciales e independientes y estarán instituidos por la ley, de acuerdo con la Constitución de la República. Sus titulares serán designados conforme a normas generales y objetivas y nunca para un caso determinado.

ARTÍCULO 3º. (Reconocimiento de la dignidad humana).- Toda persona, cualquiera sea su posición en el proceso y en particular la víctima de un delito y aquel a quien se le atribuya su comisión, deben ser tratados con el respeto debido a la dignidad del ser humano.

ARTÍCULO 4º. (Tratamiento como inocente).- Ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada.

ARTÍCULO 5º. (Prohibición del *bis in idem*).- Ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifique la calificación jurídica o se afirmen nuevas circunstancias, toda vez que haya recaído sentencia ejecutoriada.

Se exceptúan los casos en que el proceso haya concluido por falta de presupuestos procesales o defectos de procedimiento.

ARTÍCULO 6º. (Oficialidad).- La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.

ARTÍCULO 7º. (Defensa técnica).- La defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y por ende, un derecho inviolable de la persona.

El imputado tiene derecho a ser asistido por defensor letrado desde el inicio de la indagatoria preliminar.

ARTÍCULO 8º. (Finalidad y medios).- El proceso tiene como finalidad el juzgamiento del caso concreto, con todas las garantías del debido proceso, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que obliguen a la República y las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 9º. (Publicidad y contradicción; principio acusatorio).- El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las limitaciones que se establecen en este Código.

Rige en este proceso el principio acusatorio. En aplicación de dicho principio, no se podrá iniciar actividades procesales, imponer prisión preventiva o medidas limitativas de la libertad ambulatoria, condenar o imponer medidas de seguridad, si no media petición del Ministerio Público.

ARTÍCULO 10. (Duración razonable).- Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, según se dispone en este Código. En su mérito, el tribunal adoptará las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

ARTÍCULO 11. (Gratuidad).- El proceso penal será gratuito, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales.

ARTÍCULO 12. (Otros principios aplicables).- Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso.

ARTÍCULO 13. (Etapas del proceso).- El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

ARTÍCULO 14. (Interpretación e integración).-

14.1 Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es el

juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido proceso.

En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios generales de derecho y de los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso.

14.2 En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios constitucionales y generales de derecho, a los principios específicos del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. Están vedadas la solución analógica y la interpretación extensiva perjudiciales al interés del imputado.

ARTÍCULO 15. (Leyes penales en el tiempo y eficacia procesal).-

15.1 Cuando las leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.

15.2 Cuando esas leyes supriman delitos existentes o disminuyan la pena, se aplicarán a los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso, determinarán la clausura del proceso o la extinción de la pena. En el segundo, solo la modificación de la pena, en cuanto no se hallare esta fijada por sentencia ejecutoriada.

15.3 Estas disposiciones alcanzarán a las leyes de prescripción, salvo lo previsto en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006.

ARTÍCULO 16. (Ley procesal penal en el tiempo).- Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndolo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.

Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior.

ARTÍCULO 17. (Aplicación de la ley procesal en el espacio).- Este Código regirá en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de Derecho Internacional que obliguen a la República.

TÍTULO II

DE LOS SUJETOS PROCESALES

CAPÍTULO I

EL TRIBUNAL

SECCIÓN I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 18. (Organización).- La justicia en materia penal será impartida por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, los Juzgados de Faltas y los Juzgados de Paz Departamentales, en el marco de la competencia atribuida constitucional o legalmente.

ARTÍCULO 19. (Indelegabilidad).- Solo el tribunal es titular de la función jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares solo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del tribunal.

Dicha delegación solo abarcará la realización de actos auxiliares o de aporte técnico, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.

ARTÍCULO 20. (Facultades y deberes del tribunal).- El tribunal dirigirá el proceso de conformidad con la ley. Tiene todas las facultades necesarias para hacerlo. La omisión en su empleo le hará incurrir en responsabilidad.

ARTÍCULO 21. (Responsabilidad).- Los magistrados son responsables por:

a) las demoras injustificadas en proveer o señalar audiencias;

b) proceder con dolo o culpa grave;

c) sentenciar cometiendo error inexcusable.

ARTÍCULO 22. (Clases de jurisdicción).- La jurisdicción penal es común o especial.

22.1 La jurisdicción común es la que tienen los tribunales penales que integran el Poder Judicial y comprende todos los crímenes, delitos y faltas, sin distinción de personas.

22.2 La jurisdicción especial es la militar y queda reservada exclusivamente al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares y a situaciones de excepción, en caso de estado de guerra.

Se entiende por delito militar aquel que vulnera exclusivamente normas contenidas en el ordenamiento penal militar.

22.3 Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común. A esos efectos, el jerarca militar respectivo deberá en todo momento colaborar y brindar auxilio al órgano competente de la jurisdicción común.

SECCIÓN II

De la competencia por razón de la materia y del grado

ARTÍCULO 23. (Competencia de la Suprema Corte de Justicia en materia penal).- La Suprema Corte de Justicia conoce:

23.1 En única instancia, en los casos previstos en la Constitución de la República.

23.2 En los recursos de casación y revisión.

23.3 En consulta, ejerciendo la superintendencia correctiva, administrativa y disciplinaria respecto de aquellas causas en las que no hubiere existido apelación, sin perjuicio de la independencia técnica de los magistrados actuantes.

23.4 En los demás casos en los que este Código o leyes especiales, le asignen competencia.

ARTÍCULO 24. (Tribunales de Apelaciones en lo Penal).- Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia.

ARTÍCULO 25. (Jueces Letrados de Primera Instancia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen:

25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código.

25.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de Montevideo conocerán además en el proceso de extradición.

25.3 Los Jueces Letrados Penales Especializados en Crimen Organizado, en la materia establecida por el Artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008 y disposiciones modificativas y reglamentarias.

25.4 En los demás casos en los que este Código o leyes especiales, les asignen competencia.

ARTÍCULO 26. (Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia conocen en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen a partir del momento en que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, quede ejecutoriada.

ARTÍCULO 27. (Jueces de Faltas).- Los Jueces de Faltas conocen en las causas que se promuevan por faltas cometidas en el departamento de Montevideo.

ARTÍCULO 28. (Jueces de Paz Departamentales del Interior).- Los Jueces de Paz Departamentales del Interior conocen en materia de faltas penales cometidas en sus respectivos departamentos, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

ARTÍCULO 29. (Reglas subsidiarias).- Si no puede determinarse el órgano competente de acuerdo con las normas de los Artículos anteriores, lo será el tribunal que haya prevenido en el conocimiento de los hechos y si ninguno previno, el del lugar en que se haya aprehendido al imputado.

SECCIÓN III

De la competencia por razón de tiempo

ARTÍCULO 30. (Reglas para la determinación de turno).- Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, los Juzgados de Paz Departamentales y los Juzgados de Faltas ejercerán sus funciones por turnos, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia.

SECCIÓN IV

De la competencia de urgencia

ARTÍCULO 31. (Competencia de urgencia).-

31.1 Los jueces de todas las materias y grados son competentes para adoptar las medidas más ur-

gentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces concurren simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente.

31.2 Cualquier magistrado del Ministerio Público podrá solicitar las medidas referidas en el numeral anterior cuando se halle próximo al lugar del hecho, dando cuenta inmediata al fiscal naturalmente competente.

SECCIÓN V

De la conexión y acumulación entre pretensiones y procesos

ARTÍCULO 32. (Casos de conexión).- Existe conexión cuando distintas pretensiones o procesos refieren:

32.1 A una persona por la comisión de varios delitos.

32.2 A varias personas por la comisión de un mismo delito.

32.3 A varias personas por la comisión de distintos delitos, cuando alguno de los delitos ha sido cometido:

a) para ejecutar el otro;

b) en ocasión de este;

c) para asegurar el provecho propio o ajeno;

d) para lograr la impunidad propia o de otra persona;

e) en daño recíproco;

f) en condiciones que determinen que la prueba de uno de ellos o de alguna de sus circunstancias, influya sobre la prueba del otro delito o de alguna de sus circunstancias.

ARTÍCULO 33. (Planteo inicial de pretensiones conexas).- Cuando se advierta inicialmente la conexión de pretensiones, ellas deberán ser planteadas en un proceso único.

ARTÍCULO 34. (Acumulación de pretensiones por inserción).-

34.1 Si una vez iniciado un proceso surgieren pretensiones conexas con las ya deducidas que no hubieren dado lugar a proceso, deberán ser acumuladas por inserción en el mismo proceso.

34.2 No se procederá a la acumulación cuando se hubiere diligenciado íntegramente la prueba o cuando el tribunal disponga por resolución fundada la tramitación por separado.

ARTÍCULO 35. (No acumulación de procesos).- Cuando se hubieren promovido procesos separados, no procederá la acumulación de los mismos y estos serán tramitados y resueltos con independencia por el tribunal competente en cada uno de ellos.

SECCIÓN VI

De las cuestiones prejudiciales

ARTÍCULO 36. (Competencia en cuestiones prejudiciales).-

36.1 El juez del proceso penal es competente para entender en todas las cuestiones ajenas a su materia que se planteen en el curso del proceso penal y resulten decisivas para determinar la existencia del delito o la responsabilidad del imputado.

36.2 La decisión del juez penal sobre las cuestiones a que alude este Artículo solo tendrá eficacia en sede penal.

36.3 Si la cuestión prejudicial hubiera sido resuelta en la sede respectiva por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tendrá esta en el proceso penal la misma eficacia que tiene en su sede natural.

ARTÍCULO 37. (Sentencias contradictorias).- Si la decisión de las cuestiones prejudiciales constituye fundamento principal y determinante de condena penal y las mismas cuestiones son objeto de una posterior sentencia contradictoria en su sede propia, podrá el perjudicado deducir recurso extraordinario de revisión.

SECCIÓN VII

De la incompetencia

ARTÍCULO 38. (Incompetencia por razón de la materia o del grado).-

38.1 La incompetencia por razón de la materia o del grado es absoluta y puede hacerse valer de oficio por el tribunal o por las partes en cualquier momento del proceso.

38.2 Lo actuado por un tribunal absolutamente incompetente es nulo, con excepción de lo dispuesto respecto de las medidas cautelares y de las decisiones que las modifiquen o hagan cesar, cuyos efectos subsistirán hasta que el juez competente resuelva sobre su mantenimiento o revocación.

ARTÍCULO 39. (Incompetencia por razón de lugar o de turno).- La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia o por el tribunal de oficio al empezar su actuación, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

ARTÍCULO 40. (Contienda de jurisdicción).- La Suprema Corte de Justicia resolverá los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar.

ARTÍCULO 41. (Contienda de competencia).- Si por cualquier circunstancia, dos o más tribunales se declararen competentes o incompetentes para entender en un mismo asunto, cualquiera de ellos, de oficio o a petición de parte, someterá la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta resolverá cuál de los tribunales debe entender en el asunto.

SECCIÓN VIII

De la sustitución y subrogación

ARTÍCULO 42. (Orden).- En los casos de vacancia, licencia, impedimento, recusación o abstención, los jueces se subrogarán de la siguiente forma:

42.1 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

42.2 Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, por sorteo entre los miembros de los otros tribunales de la misma materia. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

42.3 El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, por el que comparta la oficina y en su defecto, por el que le preceda en el turno. Si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil.

42.4 El Juez Letrado de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, por su orden, por el juez de igual categoría y lugar con competencia en materia penal, por el de igual categoría y lugar de otra competencia, por el Juez de Paz Departamental con sede en la misma ciudad y por el juez de la misma categoría de la sede más próxima.

42.5 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el que los preceda en turno y si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados en lo Penal del departamento.

42.6 Los Jueces de Faltas y de Paz Departamentales del Interior, según el régimen que establezca la Suprema Corte de Justicia.

En todos los casos de integración de tribunales pluripersonales, el miembro integrante continuará conociendo en el caso hasta su terminación. Si el impedimento es por causa de licencia, la integración se efectuará si esta se prolonga por más de treinta días.

CAPÍTULO II

EL MINISTERIO PÚBLICO

SECCIÓN I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 43. (Función).-

43.1 El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Deberá practicar todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación.

43.2 Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

ARTÍCULO 44. (Remisión).-

44.1 La intervención del Ministerio Público en el proceso se regulará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

44.2 La competencia de los fiscales se regulará en lo pertinente del mismo modo que la fijada para los tribunales, sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

ARTÍCULO 45. (Atribuciones).-

45.1 El Ministerio Público tiene atribuciones para:

a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacional y de la Prefectura Nacional Naval en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes;

b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos;

c) no iniciar investigación;

d) proceder al archivo provisional;

e) aplicar el principio de oportunidad reglado;

f) solicitar medidas cautelares;

g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación;

h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento;

i) atender y proteger a víctimas y testigos.

45.2 Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, es parte en el proceso.

En las diligencias que se practiquen, el Fiscal Letrado actuará directamente o representado por el Fiscal Letrado Adjunto o por un funcionario letrado de la Fiscalía designado por él. En este último caso, bastará con una designación genérica para su efectiva representación.

ARTÍCULO 46. (Independencia técnica).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y los Fiscales Letrados, actuarán con absoluta independencia en el ejercicio de su respectiva competencia y en el plano técnico.

El Ministerio Público no recibirá órdenes ni directivas provenientes de ningún Poder del Estado, sin perjuicio de la superintendencia correctiva y administrativa que le compete al Fiscal de Corte.

ARTÍCULO 47. (Subrogación del Ministerio Público por omisión de acusar).- Vencido el plazo para deducir acusación o su prórroga, el juez ordenará el pasaje del expediente al fiscal subrogante quien tendrá para expedirse los mismos plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al jerarca del Ministerio Público.

ARTÍCULO 48. (Información y protección a las víctimas).-

48.1 Durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos.

48.2 Los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:

a) entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos;

b) ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones;

c) informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo.

Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto la actividad señalada en el literal a) de este inciso.

El Fiscal de Corte reglamentará los procedimientos a seguir por los fiscales para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo.

SECCIÓN II

De la Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval

ARTÍCULO 49. (Función de la Policía Nacional y de la Prefectura Nacional Naval en el proceso penal).-

49.1 La Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las instrucciones que les impartan los fiscales.

49.2 Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los tribunales.

49.3 Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales en la investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de conformidad con las previsiones de este Código.

ARTÍCULO 50. (Dirección del Ministerio Público).-

50.1 Los funcionarios mencionados en el Artículo anterior, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo con las instrucciones que estos les impartan a los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia natural de las jerarquías respectivas.

50.2 También deberán cumplir las órdenes que les impartan los jueces para la tramitación del procedimiento.

50.3 No podrán calificar la procedencia, la conveniencia ni la oportunidad de las órdenes que reciban de jueces y fiscales, pero cuando la ley exija la autorización judicial para la realización de una diligencia, podrán requerir que se les exhiba antes de practicarla.

ARTÍCULO 51. (Comunicaciones entre el Ministerio Público y la autoridad administrativa).- Las comunica-

ciones que los fiscales y la autoridad administrativa deban dirigirse con relación a las actividades de investigación de un caso particular, se realizarán en la forma y por los medios más expeditivos posibles.

ARTÍCULO 52. (Imposibilidad de cumplimiento).- El funcionario de la autoridad administrativa que por cualquier causa se encuentre impedido de cumplir una orden que haya recibido del Ministerio Público o de la autoridad judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la haya emitido y de su superior jerárquico en la institución a la que pertenezca.

El fiscal o el juez que haya emitido la orden, podrá proponer o disponer, según corresponda, las modificaciones que estime convenientes para su debido cumplimiento, o reiterar la orden, si en su concepto no existe tal imposibilidad.

Si el funcionario que recibió la orden continuare alegando la imposibilidad de darle cumplimiento, quien la haya emitido pondrá los hechos en conocimiento del jerarca de dicho funcionario, por las vías pertinentes, a los fines disciplinarios que correspondieren y sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiere haber incurrido el funcionario incumplidor.

ARTÍCULO 53. (Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa).- Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

a) prestar auxilio a la víctima;

b) practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, conforme a la ley;

c) resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo, evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no intervenga personal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público designe.

Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de la individualización completa de los funcionarios intervinientes;

d) identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos presten voluntariamente en el lugar del hecho, tratándose de los casos a que se alude en los literales b) y c) precedentes;

e) recibir las denuncias del público;

f) efectuar las demás actuaciones que dispusieren otras normas legales.

ARTÍCULO 54. (Información al Ministerio Público).- Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá cuando corresponda a realizar las actuaciones previstas en el Artículo precedente, respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la autoridad competente.

ARTÍCULO 55. (Control de identidad).-

55.1 La autoridad administrativa podrá además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal.

55.2 La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, estas solo podrán ser utilizadas con fines identificatorios.

55.3 En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación.

55.4 La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas,

transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad.

ARTÍCULO 56. (Derechos de la persona sujeta a control de identidad).- En cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del Artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar o a otra persona, su permanencia en la repartición policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas.

ARTÍCULO 57. (Instrucciones generales).- Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal actuante imparta en cada caso, el Fiscal de Corte regulará mediante instrucciones generales el procedimiento con que la autoridad administrativa cumplirá las funciones previstas en los Artículos precedentes, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tome conocimiento y respecto de los cuales los datos obtenidos sean insuficientes para estimar si son constitutivos de delito.

ARTÍCULO 58. (Solicitud de registro de actuaciones).- El Ministerio Público podrá requerir en cualquier momento los registros de las actuaciones de la policía.

ARTÍCULO 59. (Registro personal, de vestimenta, equipaje y vehículo).- Se podrá practicar el registro personal de quien se hallare legalmente detenido, de su vestimenta, del equipaje y demás efectos que lleve consigo y del vehículo en el que viaje.

Para practicar el registro personal, se comisionará, siempre que fuere posible, a personas del mismo sexo del detenido.

Se requerirá autorización específica del fiscal competente, para practicar el registro de tal manera que pueda causar daño a la propiedad del detenido.

ARTÍCULO 60. (Levantamiento de cadáver).- En los casos de muerte en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la policía relevará los datos concernientes al hecho con el mayor rigor técnico que las circunstancias permitan. El levantamiento del cadáver solo podrá realizarse previa autorización u orden del fiscal competente, dejando registro de lo obrado de conformidad con las normas generales de este Código.

ARTÍCULO 61. (Declaraciones del imputado ante la policía).- La autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición a declarar, se tomarán las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuera posible, se podrá consignar las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su responsabilidad.

ARTÍCULO 62. (Protección de identidad).- Los funcionarios policiales y de la Prefectura Nacional Naval no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encuentren o puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho presuntamente delictivo, salvo autorización expresa del fiscal competente.

CAPÍTULO III

EL IMPUTADO

SECCIÓN I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 63. (Imputado).-

63.1 Se considera imputado a toda persona a quien el Ministerio Público atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Dicha calidad jurídica puede atribuírsele desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

63.2 El imputado es parte en el proceso con todos los derechos y facultades inherentes a tal calidad, en la forma y con los límites regulados en este Código.

ARTÍCULO 64. (Derechos y garantías del imputado).- Todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren la Constitución de la República y las leyes.

Entre otros, tendrá derecho a:

a) no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;

b) designar libremente defensor de su confianza desde la primera actuación del Ministerio Público y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte. Si no lo tuviera, será asistido por un defensor público en la forma que establece la ley;

c) que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y

los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las leyes;

d) solicitar del fiscal las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulan;

e) solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual deberá concurrir con su abogado con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación;

f) conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada reservada y solo por el tiempo que dure esa reserva, de acuerdo con las normas que regulen la indagatoria preliminar;

g) solicitar el sobreseimiento de la causa y recurrir contra la resolución que rechace la petición, en ambos casos mediante intervención de su defensor;

h) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;

i) negarse a prestar juramento o promesa de decir la verdad;

j) no ser juzgado en ausencia.

ARTÍCULO 65. (Imputado privado de libertad).- El imputado privado de libertad tendrá además las siguientes garantías y derechos:

a) que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y la orden judicial que la haya dispuesto, salvo el caso de delito flagrante;

b) que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o aprehensión le informe sobre los derechos que le asisten;

c) que si no tuviera defensor designado previamente, cualquier familiar o persona allegada pueda proponer para él un defensor determinado, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 64 literal b) de este Código;

d) ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención;

e) solicitar al tribunal que le conceda la libertad ambulatoria;

f) que la autoridad administrativa del lugar en el cual se encuentra detenido informe en su presencia a la persona que él indique, que ha sido detenido y el motivo de su detención;

g) tener a sus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en el que está detenido;

h) entrevistarse privadamente con su defensor.

ARTÍCULO 66. (Reglas sobre la declaración del imputado).-

66.1 El tribunal interrogará al imputado, en la primera oportunidad, sobre su nombre y demás datos personales para su identificación. La duda, error o falsedad sobre los datos obtenidos no retardarán ni suspenderán el desarrollo de la audiencia preliminar cuando sea cierta la individualización del imputado.

66.2 Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, el imputado podrá hacer nuevas declaraciones y aun solicitar al juez que se le reciba para ello en audiencia no prevista especialmente en este Código, estándose a lo que resuelva el magistrado. A dicha audiencia deberán concurrir todas las partes.

66.3 El tribunal se limitará a exhortarlo a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen, sin perjuicio de su derecho a no declarar.

66.4 Si el imputado no conoce el idioma español o si es sordo, mudo o sordomudo, el juez dispondrá en tales casos la utilización de peritos intérpretes reconocidos y la formulación de las preguntas y respuestas por escrito, cuando fuere necesario. El juez podrá autorizar también cualquier sistema de comunicación que se estime adecuado.

ARTÍCULO 67. (Inimputabilidad).-

67.1 En cualquier etapa del proceso en que se denuncie por alguno de los sujetos, o resulte manifiesto que el imputado en el momento de ejecutar el acto que se le atribuye se encontraba en uno de los casos previstos en los Artículos 30 a 33 o 35 del Código Penal, previo dictamen pericial podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especializado.

67.2 Del mismo modo se procederá si el encausado deviniere inimputable durante la tramitación del proceso.

67.3 El proceso continuará el trámite común hasta la sentencia definitiva y de resultar el encausado condenado, se le declarará autor inimputable del delito cometido y se le impondrán medidas curativas en sustitución de la pena.

ARTÍCULO 68. (Minoría de edad).- Si en cualquier estado de los procedimientos se comprueba que

cuando el imputado cometió el hecho era inimputable por razón de edad, se clausurarán las actuaciones y se remitirán los antecedentes al tribunal competente, estándose a lo que este determine.

ARTÍCULO 69. (Rebeldía).- Queda prohibida la tramitación del proceso penal en rebeldía.

ARTÍCULO 70. (Declaración de rebeldía).-

70.1 Será considerado rebelde el imputado que debidamente citado por el juez de la causa no comparezca ante él ni justifique su incomparecencia.

70.2 Incurso el imputado en rebeldía, el fiscal solicitará al tribunal que así lo declare y que en el mismo acto libre orden de detención contra el rebelde.

70.3 La declaración de rebeldía del imputado suspende el proceso a su respecto y será considerada razón suficiente para solicitar medidas asegurativas sobre sus bienes.

70.4 Cuando cese la situación de rebeldía, el tribunal lo declarará y el proceso continuará según su estado.

SECCIÓN II

De la defensa

ARTÍCULO 71. (Derechos y deberes del defensor).-

71.1 El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que esta expresamente reserve su ejercicio exclusivo a este último.

71.2 El ejercicio de la defensa es un derecho y un deber del abogado que acepta el cargo y abarcará la etapa de conocimiento y la de ejecución.

71.3 El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, con todos los derechos y atribuciones de esa calidad.

71.4 El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público. El juez, bajo su más seria responsabilidad funcional, adoptará las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio de las medidas urgentes y reservadas.

71.5 Todo abogado tiene derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención, que le informe por escrito y de inmediato, si una persona está o no está detenida en ese establecimiento.

El ejercicio de este derecho no condiciona en modo alguno el ejercicio de la acción de habeas corpus.

ARTÍCULO 72. (Designación inicial y aceptación del cargo).-

72.1 La designación de defensor se efectuará antes de cualquier diligencia indagatoria, salvo las de carácter urgente. Solo podrá ser defensor quien esté habilitado para ejercer la abogacía en el territorio nacional.

72.2 Si requerido el imputado no realizara la elección, o el elegido no aceptare de inmediato o no se le encontrare, actuará el defensor público que por turno corresponda.

72.3 Para tener por designado a un defensor, se requiere que acepte el cargo y que constituya domicilio en legal forma.

ARTÍCULO 73. (Defensa conjunta).-

73.1 La defensa podrá ser ejercida hasta por dos abogados. En este caso deberán constituir sus respectivos domicilios procesales electrónicos y un único domicilio procesal físico en el radio correspondiente al tribunal en el que comparecen. En todo tiempo podrán actuar en el proceso conjunta o separadamente.

73.2 Todo acto procesal realizado por un defensor será eficaz respecto del otro integrante de la defensa conjunta.

ARTÍCULO 74. (Defensa común).-

74.1 La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustente no fueren incompatibles entre sí.

74.2 Si el tribunal advierte una situación de incompatibilidad, la hará presente a los imputados y les otorgará un plazo de hasta cinco días hábiles para que cada uno designe su defensor, bajo apercibimiento de asignarles defensores de oficio.

74.3 Si vencido el plazo, alguno de los imputados no ha designado a su defensor, el tribunal le asignará defensor público.

74.4 Las resoluciones sobre este punto serán irrecurribles.

ARTÍCULO 75. (Efectos de la ausencia del defensor).- La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación, acarreará su nulidad.

ARTÍCULO 76. (Renuncia o abandono de la defensa).-

76.1 La renuncia formal del defensor no suspenderá el proceso, ni lo liberará del deber de realizar todos los actos que sean necesarios para salvaguardar los derechos del imputado.

76.2 El tribunal notificará al imputado y le intimará la designación de nuevo defensor, concediéndole para ello un plazo de hasta cinco días hábiles bajo apercibimiento de asignarle el defensor público que por turno corresponda.

ARTÍCULO 77. (Nombramiento ulterior).- El imputado puede designar posteriormente otro defensor en reemplazo del anterior, pero el subrogado no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte el cargo.

ARTÍCULO 78. (Patrocinio propio).-

78.1 No se admitirá que el imputado se defienda a sí mismo, salvo que fuere abogado.

78.2 El denunciante o la víctima que fueren abogados habilitados para el ejercicio de su profesión, podrán asistirse profesionalmente a sí mismos.

CAPÍTULO IV

LA VÍCTIMA

ARTÍCULO 79. (La víctima).-

79.1 Se considera víctima a la persona ofendida por el delito.

79.2 Al momento de formular instancia o denunciar el hecho, la víctima o su representante podrá manifestar su intención de participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que este Código le asigna.

79.3 En la primera oportunidad procesal la víctima que haya hecho uso del derecho establecido en el numeral precedente, o su representante, deberá proporcionar sus datos identificatorios, constituir domicilio dentro del radio del juzgado, comunicando los cambios sucesivos y designar abogado patrocinante.

79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les designará defensor público.

ARTÍCULO 80. (Representantes de la víctima y legitimados para el ejercicio de sus derechos).-

80.1 En la indagatoria y juzgamiento de delitos en los que haya ocurrido la muerte de la víctima, o en los casos en que esta, siendo legalmente capaz, no pueda ejercer por sí los derechos que este Código le otorga, podrán comparecer las siguientes personas, quienes ejercerán como suyos el derecho e interés que hubieran correspondido a la víctima fallecida o, en su caso, actuarán en su representación:

a) a los padres, conjunta o separadamente por sus hijos sometidos a patria potestad, o solteros o divorciados o viudos, no unidos en concubinato, que no tuvieren, a su vez, hijos mayores de edad;

b) el cónyuge, si no estaba separado voluntariamente de la víctima al momento del delito; el concubino; los hijos mayores de edad;

c) los hermanos;

d) el tutor, curador o guardador;

e) los abuelos;

f) los allegados que cohabitaban con la víctima o mantenían con ella una forma de vida en común.

Los menores y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes legales.

No podrán actuar en representación de las víctimas ni ejercer los derechos que a estas correspondan, quienes fueran indagados por su presunta responsabilidad en el delito.

80.2 A efectos de su intervención en el procedimiento, la enunciación precedente constituye un orden de prelación, de manera que la actuación de una o más personas pertenecientes a determinada categoría, excluye a las comprendidas en las siguientes.

80.3 Las cuestiones que se susciten por la aplicación de las disposiciones precedentes se tramitarán por la vía incidental y no suspenderán el curso del proceso principal. Contra las providencias que se dicten en el curso del incidente y aun contra la sentencia que le ponga fin, no cabrá otro recurso que el de reposición.

ARTÍCULO 81. (Derechos y facultades de la víctima).-

81.1 La víctima del delito tendrá los derechos que le reconoce este Código, sin perjuicio de los deberes que, para la defensa del interés de aquella, se imponen al fiscal.

81.2 La víctima del delito podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código y tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

a) a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio de la fa-

cultad del fiscal de disponer que las mismas se mantengan en reserva cuando ello sea necesario para asegurar la eficacia de la investigación (Artículo 259.3 de este Código);

b) a intervenir en el proceso y ser oída en los términos previstos en este Código;

c) a proponer prueba durante la indagatoria preliminar, así como en la audiencia preliminar y en la segunda instancia, si la hubiere, coadyuvando con la actividad indagatoria y probatoria del fiscal. En el diligenciamiento y producción de la prueba que haya sido propuesta por la víctima, esta tendrá los mismos derechos que las partes;

d) a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones contra ella, sus familiares o sus allegados;

e) a solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del encausado o relacionados con el delito;

f) a oponerse, ante el tribunal, a la decisión del fiscal de no iniciar o dar por concluida la indagatoria preliminar, o no ejercer la acción penal;

g) a ser oída por el tribunal antes que dicte resolución sobre el pedido de sobreseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129 de este Código.

TÍTULO III

DE LA ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO

DE LA ACCIÓN PENAL

SECCIÓN I

De las cuestiones previas

ARTÍCULO 82.- La acción penal es pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es necesario, salvo las excepciones establecidas por la ley.

ARTÍCULO 83. (Cuestiones previas).- Si el ejercicio de la acción penal estuviere condicionado por la Constitución de la República o la ley a la previa realización de cierta actividad o la resolución judicial o administrativa de una cuestión determinada, no se efectuarán actuaciones judiciales con respecto a la persona a que refiere la condición mientras subsista el impedimento, sin perjuicio de la práctica de las medidas indispensables para la conservación de la prueba practicada en la forma y con las garantías previstas en este Código.

SECCIÓN II

De la instancia

ARTÍCULO 84. (Concepto).-

84.1 La instancia es la manifestación inequívoca de voluntad del ofendido por un delito, en el sentido de movilizar el proceso penal para la condena de los responsables.

84.2 No constituye instancia la mera noticia de la ocurrencia del hecho.

ARTÍCULO 85. (Extensión).- La instancia dirigida contra uno de los copartícipes del delito se extiende a los demás.

ARTÍCULO 86. (Legitimados para instar).- Cuando el ofendido no pudiere actuar por sí, estarán legitimadas para instar al Ministerio Público al ejercicio de la acción penal las personas indicadas en el Artículo 80 de este Código.

ARTÍCULO 87. (Contenido de la instancia).- En la instancia deberá constar el lugar y fecha de presentación, el nombre, edad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de quien insta y el hecho al que alude.

Si se conocen los presuntos autores, cómplices o encubridores del hecho punible, se mencionarán, indicándose en lo posible su paradero, sus relaciones de familia, su profesión u oficio y sus rasgos fisonómicos, expresándose también quiénes fueron los testigos presenciales del hecho.

ARTÍCULO 88. (Método para instar).- La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito, dejándose en todos los casos constancia en acta. También podrá deducirse, necesariamente por escrito, ante las autoridades con funciones de policía.

ARTÍCULO 89. (Firma de la instancia).- La instancia que se formule por escrito será firmada por su autor, en presencia de la autoridad respectiva. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará con la impresión dígito pulgar derecha del interesado o, en su defecto, la dígito pulgar izquierda. A continuación se dejará constancia de que la persona conoce el texto del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformidad.

ARTÍCULO 90. (Confirmación de la voluntad de instar).- Al inicio de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público explicará a quien formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de instar, se la tendrá por bien formulada dejándose constancia en el acta respectiva. Si el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá volver a hacerlo por los mismos hechos.

ARTÍCULO 91. (Caducidad del derecho a instar).- El derecho a instar caduca a los seis meses contados desde la comisión del hecho presuntamente delictivo, o desde que el ofendido o la persona legitimada para instar pudo hacerlo.

ARTÍCULO 92. (Desistimiento).-

92.1 Podrá desistirse de la instancia antes de que el Ministerio Público formalice la acusación, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

92.2 Cuando la instancia haya sido formulada por uno de los padres, solamente el que instó tiene facultades para desistir.

ARTÍCULO 93. (Aceptación del desistimiento).- Para ser eficaz, el desistimiento deberá ser aceptado por el imputado. Se entenderá que lo acepta si no manifiesta su oposición dentro de los tres días siguientes al de la notificación.

ARTÍCULO 94. (Efectos del desistimiento).- El desistimiento aceptado dará por concluido el proceso, el cual no podrá volver a iniciarse por los mismos hechos.

ARTÍCULO 95. (Efecto extensivo).- En casos de desistimiento de la instancia, sus efectos se extenderán a todos los copartícipes del delito.

ARTÍCULO 96. (Delitos perseguibles a instancia del ofendido).- Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal.

ARTÍCULO 97. (Procedimiento de oficio).- En los delitos de violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, rapto, traumatismo y lesiones ordinarias intencionales, se procederá de oficio en los siguientes casos cuando:

a) el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio;

b) la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no hubiere persona legitimada para instar;

c) el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores, guardadores o tenedores de hecho o de derecho o con abuso de las relaciones domésticas o de la cohabitación;

d) la persona agraviada fuere menor de dieciocho años y estuviere internada en un establecimiento público;

e) el delito fuere cometido por quien tuviere respecto de la persona agraviada responsabilidad en la atención de su salud o educación;

f) la persona agraviada estuviere respecto de quien cometió el delito en una relación de dependencia laboral.

CAPÍTULO II

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD

ARTÍCULO 98. (Facultades de no iniciar y de dar por terminada la investigación).-

98.1 El fiscal podrá abstenerse de toda investigación, o dar por terminada una investigación ya iniciada, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. La resolución de no investigar o de dar por terminada la investigación será siempre fundada, y se comunicará al denunciante y en su caso a la víctima que hubiere comparecido o estuviere identificada.

98.2 El denunciante o la víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por el fiscal subrogante, dentro de los treinta días de haber sido notificado.

98.3 Si oídos el peticionante y el fiscal actuante, el tribunal considerare que los hechos denunciados pudieran constituir delito, que la presunta responsabilidad penal del imputado pudiera no encontrarse extinguida o que es posible continuar útilmente la indaga-

toria, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento. La resolución no admitirá recursos. El fiscal actuante hasta ese momento quedará inhibido de seguir entendiendo en el asunto.

98.4 Las actuaciones se remitirán al fiscal subrogante, quien dispondrá de un plazo de veinte días para expedirse ordenando el comienzo o la continuación de la indagatoria, o reiterando la negativa a hacerlo. La decisión del fiscal subrogante concluirá la cuestión y se comunicará al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante que solicitó el reexamen del caso.

ARTÍCULO 99. (Nuevos hechos o medios de prueba).- Aunque hubiese resuelto no iniciar o dar por terminada la investigación de un caso de conformidad con las disposiciones de este Código, el fiscal podrá siempre iniciarla o continuarla, si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos medios de prueba que lo justifiquen.

ARTÍCULO 100. (Principio de oportunidad).-

100.1 El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, en los siguientes casos:

a) cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad, o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;

b) si se trata de delito culposo que haya irrogado al imputado una grave aflicción, cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que derivan de la aplicación de una pena;

c) si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría, no concurriendo alguna de las causas que suspenden o interrumpen la prescripción.

100.2 La decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada se adoptará siempre por resolución fundada y se remitirá al tribunal competente, conjuntamente con sus antecedentes, para el control de su regularidad formal; también se comunicará al jerarca del servicio y, en su caso, al denunciante y a la víctima que hubiere comparecido.

100.3 Si el tribunal entiende que la decisión del fiscal no se ajusta a derecho, así lo declarará, con noticia del jerarca del Ministerio Público. En tal caso el fiscal actuante quedará impedido de seguir conociendo en el asunto. Los autos se remitirán al fiscal subrogante, quien deberá expedirse en el plazo de veinte días reiterando o rectificando, definitivamente, la posición de la Fiscalía.

TÍTULO IV

DE LA ACCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 101. (Acción civil).- La acción civil no podrá ejercerse en sede penal, sin perjuicio de las medidas cautelares que se puedan dictar a petición de parte.

ARTÍCULO 102. (Facultades de los sujetos de la acción civil).- La prohibición precedente no obsta al ejercicio de las facultades procesales que este Código reconoce a la víctima y al tercero civilmente responsable.

ARTÍCULO 103. (Ejercicio separado de las acciones civil y penal).- La acción civil y la acción penal que se funden en el mismo hecho ilícito, deberán ejercitarse separada e independientemente en las sedes respectivas.

ARTÍCULO 104. (Relación entre los procesos civil y penal).- La independencia señalada en el Artículo anterior comprenderá la totalidad de los procesos civil y penal, incluyendo los correspondientes fallos y sin perjuicio de lo que se establece en el Artículo siguiente.

ARTÍCULO 105. (Prueba trasladada, recurso de revisión).- Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse al otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Podrá interponerse igualmente en uno de ellos y en mérito a las resultancias del otro, el recurso de revisión civil o penal, que pudiere corresponder según el caso.

TÍTULO V

DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I

REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES

ARTÍCULO 106. (Remisión).- Se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo I, Secciones I, II, III y VI del Código General del Proceso, en lo pertinente, con las exclusiones y modi-

ficaciones que se expresan en los Artículos siguientes.

ARTÍCULO 107. (Exclusiones).- No se aplican al proceso penal las disposiciones de los Artículos 71.3, 71.4, 78, 84, 87 y 89 del Código General del Proceso.

ARTÍCULO 108. (Idioma).-

108.1 Los actos procesales deberán cumplirse en idioma español.

108.2 La declaración de personas que ignoren el idioma español, de sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o lenguaje gestual y los documentos o grabaciones en lengua distinta, o en otra forma de transmisión del conocimiento, deberán ser traducidos o interpretados, según corresponda.

ARTÍCULO 109. (Lugar).-

109.1 El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y el propio tribunal, si correspondiere, podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarque su competencia o si fuere necesario, en cualquier lugar del territorio nacional.

109.2 Excepcionalmente, podrán efectuarse diligencias probatorias en el extranjero, con autorización del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia respectivamente y con el consentimiento de las autoridades competentes del país requerido, conforme a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 110. (Tiempo del proceso).- Los tribunales podrán habilitar días y horas según los requerimientos del proceso. Salvo expresa disposición en contrario, se considera hábil todo el tiempo necesario para el diligenciamiento de la prueba.

ARTÍCULO 111. (De los plazos procesales).- La iniciación, suspensión, interrupción, término y cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los actos del proceso penal, se regularán en lo pertinente por las normas del proceso civil con excepción de lo establecido en el Artículo 92 del Código General del Proceso.

ARTÍCULO 112. (Forma de actuación).- Las sentencias del tribunal y las peticiones y alegaciones de cualquiera de las partes y de la víctima, serán siempre fundadas.

CAPÍTULO II

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 113. (Derechos del imputado).-

113.1 Toda persona, a la que un medio masivo de comunicación haya atribuido la calidad de imputada en un proceso penal, tiene derecho a que se publique gratuitamente en nota de similares características, información relativa a su sobreseimiento, absolución o clausura del proceso, cualquiera fuera la razón de la misma.

113.2 Si el medio de información se negare a ello, el interesado podrá acudir al procedimiento establecido en la ley para el ejercicio del derecho de rectificación o de respuesta.

CAPÍTULO III

COMUNICACIONES

SECCIÓN I

Entre autoridades

ARTÍCULO 114. (Comunicaciones nacionales e internacionales).- Cuando el tribunal deba dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacionales o internacionales, o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, podrá efectuar la comunicación por cualquier medio idóneo, dejando de ello constancia escrita y fehaciente.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales que obliguen a la República.

SECCIÓN II

A las partes y a terceros

ARTÍCULO 115. (Actos que se notifican).-

115.1 Toda actuación judicial salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a las partes mediante el procedimiento establecido en el Artículo siguiente.

115.2 Las providencias judiciales que sean pronunciadas en audiencia, se tendrán por notificadas en ella.

ARTÍCULO 116. (Forma de las notificaciones).-

116.1 Las notificaciones de las providencias judiciales salvo las que sean dictadas en audiencia, serán realizadas en los domicilios constituidos por las partes o en su defecto, en sus respectivos domicilios reales, cuando la ley no disponga especialmente otro modo de hacerlo, sin perjuicio de lo establecido sobre domicilio electrónico.

116.2 A los efectos de esta disposición, los despachos de los fiscales y de los defensores públicos se tendrán como sus respectivos domicilios procesales.

116.3 La sentencia definitiva se notificará a las partes con copia íntegra, autenticada por el actuario.

Será notificada además al imputado en el establecimiento de reclusión o en su caso, en el domicilio constituido. Si ello no fuera posible, la diligencia se realizará en el domicilio constituido en autos por el defensor.

CAPÍTULO IV

ACTOS DEL TRIBUNAL Y DE LAS PARTES

SECCIÓN I

De la clasificación de los actos del tribunal

ARTÍCULO 117 (Clasificación).-

117.1 Sentencia es la decisión del tribunal sobre la causa o punto que se controvierte ante él.

117.2 Las sentencias son interlocutorias o definitivas.

117.3 Sentencia interlocutoria es la que resuelve una cuestión sobre algún Artículo o incidente, y definitiva es la que resuelve sobre lo principal.

117.4 Las demás providencias que dicta el tribunal son decretos de mero trámite.

ARTÍCULO 118. (Remisión).- Será de aplicación al proceso penal en lo pertinente, lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo V del Código General del Proceso.

SECCIÓN II

De la sentencia definitiva

ARTÍCULO 119. (Forma y contenido de la sentencia definitiva).-

119.1 La sentencia definitiva deberá consignar:

a) la fecha en que se dicta, la identificación de los autos, el nombre del o de los acusados, la mención del representante del Ministerio Público y el defensor que actúan en el juicio y la mención del delito o delitos imputados;

b) expresará a continuación por Resultandos, las actuaciones incorporadas al proceso relacionadas con las cuestiones a resolver, las pruebas que le sirvieron de fundamento, las conclusiones de la acusación y la defensa y finalmente, debidamente articulados, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados;

c) determinará luego por Considerandos, el derecho a aplicar respecto de: la tipicidad de los hechos probados, la participación de los imputados, las circunstancias alteratorias de la pena y la modalidad concursal de los delitos.

119.2 La sentencia definitiva puede ser de absolución o de condena.

119.3 La sentencia de absolución examinará el mérito de la causa y destacará la falta de prueba o la existencia de causas de justificación, de inculpabilidad, de impunidad o de extinción del delito.

119.4 La sentencia de condena expresará los fundamentos de la individualización de la pena y condenará a la que corresponda. También se pronunciará sobre la pena de confiscación y demás accesorias, así como respecto de la aplicación de medidas de seguridad, en su caso.

119.5 La sentencia que imponga medidas de seguridad curativas fundamentará la declaración de inimputabilidad y precisará el régimen de las mismas.

119.6 Dispondrá el destino de las cosas secuestradas y sujetas a confiscación.

119.7 La sentencia absolutoria o la que dispone el sobreseimiento, ordenará que las cosas secuestradas sean devueltas a la persona de quien se obtuvieron.

ARTÍCULO 120. (Principio de congruencia).-

120.1 La sentencia no podrá imponer pena ni medida de seguridad sin previa petición fiscal, ni superar el límite de la pena o medida requerida por el Ministerio Público.

120.2 Si por error manifiesto la pena requerida es ilegal, el juez procederá igualmente al dictado de sentencia y si resultare de condena, impondrá la pena dentro de los márgenes legales, poniendo en conocimiento del hecho al jerarca del Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los errores del fiscal serán juzgados en vía administrativa.

ARTÍCULO 121. (Principio de no reforma en perjuicio).- En segunda instancia y en casación, si solo recurrió la parte del imputado no se podrá modificar la sentencia en perjuicio de este.

ARTÍCULO 122. (Efecto extensivo).- La sentencia de segunda instancia o de casación en el fondo, o de revisión que absuelva a uno de los copartícipes de un delito o establezca una calificación delictual o atenuantes que lo beneficien, debe extender sus efectos a los demás, aun cuando hubiere recaído sentencia ejecutoriada, salvo que se trate de circunstancias referidas solo al primero.

En la misma sentencia, el tribunal modificará el fallo referido, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 123. (Confiscación o destrucción de instrumentos o efectos destinados a actividades ilícitas).- Al concluir el proceso penal, aun cuando no recayere sentencia de condena, el tribunal resolverá la confiscación o destrucción de los efectos materiales del delito y de los instrumentos con que fue ejecutado que pudieren ser destinados a actividades ilícitas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

ARTÍCULO 124. (Efectos de la absolución).-

124.1 La sentencia absolutoria ejecutoriada cierra el proceso definitiva e irrevocablemente en relación al imputado en cuyo favor se dicta.

124.2 La sentencia absolutoria ordenará cuando sea del caso, la libertad del imputado o la cesación de las medidas de coerción que se le hubieren aplicado.

124.3 Aunque la sentencia sea recurrida por el Ministerio Público, la libertad o cese de las medidas limitativas de la libertad del imputado serán cumplidas con carácter provisional.

ARTÍCULO 125. (Eficacia de la sentencia).- Las sentencias ejecutoriadas producirán todos sus efectos sin perjuicio de la unificación de penas, cuando corresponda.

ARTÍCULO 126. (Unificación de penas).- La unificación de penas será tramitada en vía incidental, en la causa más antigua, y la sentencia que recaiga será considerada definitiva a todos sus efectos.

SECCIÓN III

De la acusación y la defensa

ARTÍCULO 127. (De la acusación).- La acusación se ajustará formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia, en lo pertinente.

Deberá contener:

a) los hechos que el fiscal considere probados y su calificación legal;

b) la participación que en ellos hubiere tenido el imputado;

c) las circunstancias alteratorias concurrentes;

d) la petición de la pena o de la medida de seguridad, según corresponda.

ARTÍCULO 128. (De la defensa).- La defensa deberá ajustarse formalmente y en lo pertinente a las mismas reglas que rigen la acusación.

SECCIÓN IV

De los modos extraordinarios de conclusión del proceso

ARTÍCULO 129. (Pedido de sobreseimiento).-

129.1 El Ministerio Público, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia ejecutoriada, podrá desistir del ejercicio de la acción penal solicitando el sobreseimiento por alguno de los fundamentos previstos en el Artículo siguiente.

129.2 Previo a resolver, el tribunal oirá a la víctima en los términos que a continuación se establecen:

a) si el pedido es formulado fuera de audiencia y la víctima hubiera comparecido durante el proceso, se le dará traslado personal por seis días;

b) si el pedido es formulado en audiencia y la víctima estuviera participando, previo traslado, lo evacuará en el momento. Si no estuviere presente en la audiencia, aunque hubiera participado con anterioridad, no se le conferirá traslado.

129.3 Si la víctima no se opone, el tribunal deberá decretar el sobreseimiento sin más trámite, mediante auto fundado exclusivamente en la solicitud del fiscal y en la no oposición de la víctima. Si existe oposición, el juez podrá:

a) desestimarla, decretando el sobreseimiento pedido por el Ministerio Público;

b) acogerla, disponiendo en ese caso el reexamen del caso por el fiscal subrogante.

129.4 El fiscal subrogante dispondrá de un plazo de veinte días para expedirse, reiterando el pedido de sobreseimiento o continuando con el proceso según su estado.

129.5 Si el fiscal subrogante reitera el pedido de sobreseimiento, el juez lo decretará sin más trámite. La sentencia se notificará a las partes, a la víctima y al jerarca del Ministerio Público.

ARTÍCULO 130. (Procedencia del sobreseimiento).- El Ministerio Público deberá fundar el pedido de sobreseimiento en alguna de las siguientes causales:

a) cuando agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba de que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su comisión;

b) cuando el hecho no constituya delito;

c) cuando resulte de modo indudable que medió una causa de justificación, de inculpabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal.

ARTÍCULO 131. (Sobreseimiento a pedido de la defensa).-

131.1 Antes de la acusación fiscal, la defensa podrá pedir al tribunal el sobreseimiento del imputado por cualquiera de las causas previstas en el Artículo anterior.

131.2 El incidente se sustanciará con la víctima que hubiere comparecido a la audiencia preliminar y luego con el fiscal.

131.3 Si el fiscal no se opone al sobreseimiento, el juez deberá decretarlo.

131.4 Si el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa fuera denegado, esta no podrá volver a plantearlo, salvo que alegare hechos no conocidos al tiempo de formular la primera solicitud u ofreciere nuevos medios de prueba.

ARTÍCULO 132. (Efectos).- El sobreseimiento tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria.

ARTÍCULO 133. (Clausura definitiva).- Se clausurará definitivamente el proceso cuando concurra alguna de las siguientes causales:

a) muerte del imputado;

b) amnistía;

c) gracia;

d) indulto;

e) la existencia de sentencia ejecutoriada recaída sobre los mismos hechos (bis in idem);

f) prescripción.

Dichas causales podrán ser declaradas en cualquier estado del juicio, de oficio o a petición de parte. En el primer caso, se notificará personalmente a las partes quienes tendrán el plazo perentorio de diez días para impugnar mediante recurso de apelación. En el segundo caso, la petición se tramitará por vía incidental.

SECCIÓN V

De las audiencias

ARTÍCULO 134. (Presidencia y asistencia).-

134.1 Las audiencias serán presididas por el tribunal.

134.2 Las audiencias se celebrarán con la presencia del juez, del Ministerio Público, del defensor y del imputado. La ausencia de cualquiera de estos sujetos procesales aparejará la nulidad de la audiencia, la cual viciará a los ulteriores actos del proceso y será causa de responsabilidad funcional de los dos primeros y del defensor, según corresponda.

134.3 La víctima podrá asistir y su participación será facultativa, con el alcance, los derechos y de la forma que se establece en este Código.

ARTÍCULO 135. (Publicidad).- Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos:

a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad;

b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso;

c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley.

Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición.

ARTÍCULO 136. (Continuidad).-

136.1 Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará en el acto la fecha de su reanudación, salvo razones fundadas.

136.2 De no establecerse plazo específico de prórroga, la audiencia deberá fijarse para la fecha más cercana posible, a los efectos de procurar la continuidad del proceso.

136.3 La no realización de cualquiera de las audiencias dentro de los plazos previstos en este Código por causas no imputables a las partes, generará responsabilidad administrativa del juez interviniente.

ARTÍCULO 137. (Dirección).- Las audiencias serán dirigidas por el tribunal. Este ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan y moderará la discusión, impidiendo derivaciones inadmisibles, impertinentes o inconducentes, sin coartar por ello el libre ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa.

ARTÍCULO 138. (Disciplina y control).- El tribunal deberá adoptar a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias para asegurar el normal y continuo desarrollo de las audiencias, así como la preservación de su decoro y eficacia, estando facultado especialmente para:

a) ordenar que se retire de sala quien perturbe el desarrollo de la audiencia;

b) prohibir al público y a la prensa el empleo de medios técnicos de reproducción y filmación, cuando ello perturbe la regularidad del acto.

ARTÍCULO 139. (Documentación).-

139.1 Lo actuado en audiencia se documentará en acta que se labrará durante su transcurso. Además, el tribunal dispondrá el registro de lo actuado mediante la utilización de medios técnicos apropiados.

139.2 Las partes y la víctima podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar su fidelidad, estándose en este caso a lo que el tribunal resuelva en el acto. Esta decisión solo será susceptible del recurso de reposición.

139.3 Mediando acuerdo de partes el tribunal podrá disponer que la copia del registro que hubiera autorizado realizar a las partes o a la víctima se incorpore al acta de la audiencia como registro oficial.

TÍTULO VI

DE LA PRUEBA

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 140. (Actividad probatoria).-

140.1 La actividad probatoria en los procesos penales está regulada por la Constitución de la República, los Tratados aprobados y ratificados por nuestro país, por este Código y por leyes especiales.

140.2 Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público, la defensa y la víctima. El tribunal decidirá su admisión y podrá rechazar los medios probatorios innecesarios, inadmisibles o inconducentes.

140.3 Las resoluciones dictadas por el tribunal sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, serán apelables con efecto diferido.

ARTÍCULO 141. (Objeto de la prueba).- El objeto de la prueba en materia penal es:

a) la comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado;

b) la averiguación de la participación que haya tenido el imputado en los hechos investigados;

c) la concurrencia de causas de justificación;

d) la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes;

e) los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena.

ARTÍCULO 142. (Certeza procesal).-

142.1 No se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en el proceso plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del imputado.

142.2 En caso de duda, deberá absolverse al imputado.

ARTÍCULO 143. (Valoración de la prueba).- Las pruebas serán valoradas por separado y en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

El tribunal indicará concretamente el o los medios de prueba que constituyan el fundamento principal de su decisión.

ARTÍCULO 144. (Medios de prueba).- Son medios de prueba los previstos expresamente en este Código y cualquier otro medio no prohibido por la Constitución de la República o la ley, que pueda utilizarse aplicando analógicamente las reglas que disciplinan a los expresamente previstos.

ARTÍCULO 145. (Prueba trasladada).- Las pruebas producidas en otro proceso, sea nacional o extranjero, aun cuando no hubiere mediado contralor de las partes, serán apreciadas por el tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. Las partes podrán solicitar las medidas complementarias o ampliatorias que estimen del caso.

CAPÍTULO II

MEDIOS DE PRUEBA

SECCIÓN I

De la confesión

ARTÍCULO 146. (Confesión).-

146.1 La confesión consiste en la admisión por el imputado de los hechos contrarios a su interés.

146.2 Para que la confesión tenga valor probatorio es preciso que el imputado, asistido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos de convicción la corroboren.

SECCIÓN II

De la prueba testimonial

ARTÍCULO 147. (Deber de testimoniar).- Podrá disponerse el interrogatorio de toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados.

Nadie puede negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley.

ARTÍCULO 148. (Derechos del testigo).- Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, se garantizará la plena vigencia de los siguientes derechos a los testigos convocados:

a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;

b) a ser informado sobre el motivo de su citación;

c) a pedir protección para él y su familia, en sus personas y sus bienes, si lo estimare necesario.

ARTÍCULO 149. (Capacidad).- Toda persona puede atestiguar, sin perjuicio de la facultad del tribunal de apreciar el valor de su testimonio.

ARTÍCULO 150. (Exenciones al deber de testimoniar).-

150.1 Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, siempre que no sean denunciantes o damnificados, el cónyuge, aun cuando estuviere separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, los afines en primer grado, los concubinos *more uxorio*, los padres e hijos adoptivos, los tutores y curadores y los pupilos.

150.2 Antes de iniciarse la declaración y bajo sanción de nulidad, las personas mencionadas serán informadas de su facultad de abstenerse. Ellas podrán ejercer dicha facultad aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

ARTÍCULO 151. (Abstención de rendir testimonio).- Deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial.

151.1 Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado.

151.2 Los funcionarios públicos, si conocen de una información clasificada como reservada o confidencial, no estarán obligados a declarar salvo que el juez, a solicitud de parte, considere imprescindible la información. En este caso, el tribunal requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar a los funcionarios públicos que corresponda.

ARTÍCULO 152. (Citación).-

152.1 Para el examen de testigos, se librará citación en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción en que se incurrirá en caso de incumplimiento.

152.2 En casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio, inclusive verbal, dejándose constancia.

152.3 El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

152.4 No se descontará del salario del testigo compareciente el tiempo que estuvo a disposición del tribunal. A su solicitud, se expedirá constancia de su comparecencia.

ARTÍCULO 153. (Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero).-

153.1 Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar su testimonio, se podrá comisionar la recepción de su declaración por exhorto u oficio al órgano competente de su residencia, siempre que sea difícil o gravosa su concurrencia. A tales efectos, podrá utilizarse el medio técnico más apropiado.

153.2 Sin embargo, si la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio lo requirieran, el testigo deberá comparecer a la audiencia que se señale.

153.3 Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto en las normas sobre cooperación judicial internacional.

ARTÍCULO 154. (Compulsión y arresto).-

154.1 Si el testigo no compareciere sin mediar causa justificada, será conducido por la fuerza pública.

154.2 Si después de comparecer el testigo se negare a declarar, será puesto a disposición del tribunal competente por la responsabilidad penal que le pudiere corresponder.

154.3 Cuando el testigo carezca de domicilio o cuando exista temor fundado de que se oculte, fugue

o ausente, el tribunal podrá disponer de oficio o a petición de parte su arresto, a los solos efectos de asegurar su declaración. La duración de la medida no podrá exceder las doce horas.

ARTÍCULO 155. (Testimonio de altas autoridades y miembros del cuerpo diplomático).-

155.1 No tienen la obligación de comparecer el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, los Intendentes Departamentales, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en actividad, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, los Jueces y los Fiscales Letrados. Estas personas rendirán su declaración a su elección, en su domicilio o en su despacho. El acto de la audiencia no será público.

155.2 Tampoco tienen obligación de comparecer los miembros del cuerpo diplomático o consular acreditados en el Uruguay. Estas personas rendirán su testimonio conforme a las normas del Derecho Internacional.

ARTÍCULO 156. (Testigo imposibilitado).- La persona que no pueda concurrir al tribunal por estar físicamente impedida, será examinada en su domicilio o en el lugar donde se encuentre. En este caso, así como en el Artículo anterior, las partes deberán comparecer al acto y formular las preguntas que estimen pertinentes, bajo contralor del juez.

ARTÍCULO 157. (Incomunicación).- Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. El tribunal resolverá si deberán permanecer incomunicados en la antesala después de declarar.

ARTÍCULO 158. (Reglas para el examen de los testigos).-

158.1 Antes de comenzar la declaración, el juez advertirá al testigo de su deber de decir la verdad y lo instruirá acerca de las penas con que el Código Penal castiga el falso testimonio.

158.2 Se procederá a interrogar a cada testigo sobre lo siguiente:

a) su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión u oficio y domicilio y si es extranjero, además los años de residencia en el país;

b) si conoce al imputado y a los demás interesados en el resultado del proceso, si tiene con alguno de ellos parentesco, amistad, enemistad o relaciones de cualquier clase y si tiene interés de cualquier orden en la causa;

c) sobre todos los demás hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad con respecto a los hechos que son objeto del proceso;

d) acerca de todas las circunstancias que sirvan para apreciar su credibilidad y especialmente sobre la razón de sus dichos.

158.3 La declaración de los testigos se sujetará a los interrogatorios que efectúen las partes. Estos serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte. Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas aclaratorias o ampliatorias a los testigos. A solicitud de cualquiera de las partes el tribunal podrá autorizar nuevo interrogatorio de los testigos que ya hubieren declarado en la audiencia.

158.4 El juez podrá rechazar cualquier pregunta que juzgue inconducente, innecesaria, dilatoria, sugestiva, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio cuando lo considere del caso.

El testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el tribunal lo autorice.

ARTÍCULO 159. (Testigo sospechoso de delito).-

159.1 Si de la declaración de una persona citada como testigo surgieren indicios que la hicieren sospechosa de delito, se suspenderá la diligencia y en adelante se le aplicará el estatuto del imputado.

159.2 La declaración como testigo de una persona que luego pasa a ser considerada como imputada, no podrá utilizarse en su perjuicio.

ARTÍCULO 160. (Testigos menores de dieciocho años de edad).-

160.1 El interrogatorio de los testigos menores de dieciocho años, será conducido por el tribunal sobre la base de las preguntas presentadas por el fiscal y la defensa. Podrá recurrirse al asesoramiento de un psicólogo forense u otro profesional especializado. Por regla general no podrán ser interrogados directamente por las partes.

160.2 A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proceso, podrá adoptarse una o más de las siguientes medidas:

a) pantallas de cristal para ocultar al testigo del imputado u otros elementos que constituyan barrera física con el mismo efecto;

b) prestar testimonio desde una sala adyacente al tribunal a través de un circuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto;

c) recepción en privado, excluyéndose al público y a los medios de prensa de la sala del tribunal;

d) examen del testigo a través de un intermediario designado por el tribunal, con la función de ayudarlo a comprender el interrogatorio. Esta medida será tenida especialmente en cuenta tratándose de menores de doce años de edad;

e) presencia de un acompañante como apoyo emocional, mientras el testigo presta testimonio. Este puede ser cualquier adulto en quien él confíe, siempre que no sea parte, testigo u otro sujeto del proceso.

ARTÍCULO 161. (Testigo que no conozca el idioma).- Si el testigo no sabe darse a entender por desconocer el idioma español, se utilizarán los servicios de un intérprete.

ARTÍCULO 162. (Testigos discapacitados).-

a) Tratándose de testigos con discapacidad intelectual o mental se aplicarán las reglas previstas en los Artículos precedentes;

b) al testigo con dificultades de audición y comunicación se le proveerá de un intérprete;

c) al testigo que no se comunica mediante el habla, se le proveerá de sistemas de comunicación alternativos;

d) al testigo no vidente que deba suscribir el acta, le será leída por el actuario o secretario del tribunal.

ARTÍCULO 163. (Testigos intimidados).-

163.1 Cuando exista peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo o sus familiares, el tribunal podrá disponer una o más de las medidas previstas en el Artículo 160 de este Código.

163.2 Asimismo, se podrá disponer la reserva de su identidad, de los demás datos personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para esta un número o cualquier otra clave. Sus datos filiatorios y toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos sobres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la causa y del titular del Ministerio Público interviniente. Uno de los sobres quedará en poder de este y el otro en poder del tribunal. Cuando se establezca esta medida, se dispondrá además la prohibición de divulgar de cualquier forma su identidad o de cualquier otro dato conducente a ella.

163.3 La declaración de los testigos en las condiciones previstas en el numeral anterior, será valorada por el juez con criterio especialmente riguroso, considerando para su credibilidad el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que determinaron su protección.

ARTÍCULO 164. (Declaración de la víctima).-

164.1 Para la declaración de la víctima rigen las mismas reglas prescritas para la declaración de los testigos.

164.2 Tratándose de víctimas de delitos sexuales menores de dieciocho años, personas con discapacidad física, mental o sensorial, la filmación de la entrevista pericial efectuada a la víctima en la etapa de la investigación, podrá incorporarse como prueba testimonial, en cuanto se hayan cumplido las garantías procesales reguladas en este Código, sin perjuicio del derecho de las partes a que se efectúen los correspondientes interrogatorios complementarios o ampliatorios.

ARTÍCULO 165. (Testimonio filmado).-

165.1 En los casos en que se considere conveniente por las características del testimonio o por sus particulares circunstancias, podrá disponerse la filmación, agregándose el soporte como parte integrante del acto.

165.2 Asimismo, se adoptarán los medios técnicos tendientes a preservar la genuinidad del soporte de la filmación.

SECCIÓN III

Del careo

ARTÍCULO 166. (Procedencia).-

166.1 Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias importantes. El imputado también podrá solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.

166.2 No procederá el careo entre el imputado y los testigos referidos en los Artículos 161 a 164 de este Código.

ARTÍCULO 167. (Reglas del careo).-

167.1 El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo y les preguntará si las confirman o modifican.

167.2 Acto seguido, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar a los sometidos a careo, exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción que determinaron la procedencia de la diligencia.

SECCIÓN IV

Del reconocimiento

ARTÍCULO 168. (Reconocimiento).- El reconocimiento es el acto ordenado por el tribunal, por el que alguna persona o cosa determinada es examinada o inspeccionada por aquel, o por las personas cuyo informe o testimonio puede ser conveniente para la investigación.

ARTÍCULO 169. (Reconocimiento de personas).-

169.1 El reconocimiento de personas por testigos, se hará con las reglas de la declaración testimonial y con los siguientes requisitos:

a) cada testigo lo hará por separado, describiendo previamente al aludido y expresando si antes le ha sido exhibido, debiendo hacerlo desde un lugar donde no pueda ser visto por aquel;

b) el aludido elegirá lugar en la fila de varias personas de aspecto semejante;

c) el declarante dirá si en la fila está la persona aludida y la señalará, manifestando las diferencias que encuentre con su percepción anterior.

169.2 No podrá haber más de un imputado en una fila de personas.

169.3 De todo lo actuado se redactará acta y si es posible, se dejará registro mediante el empleo de medio técnico idóneo.

169.4 Deberá presenciar el acto el defensor del imputado.

ARTÍCULO 170. (Reconocimiento por imágenes).- Cuando no se pudiere efectuar el reconocimiento de personas en las condiciones indicadas en el Artículo anterior, se podrá utilizar imágenes fotográficas o fílmicas, observando las mismas reglas en lo pertinente.

ARTÍCULO 171. (Otros reconocimientos).- Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las reglas que anteceden, en lo pertinente.

Sin perjuicio de labrar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos.

ARTÍCULO 172. (Reconocimiento de cosas).- Antes del reconocimiento de una cosa se invitará a la persona que debe efectuarlo a que la describa. En lo demás, regirán las disposiciones precedentes.

SECCIÓN V

De la prueba documental

ARTÍCULO 173. (Incorporación).-

173.1 Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa o prohibición legal o necesidad de previa orden judicial.

173.2 Durante la etapa de investigación, el fiscal podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición y en caso de negativa, solicitar al tribunal la orden de incautación correspondiente.

173.3 Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado.

173.4 Tampoco podrán admitirse como medio de prueba ni ser utilizadas en modo alguno, las misivas y otras comunicaciones del imputado con su defensor y con personas amparadas por secreto profesional. Esta excepción no rige si dichas personas son también imputadas, ni cuando aquellas son medios para la preparación, ejecución o encubrimiento del delito.

ARTÍCULO 174. (Reconocimiento del documento).-

174.1 Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro. Podrán ser llamados también a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos.

174.2 Podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad del documento.

ARTÍCULO 175. (Traducción, transcripción y visualización de documentos).-

175.1 Todo documento redactado en idioma distinto del español, deberá estar traducido por traductor público para ser incorporado al proceso.

175.2 Cuando el documento consista en una grabación, se dispondrá su transcripción en un acta con intervención de las partes.

175.3 Cuando el documento consista en un video, se ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las partes.

ARTÍCULO 176. (Instrumentos públicos).- En lo relativo a la autenticidad de los documentos públicos y la fe que de ellos emana, se aplicarán las disposiciones del derecho civil, salvo que el delito imputado consista en la falsedad material o ideológica del mismo.

SECCIÓN VI

De la prueba por informes

ARTÍCULO 177. (Requerimiento de informes).- Podrán requerirse informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados. La omisión o el retardo en la respuesta, la falsedad del informe o el ocultamiento de datos, generarán las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de las diligencias de inspección, revisión o incautación que fueren necesarias.

SECCIÓN VII

De la prueba pericial

ARTÍCULO 178. (Procedencia).-

178.1 Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.

178.2 Los informes deberán emitirse con imparcialidad, atendiéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito.

178.3 En la audiencia, los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará que sean interrogados por las partes. Los interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte.

178.4 Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas al perito con el fin de aclarar sus dichos.

ARTÍCULO 179. (Remisión).- La prueba pericial se regirá por lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo III, Sección V del Código General del Proceso, en lo pertinente.

ARTÍCULO 180. (Actuación de los peritos oficiales).-

180.1 El Ministerio Público podrá requerir como peritos a los miembros del Instituto Técnico Forense, de la Policía Científica y de otros organismos estatales especializados, que le presten auxilio en la etapa de investigación.

180.2 Asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de expertos de los organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitar al fiscal o al tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente, presentarlos como peritos en la audiencia de prueba.

ARTÍCULO 181. (Honorarios del perito).- Los peritos designados a solicitud de las partes tendrán derecho a cobrar honorarios salvo que actúen como funcionarios públicos en cumplimiento de su función. Si la designación fuera efectuada a solicitud del Ministerio Público o de la defensa pública, los honorarios serán de cargo del Estado a través del órgano jerarca del solicitante.

SECCIÓN VIII

De los indicios

ARTÍCULO 182. (Concepto de indicio).-

182.1 Indicios son las cosas, estados o hechos personales o materiales, ocurridos o en curso, aptos para convencer en alguna medida, acerca de la verdad de las afirmaciones o de la existencia de un hecho que es objeto del proceso, toda vez que no constituyan un medio de prueba específicamente previsto.

182.2 Para que los indicios puedan servir de base a una resolución judicial, deberán estar plenamente probados, ser inequívocos y ligar lógica e ininterrumpidamente el punto de partida y la conclusión probatoria.

SECCIÓN IX

De la inspección judicial y de la reconstrucción del hecho

ARTÍCULO 183. (Inspección judicial).-

183.1 Podrá comprobarse mediante la inspección de personas, lugares y cosas, las huellas, rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado, describiéndolos detalladamente y recogiendo o conservando en lo posible, lo que tenga eficacia probatoria.

183.2 El tribunal describirá el estado actual del objeto de la inspección y en cuanto sea posible, verificará el preexistente. En caso de desaparición o alteración de los rastros u otros efectos, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

ARTÍCULO 184. (Examen corporal del imputado).-

184.1 Durante la indagatoria preliminar, el juez a solicitud de las partes puede ordenar el examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación.

184.2 Con esa finalidad, aun sin el consentimiento del imputado pueden efectuarse pruebas biológicas y mínimas intervenciones corporales, siempre efectuadas por profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundadamente un daño para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario, se contará con un previo dictamen pericial.

184.3 Si el examen corporal puede ofender el pudor de la persona, sin perjuicio de que el examen lo realice un médico legista u otro profesional especializado, a petición del imputado debe ser admitida la presencia de una persona de su confianza, labrándose acta del resultado del mismo.

ARTÍCULO 185. (Reconstrucción del hecho).-

185.1 La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se cometió de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas diligenciadas, debiendo practicarse con la mayor reserva posible.

185.2 La diligencia se realizará bajo la dirección del tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la misma y sus detalles.

185.3 No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción y cuando participe, regirán las reglas previstas para su declaración.

185.4 El tribunal tomará las medidas del caso para procurar que la concurrencia del público y de los medios de información al acto respectivo, no perturben el desarrollo de la diligencia.

ARTÍCULO 186. (Participación de testigos y peritos).-

186.1 La inspección judicial y la reconstrucción del hecho deben realizarse preferentemente con la participación de testigos y peritos.

186.2 Asimismo, se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tomen fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la causa.

SECCIÓN X

De la identificación del cadáver y autopsia

ARTÍCULO 187. (Identificación de cadáver).-

187.1 Si se tiene conocimiento de la ocurrencia de una muerte presuntamente violenta, antes de procederse al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, se le identificará por todos los medios adecuados.

187.2 La diligencia deberá ser dirigida por el fiscal o quien lo represente con la intervención del médico legista y del personal policial especializado en criminalística.

ARTÍCULO 188. (Autopsia y reconocimiento).-

188.1 En los casos de muerte en que se sospecha la existencia de un delito o cuya causa no esté determinada se practicará el reconocimiento del cadáver y la autopsia, pudiendo incluso disponerse la exhumación.

188.2 El médico actuante describirá minuciosamente la operación e informará sobre la naturaleza de las lesiones, el origen y la causa del fallecimiento y sus circunstancias, si se pudieran determinar, debiendo procurar que la integridad corpórea del cadáver quede restablecida al máximo.

188.3 Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la identificación y conservación de los objetos y elementos que se extraigan del cadáver.

188.4 El resultado del reconocimiento y de la autopsia será informado al fiscal, a los familiares de la persona fallecida y al juez que estuviera interviniendo.

SECCIÓN XI

De los registros

ARTÍCULO 189. (Objeto).-

189.1 El registro tiene por objeto averiguar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su realización se labrará acta y cuando sea posible, se recogerán o conservarán los elementos materiales útiles.

189.2 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, podrá inspeccionar o disponer el registro de lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos suficientes para considerar que se encontrarán rastros de delito, o que en determinado lugar se encuentra el imputado o alguna persona prófuga.

189.3 Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá la situación que se encuentre y sus elementos componentes, procurando consignar asimismo el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. De la

misma forma se procederá cuando la persona buscada no sea hallada en el lugar.

189.4 De ser posible, se levantarán planos de señales, se usarán elementos descriptivos y fotográficos y se realizará toda otra operación técnica necesaria o útil para el cabal cumplimiento de la diligencia.

189.5 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí dando cuenta inmediata a aquel, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública.

189.6 La retención solo podrá durar dos horas, salvo que el juez habilitare un plazo mayor.

ARTÍCULO 190. (Registro de personas).-

190.1 Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito, la autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, procederá a registrarlo. Antes del registro, se invitará a la persona a que exhiba y entregue el objeto buscado.

190.2 El registro se efectuará por persona del mismo sexo siempre que sea posible respetando la dignidad y el pudor del registrado.

190.3 El registro puede comprender también equipaje y bultos, así como el vehículo utilizado. De todo lo actuado se labrará acta que se ofrecerá firmar a los involucrados, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan del caso.

ARTÍCULO 191. (Registro de lugares no destinados a habitación).- Cuando existan motivos razonables para considerar que en determinado edificio o lugar cerrado se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran objetos provenientes de actividad delictiva o relevantes para la investigación, el fiscal solicitará autorización judicial para el allanamiento y registro respectivos.

ARTÍCULO 192. (Contenido de la resolución).-

192.1 La resolución de la autoridad competente contendrá el nombre del fiscal autorizado, la fecha en que se realizará la diligencia, la finalidad específica del allanamiento y la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado.

192.2 Dispuesto el registro, se dará aviso previo a la persona a cuyo cargo estuviere el local, vehículo, buque o aeronave, salvo que a criterio del tribunal, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

ARTÍCULO 193. (Registro de lugares destinados al culto).- Para el allanamiento y registro de templos y lugares cerrados destinados a cualquier culto cuya celebración sea organizada por instituciones con personería jurídica, se requerirá el aviso a las personas que estén a su cargo directo e inmediato, salvo que a criterio del juez, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

ARTÍCULO 194. (Registros especiales).-

194.1 El Ministerio Público podrá solicitar al tribunal el registro de inmuebles destinados a organismos públicos y sus dependencias y buques y aeronaves del Estado.

La diligencia se hará efectiva con previo aviso al jerarca correspondiente, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la medida.

194.2 Para el registro de la Casa de Gobierno, del Palacio Legislativo, de las sedes centrales de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, se requerirá la autorización escrita del Presidente de la República en su caso o del presidente del órgano afectado por la medida, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia. En estos casos no regirán las limitaciones de tiempo establecidas en el Artículo 195 de este Código.

194.3 Con relación al allanamiento y registro de sedes y oficinas de misiones diplomáticas o consulares extranjeras, de organismos internacionales y residencias de sus funcionarios, así como de buques y aeronaves de guerra extranjeros, se aplicarán los tratados y convenciones internacionales respectivos, en lo pertinente.

ARTÍCULO 195. (Allanamiento y registro domiciliario).-

195.1 El allanamiento y registro de morada o de sus dependencias, solamente podrá realizarse por orden del juez, expedida a solicitud del fiscal, en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol.

195.2 Se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria.

195.3 No obstante, podrá efectuarse el registro en horas de la noche, cuando medie consentimiento expreso del jefe de hogar, comunicándolo inmediatamente al fiscal y al juez competente.

195.4 Si el juez ordena el allanamiento de una vivienda donde no se encuentren personas mayores de edad o haya ausencia total de sus moradores, la diligencia se realizará por el personal superior a cargo del servicio, dándose cuenta previamente al fiscal competente.

195.5 La denuncia policial por violencia doméstica se tomará a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación.

ARTÍCULO 196. (Desarrollo de la diligencia).-

196.1 La orden de allanamiento será notificada al morador o a cualquier persona mayor que se encuentre en el lugar. Al notificado se le invitará a presenciar el registro y cuando no se encuentre nadie, ello se hará constar en acta. Si la finca estuviere cerrada y nadie respondiere a los llamados de la autoridad, se procederá a su apertura mediante la intervención de cerrajero, con auxilio de la fuerza pública, en presencia de dos testigos hábiles; al terminar el registro, el lugar quedará debidamente cerrado, bajo responsabilidad del jerarca administrativo actuante.

196.2 La diligencia se detallará en acta, que firmará el morador o encargado del lugar pudiendo formular las observaciones que considere pertinentes. Si este no se encontrare, no pudiere o no quisiere hacerlo, se dejará constancia de ello, entregándosele una copia del acta.

196.3 Cuando se trate de registros especiales la diligencia se seguirá con el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre en el lugar o con quien este designe.

SECCIÓN XII

De la exhibición e incautación de bienes

ARTÍCULO 197. (Solicitud del fiscal).-

197.1 Cuando el propietario o poseedor a cualquier título se niegue a entregar o exhibir un bien que constituye el cuerpo del delito o que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, el fiscal solicitará al juez que ordene su incautación o su exhibición forzosa.

197.2 La autoridad administrativa no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trate de una intervención en delito flagrante o en peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. Cuando exista peligro por la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerla el fiscal, dando cuenta al juez competente y estando a lo que él resuelva.

ARTÍCULO 198. (Contenido de la resolución).-

198.1 La resolución del tribunal especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien cuyo secuestro, incautación o exhibición se ordena y el sitio en el que tendrá lugar la diligencia.

198.2 Si se tratara de secuestro o incautación, contendrá el nombre del depositario y la orden de comunicar al registro público si el objeto de la medida fuera bienes inmuebles o muebles registrables.

ARTÍCULO 199. (Diligencia de secuestro, incautación o exhibición).-

199.1 Obtenida la autorización para una diligencia de secuestro o exhibición de bienes muebles o de incautación de bienes inmuebles, el fiscal la ejecutará de inmediato, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

199.2 Los bienes objeto de secuestro o incautación serán registrados y debidamente individualizados, dejándose constancia de quién asume el carácter de depositario. Tratándose de bienes inmuebles o muebles registrables la medida se inscribirá en el registro público correspondiente.

199.3 El acta será firmada por los intervinientes en la diligencia, siendo de aplicación lo establecido en el Artículo 196.2 de este Código.

ARTÍCULO 200. (Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos).-

200.1 El fiscal o la autoridad administrativa con autorización del tribunal, podrá devolver a la víctima o a terceros los objetos incautados. Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieran ninguna relación con el delito.

La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, con citación de todos los interesados que resulten de los antecedentes, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario.

200.2 Los bienes sustraídos a la víctima le serán entregados a esta.

ARTÍCULO 201. (Entrega definitiva).- Una vez concluida la causa penal, si en el plazo de treinta días de notificado el interesado no fueran deducidas pretensiones en sede civil sobre las cosas entregadas provisionalmente, dicha entrega se tornará definitiva.

ARTÍCULO 202. (Bienes no reclamados).-

202.1 Transcurrido un año de ejecutoriada la sentencia definitiva u otra forma de conclusión de la causa o del archivo de la investigación preliminar, el tribunal podrá disponer el remate de los bienes secuestrados o incautados que no hubieran sido reclamados o cuyas respectivas reclamaciones hubieran sido desestimadas por sentencia ejecutoriada.

202.2 El producto del remate quedará a la orden del tribunal y los interesados podrán hacer valer sus derechos sobre esa suma, mientras no se produzca la caducidad respectiva.

SECCIÓN XIII

De la exhibición e incautación de actuaciones

y documentos públicos y privados

ARTÍCULO 203. (Incautación de documentos).-

203.1 Los documentos públicos y privados pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación.

203.2 Quien tenga en su poder los documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso su original, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la resolución del tribunal.

ARTÍCULO 204. (Copia de documentos incautados).-

204.1 El fiscal deberá restituir los documentos incautados manteniendo copia de los mismos, salvo que aquellos sean indispensables para la investigación, en cuyo caso se expedirá copia si el interesado lo solicita.

204.2 Debe entregársele copia del acta realizada a la persona u oficina en la cual se efectuó la incautación.

SECCIÓN XIV

De la interceptación e incautación postal y electrónica

ARTÍCULO 205. (Autorización).-

205.1 El Ministerio Público solicitará al tribunal competente la interceptación, incautación y ulterior apertura o registro de cualquier correspondencia, envío postal, correo electrónico o similar, dirigido al imputado o enviado por este aun bajo nombre supuesto, o de aquellos que le fueren atribuibles por cualquier motivo.

205.2 Estarán excluidas de la autorización prevista en este Artículo, las comunicaciones entre el imputado y su defensor.

205.3 Tratándose de tercero, podrán dictarse las mismas medidas siempre que el juez tenga motivos seriamente fundados para suponer que de las mencionadas comunicaciones, pueda resultar la prueba de la participación en un delito.

205.4 En todos los casos previstos en este Artículo se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 206. (Ejecución).-

206.1 Recabada la autorización, el fiscal efectivizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación.

206.2 El fiscal examinará el contenido de la comunicación y si tiene relación con la investigación, dispondrá su incautación dando cuenta al tribunal.

ARTÍCULO 207. (Obligación de la persona requerida).- Quien tenga en su poder la correspondencia requerida está obligado a entregarla inmediatamente al fiscal, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la decisión del tribunal.

SECCIÓN XV

De la intervención de comunicaciones

ARTÍCULO 208. (Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación).-

208.1 Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar que se ha cometido o pudiere cometerse un hecho punible, el fiscal podrá solicitar al juez la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. El tribunal resolverá inmediatamente mediante trámite reservado, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal.

La resolución necesariamente deberá ser fundada, debiendo ponderar expresamente la necesidad y proporcionalidad de la medida, respecto de la restricción al ejercicio del derecho limitado, bajo pena de nulidad.

208.2 La orden judicial puede dirigirse contra terceras personas en los mismos términos de lo dispuesto en el Artículo 205.3 de este Código.

208.3 No se puede interceptar las comunicaciones entre el imputado y su defensor, salvo que el tribunal lo ordene por estimar fundadamente que el abogado puede tener responsabilidad penal en los hechos investigados. De ello se dejará constancia en la respectiva resolución.

208.4 La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre del afectado por la medida y de ser posible, la línea telefónica u otro

medio de comunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma, alcance y duración de la medida, que no podrá exceder un plazo máximo de seis meses, al igual que la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia.

208.5 La medida cesará inmediatamente si los elementos de convicción tenidos en cuenta para ordenarla desaparecieran o hubiera transcurrido el plazo de su duración.

El material interceptado, grabado o registrado que no se incorpore a la investigación será destruido, salvo orden judicial en contrario que por razones fundadas disponga que se mantenga en archivo hasta el plazo máximo de duración de la investigación.

ARTÍCULO 209. (Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación).-

209.1 La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación de que trata el Artículo anterior, será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro.

209.2 El fiscal dispondrá la transcripción de la grabación, labrándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales.

SECCIÓN XVI

De la videovigilancia

ARTÍCULO 210. (Presupuesto y Ejecución).-

210.1 El fiscal con noticia al juez y sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

a) realizar tomas fotográficas y registro de imágenes;

b) utilizar otros medios técnicos especiales en lugares abiertos expuestos al público.

210.2 Se requerirá autorización judicial cuando dichas actividades se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados.

SECCIÓN XVII

Del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria

ARTÍCULO 211. (Levantamiento del secreto bancario).-

211.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este, por resolución fundada, podrá ordenar el levantamiento del secreto bancario, en los términos previstos en el Artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

211.2 También podrá disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas depositadas y cualquier otro bien económico o financiero y aun el bloqueo e inmovilización de las cuentas.

211.3 Dispuesta la incautación, el fiscal observará el procedimiento señalado en los Artículos 203 y 204 de este Código.

ARTÍCULO 212. (Levantamiento de la reserva tributaria).-

212.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la administración tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando ello resulte necesario y pertinente para el esclarecimiento del hecho investigado.

212.2 La administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenadas por el juez.

CAPÍTULO III

PRUEBA ANTICIPADA

ARTÍCULO 213. (Supuestos de la prueba anticipada).- El fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares en su caso, podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en forma anticipada en los siguientes casos:

a) declaración de testigos e informe de peritos, cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfermedad u otro grave impedimento, o cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente;

b) declaración de testigos, cuando exista la probabilidad de que la espera a la realización de las audiencias del proceso, les cause un perjuicio severo o ponga en riesgo serio la calidad de la prueba testimonial;

c) reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles;

d) el diligenciamiento de cualquier medio probatorio, cuando el transcurso del tiempo pudiere frustrar su realización o perjudicar su eficacia.

ARTÍCULO 214. (Procedimiento).-

214.1 La parte que solicite el diligenciamiento de prueba anticipada deberá precisar su objeto y las razones de su importancia para el proceso. También indicará el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia.

214.2 El trámite se dispondrá con citación de la parte contraria, salvo que esa comunicación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

En este último caso, una vez diligenciada la prueba se dará conocimiento de lo actuado a la contraparte, quien tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba en la etapa procesal oportuna.

214.3 La prueba anticipada se diligenciará de conformidad con las reglas referidas al medio probatorio pertinente.

ARTÍCULO 215. (Impugnabilidad).-

215.1 La parte contra quien se pide la medida podrá oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación en el plazo de la citación.

215.2 La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio.

215.3 Cumplida la medida y notificada, si se hubiere dispuesto sin noticia, el agraviado podrá apelar conforme a lo dispuesto en este Código.

TÍTULO VII

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I

REGLA GENERAL

ARTÍCULO 216. (Principio).- Es atribución del tribunal adoptar las medidas cautelares reguladas en este Título cuando ello le fuere requerido en forma.

CAPÍTULO II

PRIVACIÓN O LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD FÍSICA DEL IMPUTADO

SECCIÓN I

De la libertad física de las personas

ARTÍCULO 217. (Estado de inocencia).- En todo caso el imputado será tratado como inocente hasta tanto no recaiga sentencia de condena ejecutoriada. La prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena.

ARTÍCULO 218. (Principio general).- Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales.

ARTÍCULO 219. (Flagrancia delictual).- Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos cuando:

a) una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito;

b) inmediatamente después de la comisión del delito, una persona fuere sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo;

c) en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuere hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito.

ARTÍCULO 220. (Detención en flagrancia delictual).- La persona que sea sorprendida en flagrancia delictual deberá ser detenida aun sin orden judicial.

En las mismas circunstancias cualquier particular podrá proceder a la detención y entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.

En tales casos se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Público, el que pondrá al detenido a disposición del tribunal competente, adoptando las medidas pertinentes o solicitando su adopción, cuando corresponda, a aquel.

SECCIÓN II

De las medidas de coerción

ARTÍCULO 221. (Medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria).-

221.1 El fiscal podrá solicitar al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado, su integridad o la de la víctima, o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que se indican a continuación:

a) el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal;

b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;

c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;

d) la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;

e) la retención de documentos de viaje;

f) la prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

g) el retiro inmediato del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;

h) la prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido económico adecuada y proporcional a la gravedad del delito que se está investigando y a la condición económica del imputado;

i) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;

j) la vigilancia del imputado, mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o de su ubicación física;

k) la prohibición de abandonar el domicilio o residencia por determinados días u horarios, en forma que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias;

l) cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, en las condiciones previstas en la ley;

m) la prisión preventiva, en el caso en que las medidas limitativas anteriormente descriptas no fueren suficientes para asegurar los fines indicados precedentemente.

221.2 Las medidas de coerción enunciadas en este Artículo pueden ser complementadas con medidas cautelares respecto de bienes del imputado o de terceros, dictadas por el juez a solicitud de parte.

ARTÍCULO 222. (Medidas limitativas durante la indagatoria preliminar).- Asimismo, desde el inicio de la indagatoria preliminar el tribunal a petición del Ministerio Público solamente podrá disponer las medidas referidas en los literales a), d), e) y f) del Artículo precedente con la finalidad de asegurar el resultado de la investigación, por el plazo que el tribunal disponga.

SECCIÓN III

De la prisión preventiva

ARTÍCULO 223. (Procedencia de la prisión preventiva).- Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva.

ARTÍCULO 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva).- Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad.

ARTÍCULO 225. (Entorpecimiento de la investigación).- Se entenderá que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizarla mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios, o cuando exista la presunción de que podrá inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros, a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

ARTÍCULO 226. (Peligro de fuga).- Para determinar la existencia de peligro de fuga se tendrán en cuenta entre otras, las siguientes pautas:

a) desarraigo determinado por la carencia de domicilio o residencia habitual asiento de su hogar, de sus negocios o de su trabajo;

b) disposición de facilidades extraordinarias para abandonar el país;

c) circunstancias, naturaleza del hecho y gravedad del delito;

d) ocultamiento de información sobre su identidad o domicilio, o que los hubiera proporcionado falsamente.

ARTÍCULO 227. (Riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad).-

227.1 Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en riesgo cuando existan motivos fundados que permitan inferir que el imputado puede atentar contra ella, su familia o sus bienes.

227.2 Se entenderá que existe riesgo para la sociedad cuando el imputado posea la calidad de reiterante o de reincidente, o cuando se tratare de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.

ARTÍCULO 228. (Elementos de especial relevancia).-

228.1 Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes elementos de juicio:

a) necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión;

b) imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia;

c) imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente;

d) imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido.

228.2 El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud.

ARTÍCULO 229. (Prohibición de solicitar prisión preventiva).-

229.1 El fiscal no solicitará la prisión preventiva cuando:

a) se trate de procedimiento por faltas;

b) el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de inhabilitación;

c) considere que solicitará pena alternativa a la privación de libertad.

229.2 Sin perjuicio de ello, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio hasta su finalización, presentarse a los actos de procedimiento para los cuales sea citado y posibilitar el efectivo cumplimiento de la sentencia a recaer.

ARTÍCULO 230. (Trámite de la solicitud).- La solicitud de prisión preventiva deberá formularse por el fiscal en audiencia o fuera de ella y se tramitará de acuerdo con las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 231. (Contralor del cumplimiento de la prisión preventiva).-

231.1 El tribunal que impuso la prisión preventiva será competente para supervisar la ejecución de la medida.

231.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, toda vez que en el desempeño de sus funciones adviertan la violación de los derechos humanos del imputado, pondrán los hechos en conocimiento del juez competente.

ARTÍCULO 232. (Condiciones de cumplimiento de la medida cautelar).- La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, separados de aquellos lugares de reclusión donde son alojados los condenados con sentencia ejecutoriada. La autoridad competente dispondrá lo necesario para el efectivo cumplimiento del designio legal.

ARTÍCULO 233. (Revocación o sustitución).- En cualquier estado del proceso y antes de que haya recaído sentencia de condena ejecutoriada, el juez a petición de parte podrá disponer la revocación o sustitución de la prisión preventiva, toda vez que hayan desaparecido los presupuestos en que se haya fundado su imposición.

En las situaciones previstas por la Ley Nº 17.514, de 2 julio de 2002, dicha resolución deberá notificarse a la víctima, debiendo disponerse medidas de protección siempre que exista fundamento para su aplicación.

El procedimiento será el establecido en los Artículos 284 y 285 de este Código.

ARTÍCULO 234. (Incumplimiento de medidas limitativas de la libertad).-

234.1 Podrá imponerse prisión preventiva al imputado cuando haya incumplido alguna de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en el Artículo 221 de este Código.

234.2 En este caso, el fiscal podrá solicitar la imposición de prisión preventiva la que se tramitará por el procedimiento establecido en los Artículos 284 y 285 de este Código.

ARTÍCULO 235. (Límite temporal).-

235.1 Cesará la prisión preventiva cuando:

a) el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal;

b) el imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada;

c) el imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anticipada;

d) hayan transcurrido más de dos años contados desde el momento efectivo de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación;

e) al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzar a cumplirse la pena privativa de libertad.

235.2 Para resolver estas cuestiones, el trámite se seguirá por la vía incidental.

SECCIÓN IV

De las cauciones

ARTÍCULO 236. (De las cauciones).- La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real.

Al acordarla, el juez podrá imponer al imputado todas o algunas de las siguientes obligaciones:

a) fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin conocimiento del juez o tribunal que conozca en la causa;

b) no concurrir a determinados lugares;

c) presentarse a la autoridad los días que esta determine;

d) permanecer en su domicilio durante un horario determinado.

La resolución que imponga estas restricciones no causa estado. El juez podrá fijar un plazo para su duración y en cualquier momento ampliarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto.

ARTÍCULO 237. (Finalidad de las cauciones).- Las cauciones tienen por finalidad asegurar que el imputado cumpla los deberes impuestos por el juez.

ARTÍCULO 238. (Determinación de las cauciones).- Para determinar la calidad y el monto de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica y antecedentes del imputado, la naturaleza del daño causado y el monto aproximado de las reparaciones civiles que puedan corresponder. El juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de infringir los deberes impuestos.

ARTÍCULO 239. (Caución juratoria).- La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez y procederá cuando:

a) sea presumible que se pueda beneficiar con la suspensión condicional de la pena;

b) el imputado careciere de medios para ofrecer o constituir otro tipo de caución.

ARTÍCULO 240. (Caución real).- La caución real consistirá en la afectación de bienes determinados, muebles o inmuebles, que en garantía de la suma fijada por el juez, se haga por el mismo imputado o por otra persona.

Podrá constituirse en forma de depósito de dinero u otros valores cotizables, otorgando hipoteca o prenda, o cualquier otra forma de garantía que resulte eficaz y suficiente a criterio del juez.

ARTÍCULO 241. (Caución personal).-

241.1 La caución personal consiste en la obligación que, junto con el imputado, asumen uno o más fiadores solidarios, de pagar la suma que el juez fije de acuerdo a los criterios establecidos en el Artículo precedente.

241.2 Puede constituirse en fiador quien tenga capacidad para contratar y sea, además, persona de notoria honradez y solvencia económica que se comprobará mediante exhibición de títulos u otra prueba documental suficiente.

El juez apreciará la existencia de todos estos requisitos.

ARTÍCULO 242. (Forma de las cauciones).- Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en acta suscrita ante el actuario o secretario en su caso.

En el caso de lo dispuesto en el Artículo 240 de este Código en cuanto fuere pertinente, el acta se labrará por el actuario en presencia del juez, o por el secretario en presencia del presidente del tribunal respectivo, disponiéndose su inscripción en el registro correspondiente, a cuyo efecto bastará con el simple testimonio del acta de caución.

ARTÍCULO 243. (Fijación de domicilio y notificaciones).-

243.1 En el acto de prestar caución el imputado, el fiador y todo otro otorgante de la misma, deberá fijar

domicilio dentro del radio del juzgado para las citaciones y notificaciones ulteriores.

243.2 En caso de que el imputado no pudiere fijar domicilio dentro del radio del juzgado, se tendrá por tal el constituido en autos por su defensor.

Las citaciones y notificaciones que deban hacerse al imputado, se harán también al caucionante cuando tuvieren relación con las obligaciones de este.

ARTÍCULO 244. (Cese de la libertad bajo caución).-

244.1 Las cauciones se harán efectivas si el imputado no comparece a la citación que se le haga durante el proceso.

244.2 En tal caso y sin perjuicio de librar orden de prisión contra el imputado, el juez fijará un plazo no mayor de veinte días para que comparezca o justifique su incomparencia, bajo apercibimiento de hacer efectiva la caución, notificando la resolución en los domicilios constituidos por el imputado y el caucionante.

244.3 Vencido el plazo sin que el imputado hubiera comparecido o justificado fuerza mayor, el juez dictará resolución por la que declarará sin efecto la libertad provisional y ordenará la ejecución de la caución.

ARTÍCULO 245. (Efectividad de las cauciones).-

245.1 Las cauciones se efectivizarán recurriendo al procedimiento de ejecución en vía de apremio previsto en los Artículos 377 y siguientes del Código General del Proceso. Actuará como ejecutante el Fiscal Letrado de Aduana y Hacienda y será competente la jurisdicción civil.

245.2 El producido será asignado al Poder Judicial en calidad de recursos de libre disposición destinados a solventar gastos en el fortalecimiento de las oficinas judiciales en materia penal.

ARTÍCULO 246. (Cancelación de las cauciones).- La caución será cancelada y las garantías serán restituidas cuando:

a) revocada la excarcelación, el imputado fuere sometido a prisión;

b) se absuelva en la causa o se sobresea al imputado;

c) recayese pronunciamiento firme otorgando la libertad condicional del condenado.

ARTÍCULO 247. (Sustitución del caucionante).- Si el caucionante por motivos fundados no puede continuar como tal, podrá pedir al juez que lo sustituya por otra persona que él presente y ofrezca análogas garantías.

Si el juez considera aceptable la causa y apta la persona propuesta, dispondrá la sustitución.

La sustitución aceptada por el juez libera al precedente caucionante solo para el futuro.

ARTÍCULO 248. (Autorización para salir del país).- El excarcelado provisional podrá ser autorizado a salir del país, con conocimiento de causa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) que la caución sea de carácter real o personal;

b) que, en principio, no sea necesaria la presencia del imputado a los efectos de la indagatoria;

c) que la autorización se conceda por un lapso prudencial, determinado por el juez en la respectiva resolución.

En caso de incumplimiento de regreso al país, el juez aplicará lo dispuesto en los Artículos 245 y 246 de este Código.

ARTÍCULO 249. (Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento).-

El tribunal deberá disponer el cese de la prisión preventiva cuando dicte sentencia absolutoria o decrete el sobreseimiento, aunque dichas resoluciones no se encuentren ejecutoriadas.

En tales hipótesis, se podrá imponer en sustitución de la prisión preventiva alguna de las medidas sustitutivas previstas en el Artículo 221 de este Código, cuando estas se consideren necesarias para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

CAPÍTULO III

CAUTELAS ASEGURATIVAS SOBRE LOS BIENES

ARTÍCULO 250. (Medidas sobre los bienes del imputado).-

250.1 El juez podrá decretar a petición del Ministerio Público, de la víctima o de quienes por ella comparecieren las medidas cautelares sobre los bienes del imputado que estime indispensables para proteger los derechos de las víctimas, siempre que exista peligro de su lesión o frustración.

250.2 También podrá decretar dichas medidas sobre bienes del tercero civilmente responsable, previa justificación sumaria del vínculo.

250.3 La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente.

250.4 El juez fijará la extensión de la medida y exigirá la previa prestación de garantía real o personal, salvo que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante, o que se trate del Estado u otra persona jurídica de derecho público.

250.5 Estas medidas se ajustarán en cuanto a su objeto y limitaciones, a los principios establecidos en el Código General del Proceso y leyes especiales.

ARTÍCULO 251. (Excepciones).- Las medidas previstas en el Artículo precedente, no podrán ordenarse contra el Estado ni contra personas jurídicas de derecho público.

ARTÍCULO 252. (Jurisdicción para seguir entendiendo en las medidas cautelares).-

252.1 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la víctima, esta deberá acreditar que inició acción civil dentro de los sesenta días de haberse efectivizado las medidas cautelares y la jurisdicción civil será la única competente para seguir entendiendo a su respecto.

252.2 Si la víctima no cumpliere con lo establecido en el inciso precedente, el afectado por las medidas podrá solicitar su levantamiento ante el juez que las dispuso, quien así lo resolverá con citación contraria.

252.3 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la fiscalía, seguirá entendiendo el tribunal que las dispuso hasta la finalización del proceso.

ARTÍCULO 253. (Recursos).- Cuando la resolución ordene la medida solicitada u otra similar, la misma será apelable sin efecto suspensivo.

ARTÍCULO 254. (Cumplimiento de las medidas).- Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente después de haber sido decretadas y se notificarán a la parte a quien perjudiquen, una vez cumplidas.

LIBRO II

PROCESO DE CONOCIMIENTO

TÍTULO I

DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA

DE CRÍMENES Y DELITOS

ARTÍCULO 255.- El proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda instancia y el recurso de casación.

CAPÍTULO I

INDAGATORIA PRELIMINAR

ARTÍCULO 256. (Formas de inicio).-

256.1 La investigación de un hecho presuntamente delictivo deberá iniciarse:

a) cuando exista flagrancia delictual;

b) por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones de este Código;

c) por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

256.2 Cuando el fiscal tome conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, deberá disponer las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme a lo dispuesto en este Código.

ARTÍCULO 257. (La denuncia).- Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un presunto hecho delictivo. También podrá formularse la denuncia ante la autoridad administrativa competente o ante cualquier tribunal con competencia penal, los que deberán remitirla inmediatamente al Ministerio Público.

ARTÍCULO 258. (Forma y contenido de la denuncia).-

258.1 La denuncia podrá formularse en forma escrita o verbal y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de la o las personas involucradas en el mismo y en su caso de quienes lo hayan presenciado o tengan noticia de él.

258.2 La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la formula ante el funcionario que la reciba, quien, si el denunciante lo exigiera, le expedirá recibo. Cuando no supiere o no pudiere firmar lo hará otra persona a su ruego.

258.3 En el caso de denuncia verbal, el funcionario actuante dejará constancia por escrito, la que será firmada por el denunciante y por el propio funcionario. Si el denunciante no sabe o no puede firmar lo hará un tercero a su ruego.

ARTÍCULO 259. (Reserva de las actuaciones de investigación).-

259.1 La actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrará en ningún caso a este, salvo cuando hubiera sido dispuesta con intervención del tribunal.

259.2 Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal.

259.3 Sin embargo, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación. En este caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, y podrá fijar un plazo de hasta cuarenta días para el mantenimiento de la reserva, previa autorización judicial. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el juez mediante petición fundada del Ministerio Público hasta por un plazo máximo de seis meses.

259.4 El imputado y su defensor podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva o que la limite en cuanto a su extensión, a las piezas o actuaciones comprendidas en la misma o a las personas a quienes afectare.

259.5 No se podrá decretar la reserva para el imputado y su defensor respecto de su declaración, de los informes brindados por peritos referentes a su persona, o de cualquier otra actuación en que hubiere intervenido él o su defensor.

259.6 Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto.

ARTÍCULO 260. (Solicitud de diligencias).- Durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes.

ARTÍCULO 261. (Personas citadas por el fiscal).- Si en el desarrollo de la investigación el fiscal requiere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si el citado no comparece, el fiscal podrá solicitar al juez que le ordene comparecer y aun que disponga su conducción compulsiva si fuera necesario.

ARTÍCULO 262. (Formas de comparecencia del imputado ante el fiscal).-

262.1 Durante la investigación preliminar, el imputado deberá comparecer ante el fiscal cuando este lo disponga.

262.2 Si no comparece voluntariamente, el fiscal podrá solicitar al juez que ordene su conducción.

262.3 Cuando el imputado se encuentre privado de su libertad, el fiscal solicitará al juez su conducción, toda vez que ello sea necesario a los fines de la investigación.

ARTÍCULO 263. (Comparecencia del imputado).-

263.1 Cuando el imputado comparezca ante el fiscal, deberá hacerlo asistido de defensor. Si se trata de su primera declaración, antes de comenzar el interrogatorio, el fiscal le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atribuye, los resultados de la investigación en su contra y su derecho a no declarar.

263.2 El imputado no podrá negarse a proporcionar su identidad, debiendo responder a las preguntas que con tal fin se le formulen, registrándose todo lo actuado.

ARTÍCULO 264. (Registro de las actuaciones).- El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realice, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma del imputado, su defensor y la víctima.

La constancia de cada actuación deberá consignar por lo menos, la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas intervinientes, así como una breve relación de sus resultados.

ARTÍCULO 265. (Duración máxima de la investigación preliminar cuando el imputado no está privado de libertad).- La investigación preliminar no podrá extenderse por un plazo mayor de un año contado desde su inicio, cuando el imputado no se encontrare privado de libertad. En casos excepcionales debidamente justificados, el fiscal podrá solicitar al juez la ampliación del plazo hasta por un año más.

ARTÍCULO 266. (Formalización de la investigación).-

266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que se ha cometido un delito y que están identificados sus presuntos autores, coautores o cómplices, el fiscal deberá formalizar la investigación solicitando al juez competente la convocatoria a audiencia preliminar.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 100 de este Código (principio de oportunidad).

266.2 La solicitud se hará por escrito, salvo en el caso previsto en el Artículo 266.4 de este Código, y deberá contener en forma clara y precisa:

a) la individualización del imputado y de su defensor, si este hubiera sido designado durante la indagatoria preliminar;

b) la relación circunstanciada de los hechos y la participación atribuida al imputado;

c) las normas jurídicas aplicables al caso;

d) los medios de prueba a emplear;

e) las medidas cautelares que el fiscal entienda pertinentes;

f) el petitorio;

g) la firma del fiscal o de un representante autorizado por la Fiscalía.

266.3 Presentada una solicitud de formalización de la investigación que no se ajuste a las disposiciones precedentes, el juez ordenará que se subsanen los defectos en el plazo que señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

266.4 Si el imputado se encontrara detenido por el hecho respecto del cual se decide formalizar la investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inmediato a la detención, aun verbalmente, y la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución de la República.

ARTÍCULO 267. (Efectos de la solicitud de formalización de la investigación).- La solicitud de formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

CAPÍTULO II

AUDIENCIAS

ARTÍCULO 268. (Audiencia preliminar).-

268.1 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 134 de este Código, la audiencia preliminar será presidida por el tribunal y a ella deberán comparecer el fiscal y el imputado asistido por su defensor.

268.2 Si el imputado no hubiera designado defensor, el tribunal le intimará que lo haga antes de comenzar la audiencia, bajo apercibimiento de tener por designado el defensor público que por turno corresponda.

268.3 La víctima será citada. Su asistencia y participación serán facultativas, pero para participar deberá tener asistencia letrada.

Cuando la víctima sea citada a declarar como testigo por cualquiera de las partes, deberá comparecer, estándose a lo dispuesto en el Artículo 164 de este Código.

ARTÍCULO 269. (Desarrollo de la audiencia preliminar).-

269.1 El juez interrogará al imputado sobre sus datos identificatorios conforme a lo previsto en el Artículo 66.1 de este Código, le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atribuye, le informará sobre el derecho a ejercer su defensa y el derecho a no declarar.

269.2 A continuación el juez dará la palabra al fiscal, quien expondrá las razones por las que solicitó la formalización de la investigación. El fiscal relatará los hechos presuntamente delictivos, expresará la participación que en ellos atribuye al imputado, propondrá la calificación jurídica de los mismos que estime adecuada con indicación de las normas legales aplicables, ofrecerá los medios de prueba que se proponga emplear y solicitará al tribunal la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias, en su caso. Si estimare suficiente la prueba reunida, el fiscal podrá pedir además que se siga el proceso extraordinario.

269.3 A continuación el juez dará la palabra a la víctima, si esta participara de la audiencia, para que por intermedio del letrado que la asista se refiera a los hechos, formule su calificación jurídica con indicación de las normas legales aplicables, ofrezca las pruebas que no hubiere ofrecido el fiscal y solicite las medidas cautelares de contenido patrimonial que considere pertinentes. La intervención de la víctima será facultativa.

269.4 Luego el imputado será interrogado directamente por el fiscal y el defensor, en ese orden. En todo momento el juez podrá formular las preguntas aclaratorias o ampliatorias que considere necesarias, y dar curso a las preguntas de la misma naturaleza que pretendan formular el fiscal y el defensor.

269.5 Tras la declaración del imputado se le dará la palabra a su defensor para que formule los descargos, ofrezca los medios de prueba que estime necesarios y conteste el pedido fiscal o de la víctima de medidas cautelares, en su caso. Si el fiscal hubiere solicitado la tramitación del proceso por la vía extraordinaria, la defensa también se pronunciará al respecto.

269.6 Oídas las partes el juez resolverá de inmediato las siguientes cuestiones:

a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación. La formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputa-

do al proceso y, cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el Artículo 80 de la Constitución de la República;

b) la vía procesal a seguir, en caso de que el fiscal haya solicitado seguir la extraordinaria. Si la defensa se hubiera opuesto a la solicitud, el juez resolverá la cuestión atendiendo a la posibilidad de diligenciar rápidamente la prueba ofrecida;

c) los obstáculos formales al desarrollo del debate, ya hubieren sido señalados por las partes o advertidos de oficio;

d) el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima de acuerdo con el literal e) del Artículo 81.2 de este Código.

Si el imputado se encontrare detenido por los hechos de la causa, el juez deberá dictar esta resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución de la República.

269.7 Si el juez dispone la prisión preventiva del imputado, en la misma resolución declinará competencia para ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal que por turno corresponda. El juez que asuma el conocimiento de la causa deberá cumplir con las actividades de la audiencia preliminar pendientes según lo previsto en el siguiente numeral de este Artículo, a cuyos efectos convocará a audiencia en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del expediente.

269.8 A continuación el juez se pronunciará sobre los medios probatorios propuestos, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes y procederá al diligenciamiento de la prueba.

ARTÍCULO 270. (Audiencia complementaria).-

270.1 Si la prueba no hubiera podido diligenciarse en su totalidad en la audiencia preliminar, se citará a las partes y a la víctima que hubiera comparecido en la audiencia preliminar, para una audiencia complementaria en el más breve tiempo posible, la que se celebrará con los requisitos previstos en los Artículos 134 a 139 de este Código.

270.2 Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

270.3 Las partes podrán proponer, hasta la deducción de la acusación, diligencias probatorias que no pudieron ser ofrecidas oportunamente, por ser claramente supervinientes o referidas a hechos nuevos, acreditando los motivos y la necesidad de las mismas. El tribunal resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 269.8 de este Código.

270.4 Concluida la recepción de pruebas, el tribunal conferirá traslado sucesivamente al Ministerio Público para que deduzca acusación o solicite el sobreseimiento del imputado y a la defensa para que conteste.

270.5 Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal podrá solicitar prórroga de la audiencia para deducir acusación por un plazo máximo de diez días corridos. Igual prórroga podrá ser solicitada por la defensa para su contestación. El tribunal resolverá en ambos casos en forma irrecurrible.

270.6 Si el fiscal solicitare el sobreseimiento se estará a lo dispuesto en el Artículo 129 de este Código.

270.7 El fiscal podrá modificar en la acusación o antes de ella, la pretensión formulada al solicitar la formalización de la investigación respecto de la calificación delictual.

270.8 Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro de los quince días siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

270.9 Todo lo actuado se documentará conforme a lo dispuesto en el Artículo 139 de este Código.

ARTÍCULO 271. (Resoluciones dictadas en audiencia).-

271.1 Las resoluciones dictadas en el curso de las audiencias admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse y sustanciarse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.

271.2 La sentencia interlocutoria dictada conforme a lo dispuesto en el Artículo 269.6 de este Código, admite el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Si se dispone el archivo de las actuaciones, la resolución será apelable con efecto suspensivo.

271.3 Todas las resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba serán apelables con efecto diferido.

TÍTULO II

DEL PROCESO EXTRAORDINARIO EN MATERIA DE CRÍMENES Y DELITOS

ARTÍCULO 272. (Procedencia).- Si el Ministerio Público entendiera suficiente la prueba reunida para fundar la acusación, al solicitar la formalización de la investigación o en la audiencia preliminar podrá pedir que el proceso se tramite por la vía extraordinaria.

Si la defensa no se opusiere, el juez deberá acceder al pedido del fiscal. En caso contrario el juez resolverá de acuerdo con el literal b) del Artículo 269.6 de este Código.

ARTÍCULO 273. (Procedimiento).- El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el proceso ordinario, con las siguientes modificaciones:

273.1 Si todos los imputados hubieran aceptado la tramitación por la vía del proceso extraordinario, no habrá declinación de competencia en el supuesto previsto en el Artículo 269.7 de este Código.

273.2 La acusación y la defensa se formularán verbalmente en audiencia, luego del diligenciamiento de la prueba; el tribunal no otorgará prórroga a las partes a tales efectos.

273.3 El tribunal dictará sentencia con sus fundamentos en la misma audiencia, pero en los casos complejos podrá prorrogar la audiencia hasta por diez días, al efecto indicado.

TÍTULO III

DEL PROCESO EN MATERIA DE FALTAS

ARTÍCULO 274. (Procedimiento*)*.- Serán de aplicación al procedimiento por faltas lo dispuesto en el Libro II, Títulos I y II de este Código en lo pertinente.

ARTÍCULO 275. (Titularidad de la acción penal).- La titularidad de la acción penal en materia de faltas corresponde a los Fiscales Letrados Adjuntos y a los Fiscales Letrados Departamentales.

TÍTULO IV

DE LOS PROCESOS INCIDENTALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 276. (Procedencia).- Corresponde tramitar por vía incidental las cuestiones diferentes de la principal, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a la misma, siempre que no proceda a su respecto otro medio de tramitación.

ARTÍCULO 277. (Principio de la tramitación incidental).- Todos los incidentes que se susciten en el proceso, si no tienen en la ley un procedimiento propio deberán tramitarse en la forma prevista en las disposiciones de este Título.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 278. (Incidente en audiencia).- Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formularán verbalmente y oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el tribunal sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia como causal de impugnación al deducir recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 279. (Incidente fuera de audiencia).-

279.1 La demanda incidental se planteará por escrito confiriéndose traslado por seis días.

279.2 Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme a lo dispuesto en el Título VI del Libro I de este Código.

El tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba y la concentrará en una sola audiencia, al término de la cual se oirá a las partes acerca del resultado de la misma.

279.3 Contestado el traslado, si se tratare de un asunto de puro derecho o si las partes no ofrecieran prueba o se hubiere diligenciado la que correspondiera, el tribunal se pronunciará en una única sentencia.

ARTÍCULO 280. (Recurso).-

280.1 La resolución que no admita el incidente será susceptible de los recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo.

280.2 La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible del recurso de apelación sin efecto suspensivo.

ARTÍCULO 281. (Forma de sustanciación del incidente fuera de audiencia).- El incidente que se plantee fuera de audiencia, se tramitará en pieza separada del principal sin suspender el curso del proceso hasta la citación para sentencia, salvo que el juez declare a petición de parte, que obsta al desarrollo de aquel. Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición.

CAPÍTULO III

INCIDENTES ESPECIALES

SECCIÓN I

De la recusación

ARTÍCULO 282. (Remisión).- El incidente de recusación se regirá por lo dispuesto en los Artículos 325 a 328 del Código General del Proceso.

SECCIÓN II

De la contienda de competencia

ARTÍCULO 283. (Remisión).- El incidente de contienda de competencia se regirá por lo dispuesto en el Artículo 331 del Código General del Proceso.

SECCIÓN III

Del incidente de excarcelación provisional

ARTÍCULO 284. (Oportunidad procesal).- La solicitud de libertad provisional podrá formularse en cualquier estado de la causa, hasta tanto no haya recaído sentencia de condena ejecutoriada.

ARTÍCULO 285. (Trámite de la solicitud).-

285.1 La solicitud de excarcelación provisional podrá formularse en audiencia o fuera de ella.

285.2 Presentada por escrito fuera de audiencia, se conferirá vista al Ministerio Público el que deberá pronunciarse en el plazo de tres días contado desde el momento de la recepción del pedido. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar la ampliación de dicho plazo hasta por diez días. El juez dispondrá de igual plazo para resolver.

285.3 Propuesta la solicitud en audiencia, el fiscal se pronunciará en ese acto y el juez deberá resolver en la misma. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar prórroga para expedirse hasta por diez días y de igual plazo dispondrá el juez para pronunciarse.

285.4 La sentencia interlocutoria que recaiga se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 116 de este Código.

LIBRO III

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 286. (Principio general).- Ninguna pena o medida de seguridad podrá ejecutarse sino en cumplimiento de sentencia definitiva ejecutoriada.

CAPÍTULO I

OBJETO Y PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 287. (Objeto).- La actividad procesal de ejecución comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las condenas penales y el trámite y decisión de las cuestiones sobrevinientes relativas a las penas y a las medidas de seguridad.

ARTÍCULO 288. (Competencia del Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia).- En sede de ejecución conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. Además de los cometidos que le asigna este Código y otras leyes, corresponde especialmente al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia:

a) velar por el respeto de los derechos humanos en todo el ámbito de su competencia. Con fines de vigilancia y contralor, podrá hacer comparecer ante sí a condenados, imputados y a funcionarios del sistema penitenciario;

b) salvaguardar los derechos de los internos que cumplan condena, medidas de seguridad o prisión preventiva, dando cuenta en este último caso al tribunal competente, de los abusos y desviaciones que en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario, se puedan producir;

c) controlar la regularidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los penados, superiores a treinta días. Dichas sanciones serán comunicadas al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia dentro del plazo de cinco días desde el inicio de su efectivo cumplimiento. Recibida la comunicación, el juez dará vista a la defensa del penado. Evacuada la vista o vencido el plazo para hacerlo, resolverá en única instancia;

d) resolver, con informe del director del establecimiento penitenciario y de los organismos técnicos pertinentes, la clasificación y las progresiones o regresiones de las etapas respectivas;

e) recibir, tramitar y resolver acerca de peticiones o quejas que formulen los internos, sus familiares o sus defensores respecto del trato penitenciario, pudiendo recabar a esos efectos los informes pertinentes;

f) resolver las solicitudes de salidas transitorias, laborales o domiciliarias de los penados, de

acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente;

g) controlar la regularidad de los traslados de los penados efectuados por la autoridad administrativa. Dichos traslados serán comunicados dentro del plazo de cinco días de su efectivización. Recibida la comunicación el juez resolverá en definitiva;

h) autorizar las internaciones hospitalarias. En casos de urgencia, después de efectuada la internación, se le dará cuenta de inmediato para su aprobación;

i) autorizar la salida del país del penado, en las mismas condiciones de tramitación previstas respecto del imputado, en el Artículo 248 de este Código;

j) realizar visitas o inspecciones a los establecimientos carcelarios cada vez que lo considere necesario y por lo menos una vez cada treinta días. Si en ocasión de tales visitas o inspecciones verificare la existencia de irregularidades que afectaren seriamente a los penados en causas ajenas a su competencia la pondrá, a la mayor brevedad, en conocimiento del juez competente;

k) conocer y resolver en primera instancia sobre la concesión y revocación de los beneficios de las libertades condicional y anticipada;

l) conocer y resolver la revocación de la suspensión condicional de la pena;

m) conocer y resolver en el proceso de unificación de penas.

ARTÍCULO 289. (Competencia por razón de lugar).-

289.1 En el departamento de Montevideo, el proceso de ejecución penal será competencia de uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, según lo determine la Suprema Corte de Justicia.

289.2 En los departamentos del interior, actuarán como jueces de ejecución de la sentencia, los de Primera Instancia que la hubieren dictado cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia.

289.3 Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse fuera del ámbito de competencia territorial del tribunal de primera instancia que las dispuso, la función de ejecución y vigilancia la ejercerá el juez de igual jerarquía del lugar donde deban cumplirse y que estuviere de turno a la fecha en que la sentencia quedare ejecutoriada.

Exceptúanse los procesos que se hubieran tramitado en Montevideo en cuyo caso la función de ejecución y vigilancia de las personas condenadas corresponderá a los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Montevideo.

289.4 La Suprema Corte de Justicia podrá delimitar regiones, independientes de los límites departamentales, para asignar competencia territorial en materia de ejecución y vigilancia atendiendo a la localización de los establecimientos de reclusión y rehabilitación en relación con el lugar de asiento del tribunal de primera instancia que substanció la causa.

289.5 Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coincidieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena, liquidada la pena o resuelta la libertad condicional si correspondiere, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores.

289.6 Si la sentencia hubiere quedado ejecutoriada solo para alguno de los imputados, deberá cumplirse inmediatamente a su respecto, a cuyos efectos se formará pieza con testimonio de aquella, con constancia de la fecha en que quedó ejecutoriada y con las actuaciones referentes a la identificación y antecedentes del penado.

ARTÍCULO 290. (Liquidación de la pena).- Una vez recibidos los autos, se efectuará la liquidación de la pena impuesta, determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquidación se notificará al fiscal y al defensor y, de no deducirse oposición dentro del plazo de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma se tramitará por la vía incidental.

ARTÍCULO 291. (Criterios aplicables).- A los efectos del cómputo de la liquidación deberá descontarse el tiempo de detención o de limitación de la libertad sufrida por el condenado, en el país o en el extranjero.

Deberá descontarse un día de prisión o limitación de la libertad, en las hipótesis siguientes:

a) por cada día o fracción de efectiva detención en el país o en el extranjero, incluyendo el arresto domiciliario o la internación hospitalaria;

b) por cada dos días o fracción de efectivo cumplimiento, en los casos previstos en los literales j), k) y l) del Artículo 221 de este Código;

c) por cada diez días o fracción de efectivo sometimiento a cada una de las medidas indicadas en los literales a) a h) del Artículo 221 de este Código;

d) por cada dos días de trabajo o estudio cumplidos durante la reclusión, por todo el tiempo que esté debidamente documentado.

Los establecimientos de reclusión informarán trimestralmente al tribunal los días de trabajo o estudio cumplidos por cada recluso.

ARTÍCULO 292. (Comunicación).-

292.1 Cuando la pena deba ser cumplida en reclusión en todo o en parte, el tribunal comunicará dicha circunstancia a la autoridad penitenciaria, indicando la fecha de su finalización.

292.2 Si el condenado se hallare en libertad y correspondiere su reclusión, el tribunal ordenará inmediatamente su detención. Una vez aprehendido y liquidada la pena, efectuará dicha comunicación.

ARTÍCULO 293. (Revisión).- El cómputo de la pena es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe la existencia de un error.

TÍTULO II

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

CAPÍTULO I

DE SU CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 294. (Cumplimiento).- Las penas privativas de libertad serán cumplidas en la forma que establezcan las leyes especiales, teniendo el tribunal los poderes y deberes que en ellas se establezcan y los que señala el Artículo 288 de este Código.

CAPÍTULO II

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

ARTÍCULO 295. (Presupuestos).-

295.1 La libertad condicional es un beneficio que se otorga a los penados que se hallaren en libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, pueda formularse un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por la ley.

295.2 El penado podrá solicitar la libertad condicional en un plazo perentorio de diez días hábiles posteriores a la ejecutoriedad de la sentencia de condena, suspendiéndose su reintegro a la cárcel hasta tanto se resuelva si se le otorga dicho beneficio, el que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos siguientes.

295.3 El liberado condicional queda sujeto a vigilancia de la autoridad, en los términos dispuestos en el Código Penal, por el saldo de pena que resultare de la liquidación respectiva.

ARTÍCULO 296. (Trámite).-

296.1 Aprobada la liquidación, el juez competente solicitará al Instituto Técnico Forense dentro del plazo de tres días la planilla de antecedentes judiciales del penado, actualizada a no más de sesenta días de su emisión.

296.2 Si dicha planilla no registra que haya sido condenado por nuevo delito, y acreditare hallarse en condiciones de vida que permitan formular un pronóstico favorable de reinserción social, el juez, previa vista al Ministerio Público, podrá conceder la libertad condicional. Se liquidará el saldo de pena a cumplir, computando el tiempo de vigilancia que refiere el Artículo 102 del Código Penal, a partir del momento en que el penado fue puesto en libertad. Si conforme a la liquidación efectuada la vigilancia estuviese cumplida, el juez declarará extinguida la pena, efectuando las comunicaciones pertinentes.

296.3 En caso de existir saldo de pena, el condenado quedará sujeto a vigilancia de la autoridad y a su término el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, previa vista al Ministerio Público se declarará extinguida la pena efectuándose las comunicaciones pertinentes.

296.4 No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional, si agregada la respectiva planilla de antecedentes, resulta que el penado fue condenado por la comisión de nuevo delito durante el lapso en que estuvo en libertad provisional.

ARTÍCULO 297. (Impugnación).- La sentencia que resuelva el pedido de libertad condicional podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación.

Solo tendrá efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que deniegue la libertad condicional.

CAPÍTULO III

DE LA LIBERTAD ANTICIPADA

ARTÍCULO 298. (Presupuestos).-

298.1 La libertad anticipada es un beneficio que podrá otorgarse a los penados que se hallaren privados de libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por este Código.

298.2 El liberado queda sujeto a vigilancia de la autoridad en los términos de lo dispuesto en el Código Penal, por el saldo de pena que resulte de la liquidación respectiva.

298.3 Este beneficio podrá otorgarse a pedido de parte y de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) si la pena recaída fue de prisión, o de multa, que por defecto de cumplimiento se transformó en prisión, podrá solicitarse cualquiera fuere el tiempo de reclusión sufrido;

b) si la condena fue de penitenciaría, cuando el penado haya cumplido la mitad de la pena impuesta;

c) si se establecieran medidas de seguridad eliminativas aditivas a una pena de penitenciaría, el beneficio podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las dos terceras partes de la pena, disponiéndose el cese de dichas medidas.

ARTÍCULO 299. (Trámite).-

299.1 La petición será formulada en forma escrita por el penado o su defensor ante el juez competente, quien dispondrá la agregación de los siguientes recaudos:

a) la planilla de antecedentes actualizada del Instituto Técnico Forense y reliquidación de la pena por redención de la misma por trabajo o estudio, si correspondiere;

b) el informe de conducta carcelaria proporcionado por el director o responsable del establecimiento, quien deberá remitirlo a la sede judicial dentro del plazo de cinco días contados desde que haya recibido la solicitud, juntamente con los informes técnicos que se dispongan referidos a las aptitudes de resocialización del penado.

299.2 El juez resolverá previa vista del Ministerio Público, mediante resolución fundada.

299.3 Concedida la libertad anticipada, se efectuará la liquidación del saldo de pena a cumplir bajo vigilancia de la autoridad. A su término, el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si el penado no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, se declarará extinguida la pena previa vista al Ministerio Público, efectuándose las comunicaciones pertinentes.

ARTÍCULO 300. (Impugnación).-

300.1 La sentencia que concede la libertad anticipada podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación en subsidio con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda.

300.2 En caso denegatorio, no podrá solicitarse nuevamente el beneficio hasta que hayan transcurrido seis meses de ejecutoriada la resolución respectiva.

ARTÍCULO 301. (Libertad anticipada en caso de unificación de penas pendientes).-

301.1 En los casos en que un encausado tenga pendiente el dictado de sentencia de unificación de penas y se encontrare recluido cumpliendo una sentencia de condena ejecutoriada, podrá impetrar el beneficio de la libertad anticipada, independientemente del estado de las otras causas.

301.2 El juez procederá conforme a lo dispuesto en los Artículos precedentes, debiendo solicitar informes sobre las causas en trámite a efectos de estimar provisoriamente, la posible pena de unificación a recaer. Tal estimación no implicará prejuzgamiento.

301.3 En caso de concederse la libertad anticipada, ella comprenderá todas las causas pendientes de unificación y se procederá a efectuar una liquidación provisoria del término de vigilancia, teniendo en cuenta la estimación de la pena unificada.

301.4 La sentencia que concede el beneficio se comunicará a los jueces de las demás causas a sus efectos.

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

ARTÍCULO 302. (Presupuestos).- Al dictar sentencia de condena, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal podrá otorgar en el mismo acto el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la

pena, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) que se trate de un primario absoluto o legal;

b) que la pena impuesta sea de prisión o de penitenciaría hasta tres años.

ARTÍCULO 303. (Efectos).-

303.1 El condenado que obtenga el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, permanecerá bajo vigilancia de la autoridad por el plazo de dos años. Dicho plazo se contará desde la fecha en que la sentencia de condena quedó ejecutoriada.

303.2 Cumplido el referido plazo, el juez solicitará la agregación de la planilla de antecedentes actualizada.

303.3 Si de ella resultare que el penado no hubiere sido condenado por nuevo delito durante el término de vigilancia y previa vista al Ministerio Público, se tendrá por extinguido el delito y por no pronunciada la sentencia, ordenándose la cancelación de la inscripción en el registro respectivo.

CAPÍTULO V

CUMPLIMIENTO Y REVOCACIÓN DE LOS BENEFICIOS

ARTÍCULO 304. (Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad).-

304.1 Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el Artículo 228 de este Código, podrá aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será competente para dictar resolución el juez de la causa.

304.2 Si las circunstancias excepcionales a que refiere el Artículo 228 de este Código se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el propio penado y se tramitará por vía incidental.

ARTÍCULO 305. (Enfermedad del condenado).-

305.1 Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad psíquica o física, la dirección del establecimiento deberá comunicarlo al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien previo los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado.

305.2 En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el traslado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de la medida adoptada.

305.3 El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será computado como cumplimiento efectivo de la pena.

ARTÍCULO 306. (Vigilancia).-

306.1 El penado liberado condicional o anticipadamente o con suspensión condicional de la pena, quedará sometido a la vigilancia del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en las condiciones previstas en el Artículo 102 del Código Penal.

306.2 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia supervisará la forma concreta de la vigilancia y podrá disponer de otras modalidades o asumirlas directamente si lo viere del caso, o pedir colaboración a otras instituciones públicas o privadas.

306.3 La vigilancia será ejercida de manera que no perjudique al vigilado y le permita atender normalmente sus actividades habituales.

306.4 Si el condenado considera que la vigilancia no se cumple en debida forma, podrá ocurrir verbalmente ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien dispondrá las medidas que estime necesarias.

ARTÍCULO 307. (Revocación de la libertad condicional o anticipada).- Si antes del cumplimiento íntegro de la pena en libertad condicional o anticipada, el penado comete nuevo delito por el que resulte condenado o quebrante los deberes impuestos por la autoridad, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá revocar el beneficio y disponer su reintegro a la cárcel, siguiendo el mismo procedimiento que para su concesión. En caso de revocación, el tiempo que el condenado haya estado en libertad vigilada, no se computará como cumplimiento de pena.

ARTÍCULO 308. (Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena).-

308.1 Cuando el penado hubiera cometido nuevo delito antes de quedar ejecutoriada la primera sentencia, la suspensión que esta hubiera decretado no tendrá efecto.

308.2 Si durante el término de vigilancia el penado hubiere sido condenado por nuevo delito o incumpliere las obligaciones impuestas, se revocará el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la

pena, continuando con lo que al estado de dicha causa corresponda.

TÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS

CAPÍTULO I

PENAS DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN

ARTÍCULO 309. (Inhabilitación absoluta).- La inhabilitación absoluta para cargos, empleos públicos y derechos políticos, determinará que el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia comunique la pena a la Corte Electoral y organismos que correspondan, según el caso.

ARTÍCULO 310. (Inhabilitación especial).- En casos de penas de inhabilitación especial, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia dispondrá solamente las comunicaciones correspondientes a tal efecto especial.

ARTÍCULO 311. (Penas de suspensión).- Si la pena fuera de suspensión, el juez ordenará la comunicación de la sentencia al organismo en que el condenado cumpliere funciones.

ARTÍCULO 312. (Cese anticipado de pena accesoria).-

312.1 Si mediaren circunstancias excepcionales, podrá concederse al condenado el cese anticipado de su pena accesoria.

312.2 La cuestión será tramitada en la forma dispuesta en el Artículo 299 de este Código y el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá otorgar el beneficio si hubiere transcurrido la mitad de la pena y estimare acreditadas las circunstancias excepcionales invocadas y la rehabilitación del condenado.

CAPÍTULO II

PENAS PECUNIARIAS, SUSTITUTIVAS Y ACCESORIAS

ARTÍCULO 313. (Pena de multa).-

313.1 Si se condena al pago de una multa, esta deberá ser abonada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

313.2 Si el pago no se efectúa dentro del plazo, se intimará de oficio al condenado para que lo verifique dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse a la sustitución de la multa por prisión. Dicho apercibimiento se hará efectivo sin necesidad de otro trámite y sin perjuicio del otorgamiento de la libertad condicional, si correspondiere.

313.3 Si consta que el condenado fuera notoriamente pobre, se procederá directamente a la sustitución de la multa por la imposición de un régimen de vigilancia de la autoridad, conforme a lo previsto en el Artículo 102 del Código Penal.

ARTÍCULO 314. (Penas accesorias).- El juez ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan en los casos de penas accesorias a las de prisión o penitenciaría previstas en el Código Penal.

ARTÍCULO 315. (Pena de confiscación).- La pena de confiscación de los instrumentos con que se haya cometido el delito y los efectos del mismo, será ejecutada de oficio por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia quien dispondrá el destino que corresponda según la naturaleza de aquellos.

CAPÍTULO III

PENAS ALTERNATIVAS

ARTÍCULO 316. (Regla general).- En los supuestos en que la ley establezca penas alternativas, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia deberá fiscalizar su cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 287 y siguientes de este Código, según corresponda.

TÍTULO IV

DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

ARTÍCULO 317. (Regla general).- Cuando se configure una causa de extinción de la pena, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia con citación del Ministerio Público y la defensa formulará de inmediato la declaración correspondiente, ordenando la clausura de los procedimientos, las comunicaciones pertinentes y el archivo del expediente, teniendo por definitiva la libertad del condenado.

ARTÍCULO 318. (Prescripción de la pena).-

318.1 Verificada la prescripción de la pena de acuerdo con las normas del Código Penal, será declarada por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia con citación del Ministerio Público y la defensa y aparejará la clausura de los procedimientos pendientes y el archivo del expediente, teniéndose por definitiva la libertad.

318.2 La prescripción de la pena se declarará de oficio, aun cuando no fuere alegada. Si lo fuere, tramitará como incidente.

TÍTULO V

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 319. (Enumeración).- Las medidas de seguridad a regularse en el presente Código son:

a) eliminativas;

b) curativas;

c) preventivas.

ARTÍCULO 320. (Regla general).- El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia comunicará a la autoridad administrativa a cargo de la aplicación de las medidas de seguridad, los plazos de vigencia de estas y el deber de informar sobre el estado de las personas sometidas a ellas o sobre otras circunstancias del caso.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINATIVAS

ARTÍCULO 321. (Cumplimiento).-

321.1 La sentencia que imponga una medida de seguridad eliminativa deberá determinar el mínimo y el máximo de su duración.

321.2 La medida comenzará a ejecutarse en los establecimientos adecuados, luego de cumplida la pena impuesta en la sentencia.

321.3 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia tendrá sobre las personas sometidas a medidas de seguridad eliminativas los mismos cometidos de vigilancia establecidos en este Código para el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

ARTÍCULO 322. (Cese).- Vencido el plazo mínimo de su duración, el juez encargado de la ejecución y vigilancia solicitará informes al establecimiento donde se cumple la medida, pudiendo decretar el cese cuando dichos informes hagan prever la readaptación del penado.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS

ARTÍCULO 323. (Cumplimiento).-

323.1 Las medidas de seguridad curativas se cumplirán en un establecimiento especial o centro de asistencia para enfermos mentales o bajo el cuidado de una persona o institución fuera de dicho centro y sujetas a condiciones determinadas.

323.2 Los peritos del Instituto Técnico Forense asesorarán al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia sobre el régimen de cumplimiento de las medidas de seguridad curativas y sus modificaciones.

323.3 El centro hospitalario correspondiente deberá informar al juez por lo menos cada tres meses, de la evolución del internado.

ARTÍCULO 324. (Cese).-

324.1 El cese de las medidas de seguridad curativas será dispuesto por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia cuando hayan desaparecido las causas que les sirvieron de fundamento, previo dictamen pericial del Instituto Técnico Forense e informe de la dirección del centro asistencial.

324.2 El cese se dispondrá de oficio o a solicitud del defensor, del curador de la persona o de esta misma, siguiéndose el proceso de los incidentes.

En todos los casos deberá oírse previamente al Ministerio Público.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS

ARTÍCULO 325. (Vigilancia de la autoridad).- Se aplicará lo establecido en el Artículo 295.3 de este Código a la sentencia que sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad en los casos previstos en los Artículos 92, 94 y 100 del Código Penal en lo pertinente.

ARTÍCULO 326. (Caución de no ofender).- Si la sentencia impone la caución de no ofender, se estará a lo establecido en el Artículo 101 del Código Penal.

TÍTULO VI

DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 327. (Concepto).- Las sentencias ejecutoriadas recaídas en los procesos conexos producirán todos sus efectos, sin perjuicio de la unificación de penas por reiteración de acuerdo con lo establecido por el Artículo 54 del Código Penal o eventual aplicación de medidas de seguridad.

ARTÍCULO 328. (Trámite).-

328.1 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia formalizará el incidente de unificación de penas en la causa más antigua. A esos efectos se tendrá en cuenta la fecha de la audiencia preliminar respectiva. Se intimará al condenado para que designe defensor en este proceso, bajo apercibi-

miento de tenérsele por designado al defensor público que por turno corresponda.

328.2 A los efectos del trámite se remitirán los expedientes originales o testimonios según corresponda.

328.3 Recibidos los mismos e integrado el cúmulo, se conferirá traslado al Ministerio Público para que deduzca requisitoria de unificación de pena dentro del plazo de seis días. De igual plazo dispondrá el defensor para la contestación teniéndose presente a todos sus efectos lo dispuesto en el Artículo 126 de este Código.

LIBRO IV

PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I

DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN

CAPÍTULO I

RÉGIMEN

ARTÍCULO 329. (Normas aplicables).-

329.1 El proceso de extradición se regirá por las normas de los tratados o convenciones internacionales ratificados por la República que se encuentren vigentes.

329.2 En relación con los crímenes y delitos tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el proceso de extradición y de entrega de sospechosos se regirá, además, por lo establecido por dichas normas.

329.3 En defecto o insuficiencia de los instrumentos mencionados, se aplicarán las siguientes disposiciones.

ARTÍCULO 330. (Procedencia de la extradición).-

330.1 Cuando fueren requeridos al efecto, los tribunales competentes de la República entregarán a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional para ser sometida a proceso, concluir un proceso ya iniciado o cumplir la pena privativa de libertad a que hubiere sido condenada en el Estado requirente, con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente Título.

330.2 Para que proceda la extradición es necesario que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer en el delito en que funda su solicitud, haya sido o no cometido en dicho Estado.

ARTÍCULO 331. (Improcedencia de la extradición).- La extradición no procede cuando:

a) el requerido haya cumplido la pena correspondiente al delito que motiva el pedido, o cuando de cualquier manera se hubiere extinguido la pretensión punitiva del Estado con anterioridad a la solicitud;

b) estén prescriptos el delito, el ejercicio de la acción penal o la pena impuesta, según la legislación nacional o la del Estado requirente;

c) el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado en un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente;

d) se trate de delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos, o delitos comunes cuya represión obedezca a motivos políticos. No serán considerados como delitos políticos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra ni los actos de terrorismo;

e) de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad o que la situación de la persona pueda verse agravada por algún otro motivo análogo;

f) la conducta que motiva el pedido de extradición no se encuentre prevista como delito en ambas legislaciones. Para dicha comprobación, no se atenderá a la denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones típicas;

g) la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad o cuando la pena que aún le resta por cumplir, sea inferior a seis meses;

h) la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no brindase seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar, en consecuencia, una nueva redacción;

i) la persona reclamada hubiese sido inimputable por razón de edad al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se reclama.

ARTÍCULO 332. (Pena de muerte y prisión perpetua).- En ningún caso se autorizará la entrega cuando la pena a aplicarse por el Estado requirente, sea la pena de muerte o la prisión perpetua.

ARTÍCULO 333. (Nacionalidad).- La nacionalidad de la persona reclamada, no impedirá la sustanciación del pedido de extradición y en su caso, la entrega.

CAPÍTULO II

SOLICITUD

ARTÍCULO 334. (Forma de la solicitud).- La solicitud de extradición será formulada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por el representante del Estado requirente, o directamente de Gobierno a Gobierno, y deberá ser acompañada de la documentación requerida por este Código.

ARTÍCULO 335. (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo).- El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento, puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia, no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo.

ARTÍCULO 336. (Documentación requerida).- La solicitud de extradición deberá ser acompañada de los siguientes documentos, debidamente traducidos:

a) si se trata de un imputado, copia auténtica del auto de sujeción a proceso o del auto que disponga la privación de libertad, así como copia de las piezas procesales en que se funda la resolución. Tratándose de un condenado, deberá acompañarse copia auténtica de la sentencia de condena;

b) una relación de los hechos atribuidos a la persona reclamada, con indicación del tiempo y lugar de comisión, su calificación jurídica y los elementos de prueba correspondientes;

c) transcripción de las disposiciones legales aplicables referidas a la jurisdicción del tribunal, a la descripción típica, las circunstancias alteratorias, la prescripción del delito y de la pena, clase y monto de la pena conminada, sistema de aplicación de la misma y normas procesales que autorizan el arresto;

d) toda información que permita la identificación del reclamado, incluso fotografías, ficha dactiloscópica y mención de su probable domicilio o paradero en el territorio nacional.

ARTÍCULO 337. (Solicitud por más de un Estado).-

337.1 Cuando la extradición de una persona se pida por diferentes Estados por un mismo delito, el órgano jurisdiccional competente dará preferencia a la solicitud del Estado que haya prevenido en el conocimiento de aquel.

337.2 Si se tratare de hechos diferentes, dará preferencia al pedido formulado por el delito más grave y si se los reputara de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad en el pedido.

CAPÍTULO III

ARRESTO PREVENTIVO

ARTÍCULO 338. (Norma general).-

338.1 En situaciones de urgencia, podrá solicitarse el arresto preventivo de la persona reclamada vía Interpol, debiendo indicar el Estado requirente, la intención de presentar un pedido formal de extradición y la existencia de una orden judicial de arresto o de un fallo condenatorio.

338.2 El juez competente ordenará que la persona reclamada permanezca privada de libertad o dispondrá en su caso una medida alternativa al arresto. También podrá disponer la incautación de efectos o instrumentos del delito que el reclamado tenga en su poder.

338.3 Efectivizada la detención del reclamado, la misma será comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores el que a su vez lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Estado requirente.

338.4 El juez letrado interviniente deberá convocar a audiencia dentro de las veinticuatro horas desde que se produjo la detención. En la misma, se intimará a la persona detenida la designación de defensor bajo apercibimiento de designársele el defensor público que por turno corresponda. De inmediato, se le tomará declaración a los efectos de verificar su identidad y se le informará sobre los motivos invocados por el Estado requirente para solicitar su entrega y sobre el procedimiento de extradición.

ARTÍCULO 339. (Cese del arresto y plazo máximo de detención de la persona requerida).-

339.1 Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la audiencia, el Estado requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del arresto, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar respecto de la persona requerida y de sus bienes.

339.2 A partir del vencimiento de dicho plazo, si el pedido de extradición no se presentara dentro de los quince días subsiguientes, el juez dispondrá la libertad definitiva del requerido, el cese de las medidas cautelares dispuestas y el archivo del expediente. Todo ello se dispondrá en audiencia y con intervención de las partes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Capítulo siguiente.

339.3 La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a los ciento veinte días, sin perjuicio de otras medidas cautelares.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 340. (Competencia del tribunal).-

340.1 Recibido el pedido de extradición, el Poder Ejecutivo con intervención de la Autoridad Central, lo cursará a la Suprema Corte de Justicia para que esta lo envíe al Juzgado Letrado en lo Penal de la Capital que por turno corresponda.

340.2 La fecha de la resolución judicial extranjera que ordena el pedido de extradición, determina el turno de los tribunales uruguayos.

ARTÍCULO 341. (Representación del Estado requirente).-

341.1 En la solicitud de extradición o posteriormente hasta la audiencia de debate, el Estado requirente deberá designar apoderado abogado entre los letrados inscriptos en la matrícula nacional. Previo al ejercicio de su cargo, este deberá aceptarlo y constituirá domicilio dentro del radio del tribunal.

341.2 El letrado designado actuará en el proceso de extradición como parte formal, en interés del Estado requirente y con todos los derechos y atribuciones de tal calidad, para el ejercicio de una adecuada representación y control de los actos procesales.

ARTÍCULO 342. (Intervención del Ministerio Público).- En el proceso de extradición, el Ministerio Publico actuará como dictaminante técnico, ejerciendo el contralor formal y sustancial de los actos procesales, sin perjuicio de la facultad de pedir la postergación de la entrega, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 347 de este Código.

ARTÍCULO 343. (Recepción del pedido de extradición).- Recibida la solicitud, si el reclamado no estuviere privado de su libertad o sometido a medidas limitativas de la libertad física, el juez ordenará su detención con las formalidades legales y la incautación de efectos del delito, debiendo procederse de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 338.4 de este Código.

ARTÍCULO 344. (Procedimiento. Audiencia de debate).-

344.1 El tribunal convocará a audiencia de debate dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el reclamado fue puesto a su disposición.

344.2 A la audiencia de debate deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público.

344.3 El tribunal informará a la persona requerida sobre el contenido de la solicitud y pondrá a disposición del defensor toda la documentación que hubiere acompañado la solicitud formal de extradición, pudiendo disponer la prórroga de la audiencia por hasta veinticuatro horas para que el defensor y la persona requerida puedan examinar los fundamentos de la solicitud.

344.4 A continuación o retomada la audiencia, el tribunal solicitará a la persona requerida que exprese su consentimiento al pedido de entrega o manifieste su oposición.

344.5 Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite.

344.6 La oposición al pedido de extradición podrá fundarse en las siguientes excepciones, pudiendo el defensor ofrecer prueba:

a) no ser la persona reclamada;

b) vicios de procedimiento o defectos de forma de la solicitud de extradición o de la documentación acompañada;

c) improcedencia del pedido.

344.7 El tribunal dará traslado inmediato de la oposición al abogado del Estado requirente quien la evacuará en la audiencia y podrá ofrecer prueba. Luego, escuchará al Ministerio Público y resolverá en la misma audiencia con arreglo a la ley más favorable para el requerido.

De advertirse defectos formales que se indicarán con precisión, se dispondrá que se subsanen en un plazo que no podrá superar los treinta días contados desde la fecha de la audiencia, la cual se prorrogará al efecto.

344.8 Si no se subsanaren los defectos indicados en el plazo establecido, el tribunal dispondrá el archivo del pedido de extradición y la libertad definitiva del requerido.

344.9 Si el pedido reuniera los requisitos formales necesarios o las deficiencias fueran subsanadas, el juez dispondrá la prisión preventiva de la persona reclamada y el diligenciamiento de la prueba que se hubiera ofrecido, pudiendo rechazar la que considere improcedente e impertinente. El juez podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor de diez días a los efectos de que se complete el diligenciamiento de la prueba pendiente, aplicándose en lo pertinente lo establecido en el Artículo 273 de este Código.

344.10 Previo al dictamen de sentencia se oirá a las partes y al Ministerio Público.

ARTÍCULO 345. (Impugnación).-

345.1 La sentencia definitiva que admita o deniegue la extradición será apelable con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda.

345.2 La resolución del tribunal que homologue el consentimiento del reclamado a la extradición no admite apelación.

ARTÍCULO 346. (Comunicación al Poder Ejecutivo).- La sentencia definitiva ejecutoriada que declara procedente la extradición, será comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo, a fin de que este provea lo necesario para la entrega del reclamado al Estado requirente.

Si en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado requirente no procediere a retirar a la persona reclamada, esta será puesta en libertad definitiva, pudiendo los tribunales nacionales denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

ARTÍCULO 347. (Postergación de la entrega).-

347.1 Si el requerido estuviera sometido a proceso penal en la República, su entrega solo podrá ser diferida hasta la conclusión del mismo o la extinción de la condena cuando la ley reprima el delito atribuido en esa causa con un mínimo de penitenciaría, o cuando estime *prima facie* que la pena a recaer en definitiva tendrá esa naturaleza.

347.2 En los demás casos se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

ARTÍCULO 348. (Cosa juzgada).- Negada la extradición de una persona, la misma no podrá solicitarse nuevamente por el mismo delito, salvo que la negativa se fundara en la insuficiencia o falta de documentación.

ARTÍCULO 349. (Principio de especialidad).- La persona extraditada no podrá ser juzgada, ni condenada, ni cumplir pena en el Estado requirente, por otro u otros delitos cometidos con anterioridad al pedido de extradición y no comprendidos en este.

ARTÍCULO 350. (Descuento del tiempo de privación de libertad).- El tiempo que la persona reclamada haya permanecido detenida en la República, deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva del Estado requirente.

TÍTULO II

DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 351. (Concepto).- La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana.

ARTÍCULO 352. (Casos de suspensión de garantías).- Cuando las situaciones previstas en el Artículo anterior se hubieren producido por efecto de la adopción de medidas prontas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 17 del Artículo 168 de la Constitución de la República, procederá también la acción de habeas corpus. En este caso, ella estará restringida a la comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales formales, anuencia o comunicación a la Asamblea General o Comisión Permanente en su caso, control del trato, lugar y condiciones de la reclusión o traslado y de la efectividad de la opción por salir del país, cuando proceda.

ARTÍCULO 353. (Legitimación).-

353.1 Esta acción puede ser deducida por el propio interesado, por el Ministerio Público, por cualquier persona y aun promoverse de oficio.

353.2 La autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en estos procedimientos, sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus superiores y su derecho de patrocinio letrado.

ARTÍCULO 354. (Competencia).-

354.1 Conocerá de esta acción el juez letrado con competencia en materia penal de turno del lugar de los hechos aducidos y si ello no fuere fácilmente determinable, cualquier juez letrado con competencia en materia penal.

354.2 En este proceso están vedadas la excepción y la declinatoria de competencia y el tribunal actuante solo cederá ante el que esté conociendo en procedimientos relativos al sujeto involucrado que sea competente según las reglas generales.

354.3 La actuación del juez en este proceso no produce prevención.

354.4 Cuando se trate de denuncia de torturas o malos tratos a personas privadas de libertad que estén a disposición de algún juez, este será el único competente.

354.5 Si el sujeto involucrado es menor de dieciocho años, conocerá la Justicia de Adolescentes.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 355. (Demanda).-

355.1 La demanda de habeas corpus podrá formularse sin necesidad de patrocinio letrado, por escrito o verbalmente, labrándose acta en este último caso y deberá en lo posible, individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, establecer una relación sucinta de los hechos relevantes, indicar lugar de detención y funcionario responsable si se supiere su identidad y proponer los medios de prueba de que se disponga. Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o penal, con relación al mismo sujeto.

355.2 La Suprema Corte de Justicia, determinará el lugar de presentación de la demanda en los días y horas inhábiles.

ARTÍCULO 356. (Trámite).-

356.1 Recibida la demanda, el tribunal ordenará sin dilación que la autoridad aprehensora o a la que son atribuidos otros actos denunciados, informe sobre los hechos y explique y justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación, con remisión de testimonio de todas las actuaciones.

356.2 Según los casos, el tribunal podrá constituirse para inspeccionar las dependencias administrativas referidas, ordenar que la autoridad requerida presente ante él al detenido e interrogar directamente a la persona en cuyo amparo personal se actúa. Asimismo podrá disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, las que podrá asumir en audiencia con citación del Ministerio Público, de la autoridad requerida y del promotor del procedimiento.

356.3 Toda la actuación del tribunal será cumplida en los lapsos más breves que sea posible, con habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles que se requieran, hasta la sentencia.

356.4 Si las alternativas del procedimiento lo requieren, el tribunal proveerá de defensor público a la persona en cuyo favor se actúa.

ARTÍCULO 357. (Sentencia).- Concluido el procedimiento el juez dictará sentencia que deberá pronunciarse en audiencia si la hubiera, o dentro de las veinticuatro horas de completados los informes y eventuales probanzas.

LIBRO V

MEDIOS IMPUGNATIVOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 358. Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 359. (Enunciación y remisión).-

359.1 Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, queja por denegación de apelación o de casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad.

359.2 También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad conforme a lo establecido en este Código.

359.3 Serán aplicables al proceso penal las disposiciones contenidas en el Libro I, Título VI, Capítulo

VII del Código General del Proceso sobre "Medios de impugnación de las resoluciones judiciales", con las puntualizaciones, modificaciones y exclusiones que se establecen en el presente Título.

ARTÍCULO 360. (Legitimación para impugnar).-

360.1 Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, el fiscal y el defensor del imputado.

360.2 El imputado también puede interponer los recursos de apelación y casación contra la sentencia definitiva, con asistencia letrada.

360.3 La víctima y los terceros que comparezcan en el proceso solo tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente.

CAPÍTULO I

RECURSO DE APELACIÓN

ARTÍCULO 361. (Efectos de la apelación de la sentencia definitiva).- La apelación de la sentencia definitiva suspende su ejecución. No obstante, en caso de apelación de sentencia absolutoria se decretará la libertad provisional del imputado.

ARTÍCULO 362. (Efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias).- El recurso de apelación de sentencia interlocutoria se admite:

362.1 Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal *a quo* se suspende desde que quede firme la providencia que concede el recurso, y hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior.

No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada.

362.2 Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia que concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior. El tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de las cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal.

Cuando resuelva la suspensión, lo comunicará de inmediato al tribunal inferior.

362.3 Con efecto diferido en los casos expresamente establecidos por este Código.

ARTÍCULO 363. (Procedencia de la apelación suspensiva y no suspensiva).- La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación.

En todos los demás casos, la apelación de interlocutorias no tendrá efecto suspensivo, salvo que una disposición de este Código en forma expresa disponga lo contrario.

ARTÍCULO 364. (Resolución del tribunal inferior).-

364.1 Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el tribunal la admitirá si fuere procedente y expresará el efecto con que la admite.

364.2 Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá interponer el recurso de queja pertinente.

ARTÍCULO 365. (Exclusiones).- No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales.

CAPÍTULO II

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA

ARTÍCULO 366. (Remisión).- Se aplicarán al proceso penal en lo pertinente lo dispuesto en los Artículos 116, 257, 259 y 344 del Código General del Proceso.

ARTÍCULO 367. (Prueba en segunda instancia).-

367.1 Las partes podrán ofrecer nuevos elementos probatorios en los respectivos escritos de interposición y contestación a la apelación, sin las limitaciones establecidas en el Artículo 253.2 del Código General del Proceso, los que podrán ser ordenados por el tribunal de alzada para ser diligenciados en la audiencia.

367.2 De admitirse la prueba, el tribunal dispondrá su recepción en la audiencia convocada, la que se diligenciará conforme a las disposiciones de este Código.

367.3 La víctima podrá comparecer con asistencia letrada en las audiencias que se celebren en segunda instancia.

CAPÍTULO III

RECURSO DE CASACIÓN

ARTÍCULO 368. (Procedencia).- El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, sean definitivas o interlocutorias, que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso.

ARTÍCULO 369. (Remisión y particularidades).- Con respecto al recurso de casación en materia penal se aplicarán en lo pertinente, las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo VII, Sección VI del Código General del Proceso, con las siguientes precisiones y modificaciones.

369.1 El imputado podrá interponer el recurso por sí, en forma escrita y fundada, en cuyo caso será indispensable la asistencia letrada.

369.2 La interposición del recurso de casación tiene efecto suspensivo hasta la resolución definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 124 de este Código.

369.3 Cuando se dictare sentencia sobre el fondo regirá lo establecido en los Artículos 121 y 122 de este Código.

369.4 Tratándose de causa cuya primera instancia se hubiera cumplido íntegramente ante Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, tendrán legitimación para interponer el recurso de casación el Fiscal Letrado Departamental y el defensor público en su caso.

A tales efectos, deberá notificarse la sentencia de segunda instancia al Fiscal Letrado Departamental y al defensor público.

CAPÍTULO IV

RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 370. (Procedencia).- El recurso de revisión procede en todo tiempo y solamente a favor del condenado, contra las sentencias condenatorias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzgada, dictadas por cualquier tribunal.

ARTÍCULO 371. (Causales).- Procede la revisión exclusivamente en las causales siguientes:

a) si los hechos establecidos como fundamentos de la condena, resultan inconciliables con los que fundamentan otra sentencia penal ejecutoriada;

b) si después de la condena sobrevienen nuevos elementos de prueba o circunstancias que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió o que concurrieron causas obstativas de la responsabilidad penal;

c) si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley penal como delito. En tal supuesto, la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle extinguida o no pueda proseguir, en cuyos casos se podrán emplear otros medios probatorios;

d) si corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.

ARTÍCULO 372. (Legitimación activa).-

372.1 Pueden interponer el recurso de revisión:

a) el condenado por sí o por apoderado con facultades expresas y en caso de incapacidad su representante legal;

b) cualquiera de los sucesores a título universal del condenado, o su cónyuge supérstite;

c) el Ministerio Público y el último defensor en la causa.

372.2 La muerte o incapacidad mental del condenado no impedirá que se deduzca el recurso para rehabilitarlo socialmente.

ARTÍCULO 373. (Interposición del recurso).- El recurso de revisión se deducirá ante la Suprema Corte de Justicia en escrito que deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, la individualización de la causa anterior, la concreta referencia de los hechos, la proposición de las pruebas respectivas y la mención de las disposiciones legales en que se funde.

ARTÍCULO 374. (Trámite del recurso).- Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia ordenará que se eleve el expediente y lo sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

ARTÍCULO 375. (Facultad de suspensión de la ejecución).- La Suprema Corte de Justicia podrá en cualquier momento, suspender la ejecución de la sentencia recurrida si en apreciación primaria considerare fundado el recurso. En este último caso, podrá disponer la prestación de garantías.

ARTÍCULO 376. (Efectos de la sentencia).-

376.1 Si estimare fundada la revisión, la Suprema Corte de Justicia anulará la sentencia impugnada y pronunciará directamente la sentencia definitiva que corresponda o mandará que se inicie un nuevo proceso por ante el tribunal competente, remitiendo la causa al Ministerio Público.

376.2 En ningún caso podrá recaer condena más severa que la revisada.

ARTÍCULO 377. (Nuevo proceso).- Si se iniciara un nuevo proceso no podrán modificarse en perjuicio del condenado las conclusiones de la sentencia en revisión y estarán impedidos los magistrados que conocieron en el anterior.

TÍTULO II

DE LAS NULIDADES

ARTÍCULO 378. (Reglas generales y procedimiento).- Son aplicables al proceso penal las reglas y procedimientos establecidos en los Artículos 110 a 116 del Código General del Proceso en lo pertinente, con las variantes que resultan de los Artículos siguientes.

ARTÍCULO 379. (Causales de nulidad insubsanable).- Son causales de nulidad insubsanable:

a) la infracción al principio del *non bis in idem*;

b) la falta de jurisdicción o la falta de competencia por razón de la materia o del grado, con la excepción y previsiones establecidas en el Artículo 38 de este Código;

c) la infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, intervención, asistencia y representación del imputado;

d) la infracción a las disposiciones que establecen la intervención necesaria del Ministerio Público.

ARTÍCULO 380. (Declaración de nulidad insubsanable).-

380.1 La nulidad insubsanable debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso o en vía de revisión, con citación de las partes por seis días. En caso de oposición, se seguirá la vía incidental.

380.2 Las partes también podrán promover dicha declaración por vía incidental.

380.3 La resolución que declara la nulidad será apelable con efecto suspensivo.

ARTÍCULO 381. (Validez remanente de las actuaciones de prueba).- Cuando se hubieren practicado actuaciones judiciales sin advertir la falta de algún presupuesto para el ejercicio de la acción penal, la nulidad que sea declarada al respecto no alcanzará a las diligencias probatorias ejecutadas con las garantías debidas, las que mantendrán su validez en el caso de ser removido el impedimento.

TÍTULO III

DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CÓDIGO

Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 382. (Derogación).-

382.1 Deróganse a partir de la vigencia de este Código, el Código del Proceso Penal (Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980), sus modificaciones y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente.

382.2 No obstante lo establecido en el inciso anterior, las referidas disposiciones continuarán aplicándose a los asuntos en trámite judicial hasta la sentencia definitiva de primera instancia, inclusive.

ARTÍCULO 383. (Vigencia).- El presente Código entrará en vigencia el 1º de febrero de 2017.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de setiembre de 2014.

DANILO ASTORI

Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI

Secretario".

Anexo I al
Rep. N° 1431

"Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

El proyecto de ley del Código del Proceso Penal que se pone en consideración de la Cámara de Representantes ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en el momento de la votación e integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

I) Necesidad de la reforma.

Sin excepción alguna, puede afirmarse que un Código con las características del que se propone es imprescindible para el sistema jurídico uruguayo. Nuestro país padece un procedimiento penal, hijo dilecto de la dictadura. El Código del Proceso Penal vigente no es entendido por la población; está impregnado de secretismo; los distintos actores se confunden frecuentemente en sus roles y, fundamentalmente, no es digno de un país democrático. Como señaló el doctor Gonzalo Fernández, el proceso penal debe ser "uno contra uno y no dos contra uno", aludiendo al hecho de que en el procedimiento actual, parecería, dada la confusión de roles referida, que el enfrentamiento es Juez y Fiscal versus Abogado defensor.

Naturalmente que esta no es la única crítica que se puede realizar al Código vigente. Es notoria la ignorancia casi absoluta que -respecto al denunciante- este Código tiene.

Como señala la exposición de motivos del proyecto de Código del Proceso Penal enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo, "Si construir y fortalecer un sistema democrático implica necesariamente preservar y garantizar ámbitos de libertad social e individual, es necesario consolidar los mecanismos que aseguren la responsabilidad consiguiente. El principal camino para asegurar la eficiencia del derecho de todos y cada uno, es contar con una administración de justicia moderna, transparente, eficiente, segura, independiente y al alcance de todos los sectores sociales".

Los integrantes de esta Asesora entendemos que el Código proyectado es moderno y será eficiente. Por eso recomendamos su aprobación.

II) Principios orientadores del Código propuesto.

El nuevo Código del Proceso Penal recoge los principios unánimemente admitidos por la doctrina, a saber:

- Debido proceso legal;

- Reconocimiento de la dignidad humana;

- Inocencia;

- Non bis in ídem;

- Oficialidad;

- Defensa técnica;

- Publicidad;

- Duración razonable;

- Gratuidad;

- Irretroactividad de la ley más severa. Retroactividad de la más benigna.

III) El artículo 22 proyectado.

Este artículo resuelve definitivamente el concepto de delito militar, estableciendo que se entenderá por tal "aquel que vulnera exclusivamente normas contenidas en el ordenamiento penal militar". Asimismo se dispone que "los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común".

IV) Los sujetos procesales.

1) La justicia penal será impartida exclusivamente por los Jueces y Tribunales de la República, en el marco de sus competencias, siendo sus funciones indelegables.

2) El Ministerio Público es el titular de la acción penal. La Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval serán, en los respectivos ámbitos de su competencia, auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación.

3) El imputado es toda persona a la que el Ministerio Público atribuya participación en la comisión de un delito.

4) El defensor tiene derecho de conocer todas las actuaciones que se realizaren en el proceso desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto al Ministerio Público.

5) La víctima, vale decir la persona ofendida por el delito, podrá participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que le otorga el artículo 81.

V) El proceso.

El trámite procesal podrá ser ordinario o extraordinario. Este último procede en los casos en que el Ministerio Público entiende suficiente la prueba reunida para fundar la acusación.

En este último caso, "la acusación y la defensa se formularán verbalmente en audiencia luego del diligenciamiento de la prueba". La sentencia se dictará en la misma audiencia pero, en los casos complejos, el Tribunal podrá prorrogar la audiencia hasta por diez días a esos efectos.

VI) En definitiva:

El proyecto de ley que se pone en consideración de la Cámara de Representantes, significa un avance sustantivo en materia procesal penal que otorgará un instrumento eficaz a nuestro sistema judicial.

En consecuencia, esta Asesora aconseja a la Cámara de Representantes su aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2014

JORGE ORRICO, Miembro Informante, EDUARDO BRENTA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, FITZGERALD CANTERO PIALI, GUSTAVO CERSÓSIMO, FELIPE MICHELINI, GONZALO MUJICA.

——Léase el proyecto.

En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: uno de los últimos actos -que quiso ser grandioso- de la dictadura que padecimos entre 1973 y 1985 fue la aprobación del Código del Proceso Penal que hoy nos rige. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que es indigno de un país democrático que respete las libertades de la gente, que respete al individuo y, sobre todo, que respete algunos principios que deberían ser universales como los de inocencia, de inmediatez, de publicidad y tantos otros que hacen a la vida democrática de los pueblos. Este proyecto viene a solucionar este problema.

Quiero hacer una breve descripción de algunas cosas, que me parecen muy importantes y han pasado desde que se instauró la democracia en el Uruguay. Hasta ese momento, todos o casi todos los Códigos que se habían aprobado en el Uruguay habían sido aprobados por dictaduras.

Luego de 1985, en la primera Legislatura, se aprobó el Código General del Proceso; antes teníamos un proceso civil que era realmente lamentable y hoy tenemos un proceso civil que es modelo para América Latina. En esa misma Legislatura se modificaron más de 70 artículos de ese Código General del Proceso que hoy sirve de modelo en nuestros países hermanos. También se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y se aprobaron una serie de normas que no son Códigos, pero son muy parecidas.

Ahora estamos con este Código del Proceso Penal que responde a una necesidad realmente muy importante de este país.

Con respecto al Código que nos rige, quiero decir que es raro encontrar tantas unanimidades en cuanto a la crítica severa a sus disposiciones. Así, por ejemplo, es importante señalar la opinión de la doctora Beatriz Scapusio, quien dice que el Código actual consagra claramente una instrucción inquisitiva, caracterizada por el presumario estrictamente reservado, la prisión preventiva como regla general, el valor indiciario de la confesión formulada ante la autoridad policial, la incomunicación de la persona privada de su libertad, la falta de información al detenido sobre sus derechos y el reiterado olvido de la víctima. Creo que este es un elemento muy a tener en cuenta: el reiterado olvido de la víctima.

Nuestro régimen vigente se ha criticado desde distintos ámbitos. Así, el doctor Álvaro Garcé, hasta hace poco Comisionado Parlamentario, decía: "Es más fácil encarcelar que comprender. Nosotros no podemos seguir recorriendo ilimitadamente esta opción. Y en nuestro caso tendríamos que considerar, ¿cuánta cárcel resiste el estado de derecho? Yo creo que para resolver esta contradicción es indispensable la reforma del proceso penal".

Desde el punto de vista del Ministerio Público también hay reservas o acusaciones muy severas respecto de este Código. Así se dice: "Es el mismo Juez que desarrolla la investigación, que descubre los medios, que los incorpora al proceso, que le da todo servido al Fiscal. El Fiscal formalmente acusa en base a un contenido que le han derivado y es el mismo Juez (el que procesó) el que dicta sentencia (condenatoria): esa es la frutilla de la torta. Esta es la respuesta

a mi juicio de por qué no hay sentencias absolutorias en Uruguay". ¿Cómo va a haber sentencias absolutorias si el tipo que procesó con prisión es el mismo que después debe condenar o absolver? Si absuelve estaría reconociendo su propio error; ¡es humano esto!

Desde otros puntos de vista, hablando de la inocencia y del principio de imparcialidad, el doctor Bernardino Real, quien fuera Presidente del Colegio de Abogados y abogado defensor en materia penal de mucho fuste, decía: "¿Cómo es posible pretender que luego de reunir la prueba de cargo, cargando sobre sí la iniciativa de diligenciar aquellas probanzas que le han permitido disponer el comienzo del juicio y la prisión preventiva del imputado, el juez disponga de la libertad e independencia suficiente como para evaluar su propia obra y juzgar sin prejuicios la inocencia o culpabilidad del encausado?".

Podríamos seguir mucho tiempo más con comentarios sobre este tema, pero me parece que esto ha sido suficientemente ilustrativo, desde los distintos puntos de vista con los que se puede encarar esto -el de un defensor, el del Ministerio Público, el de un Comisionado Parlamentario o el de la doctrina-, y todos estamos de acuerdo en que este proceso penal uruguayo es arcaico, absolutamente disfuncional y, sobre todo, no resiste el análisis de lo que son y deben ser los derechos humanos fundamentales de l individuo.

El Código del Proceso Penal que tenemos confunde en una misma persona varias actividades que deberían ser claramente diferenciadas. Los abogados defensores sabemos muy bien que, frecuentemente, cuando llegamos al Juzgado -ni siquiera tuvimos contacto con el defendido-, encontramos al Fiscal en el despacho del Juez. Cuando el Fiscal sale del despacho del Juez está todo cocinado. Entonces, uno va a la audiencia con su defendido, el Fiscal pide, el Juez acepta, y se termina la historia. Y así privamos de libertad a un tipo que nunca tuvo oportunidad de hablar con su abogado antes de esta instancia. Cuando uno plantea esto, la gente sabe de qué estamos hablando. Por suerte, la enorme mayoría de las personas que pasan por la puerta de esta Casa nunca estuvieron en un Juzgado, pero cuando les toca se dan cuenta de la barbaridad existente; esto es un verdadero disparate.

El Código que se pone a consideración de la Cámara está imbuido de principios con los que está de acuerdo toda la doctrina y la jurisprudencia, no solo del Uruguay sino de todos los países democráticos. Se apela al debido proceso legal para lo cual, como veníamos exponiendo, es fundamental que cada parte en el juicio tenga su papel y esté claramente determinado. También se busca el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de inocencia, "non bis in ídem".

(Murmullos.- Campana de orden)

——Se establece el principio de oficialidad. Es decir que el proceso penal es una cuestión del Estado. Con el principio de la defensa técnica se pretende que la gente sea defendida por alguien que técnicamente conozca de qué se está hablando. También se plantean el principio de publicidad y de contradicción, y el principio acusatorio. No se podrá iniciar el proceso ni imponer prisión preventiva o similares si no media petición del Ministerio Público. Además, se establece la duración razonable del proceso, la gratuidad, la inmediación, la concentración, la dirección y el impulso procesal en igualdad de partes, la irretroactividad de la ley más severa y la retroactividad de la ley más benigna.

Asimismo, en este Código aparecen una serie de sujetos procesales que están encabezados por los tribunales que, de acuerdo con las leyes y la Constitución de la República, tengan competencia penal en la forma en que la ley, la Constitución o los turnos de la Suprema Corte de Justicia lo establezca. Entonces, la Justicia Penal será impartida por los diversos tribunales en el marco de la competencia atribuida legalmente.

El artículo 22 de este Código resuelve -espero que definitivamente- algo que, en alguna época que no quisiera volver a vivir, se discutió mucho. Me refiero al concepto de delito militar. Había quienes daban una interpretación absolutamente amplia del delito militar. Ya los trabajos de Martínez Moreno -uno de los mejores abogados y novelistas que tuvo este país- establecían con claridad qué debía ser delito militar. Delito militar es únicamente aquel cometido por un militar que viola normas de las disposiciones del Código Penal Militar en tiempos de paz. Solo pueden ser cometidos por un militar; si no es así, no hay delito militar. El artículo 22 resuelve esta situación diciendo: "Se entiende por delito militar aquel que vulnera exclusivamente, normas contenidas en el ordenamiento penal militar". Luego dice: "Los delitos comunes co-

metidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común". Este tema es muy importante desde el punto de vista doctrinario. Creo que damos vuelta una página y, nuevamente, nos jugamos como país al reconocer valores democráticos que deben imbuir este tipo de leyes.

Por otra parte, aparece como un elemento principal, como un sujeto procesal fundamental, el Ministerio Público. En este sistema, el Ministerio Público es fundamental, porque estamos ante un sistema acusatorio oral y público. En consecuencia, el Ministerio Público es el que tiene la acción penal. Si el Ministerio Público no actúa, no hay juicio. Por lo menos, en principio, eso es así, más allá de algunas potestades que tiene la víctima, que ya veremos oportunamente.

En el nuevo proceso que se pretende instaurar, el Ministerio Público tiene atribuciones de todo tipo. La primera de ellas es la de decidir iniciar, o no, una investigación; es lo que hoy llamamos presumario. El Ministerio Público dirige la investigación de cuanto crimen, delito o cuestión tenga noticia, ya sea porque alguien se lo aproxima o porque se entera -es decir, tiene la potestad de decidir si se iniciará el proceso, salvo en el caso de los delitos que se persiguen a instancia de parte que, como es sabido, en el derecho uruguayo son muy pocos-; también puede proceder al archivo provisional o definitivo de una investigación. Además, puede pedir la declaración de inocencia, el sobreseimiento de quien en ese momento esté encausado o imputado, o puede pedir una pena para él. Inclusive, puede establecer que en determinados casos se apele al procedimiento extraordinario más abreviado a efectos de dilucidar la situación.

Asimismo, en el proceso penal aparece la figura del imputado. En realidad, no es más que aquel sujeto acusado por un Fiscal, autoridad administrativa o cualquier autoridad competente como responsable de la comisión de un delito. La diferencia es que hay una enumeración muy grande, no taxativa, de los derechos y garantías del imputado. De estas, la primera es la de respetar sus derechos humanos. Ningún imputado puede ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes o similares. Además, el individuo tiene derecho a designar libremente a su abogado defensor; si no lo hace, se le designará un defensor público. También se le debe informar de forma clara y específica la razón por la cual está siendo acusado. Él puede solicitar al Fiscal las diligencias que considere pertinentes a efectos de probar su inocencia. Puede conocer el contenido de la investigación, solicitar audiencias, pedir el sobreseimiento de la causa y guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad. Todas estas son cuestiones que parecen elementales.

Una última cuestión también muy importante -aunque reitero que esto no es taxativo- refiere a no ser juzgado en ausencia. En el Uruguay eso es de naturaleza constitucional: no se puede juzgar en ausencia.

Otro elemento clave de este proceso, que aparece totalmente determinado, es el papel que le corresponde a la defensa. El defensor va a actuar en nombre de su defendido y tendrá todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, salvo aquellos casos en que la ley expresamente diga que son exclusivos del imputado, que son muy pocos. La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley explicita que debe estar presente implica la nulidad de todo y este también es un aspecto muy importante dentro del proceso penal.

Por otra parte, no se permitirá que el imputado se defienda a sí mismo -este también es un aspecto clave-, salvo que sea abogado. Yo voy a aprobar esto -como es obvio-, pero quiero decir que filosóficamente no estoy de acuerdo. Creo que nadie debería defenderse a sí mismo, por más abogado que sea, porque cuando los abogados nos defendemos a nosotros mismos caemos en un estado de sopor, de indignación o de lo que fuera, que no es bueno. El abogado debe ser una figura que asista a su defendido en la forma más técnica posible, sin que esto implique renunciar a los sentimientos que todos tenemos -no conozco ningún abogado que no haya llorado alguna vez ante un caso determinado-, y mantener cierta distancia con la situación que le permita actuar en consecuencia y con la frialdad que las circunstancias requieren. De todas maneras, esto está así, ha sido aprobado por la unanimidad del Senado y no voy a ser yo quien destruya un proyecto de esta naturaleza y entidad, pero es mi deber intelectual y político hacer esta consideración.

También aparece en el Código -esta es una novedad muy grande- una serie de disposiciones con respecto a la víctima. Hasta ahora la víctima prácticamente era ignorada en el Código del Proceso Penal.

El señor Diputado Puig recuerda que cuando discutimos la responsabilidad penal del empleador yo fui uno de quienes más insistió en que también se debía hablar del derecho de la víctima a denunciar, estar presente y ser parte en el juicio. Aquí hemos llegado a una solución que creo que es buena: no es propiamente parte -por lo menos no es parte obligatoria- pero sí se puede integrar. La víctima es la que está ofendida por la comisión del delito, la que está ofendida en sus bienes, en su persona, en su honor o en los distintos bienes jurídicos que la norma penal tutela. La víctima podrá participar en el proceso y podrá hacerlo asistida de su correspondiente abogado desde que empiezan las actuaciones; podrá pedir prueba, si carece de fortuna para pagarse un abogado podrá pedir que se le nombre un defensor de oficio y tendrá derechos y facultades que están enumerados y que hasta ahora no existían. Por ejemplo, podrá tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones, intervenir en el proceso y ser oído en este, proponer pruebas, solicitar medidas de protección frente a amenazas potenciales o efectivas que puedan hacerse de parte del encausado o de quien fuera, solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del encausado cuando esto corresponda, y oponerse -observen qué importante- ante el Tribunal a la decisión del Fiscal de clausurar los procedimientos; esa es una atribución que tendrá la víctima y que hasta ahora no existía. Estábamos en un país en el cual el único papel que tenía la víctima era haber sido ofendida por la comisión de un delito; no había ningún otro papel en el Código del Proceso Penal que aprobara oportunamente la dictadura. Por lo tanto, creo que este también es un avance gigante en un Código del Proceso Penal digno de un país que defiende los valores de la democracia, de la libertad y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

El proceso se da en forma oral y en una serie de audiencias, por lo que hay varias disposiciones muy importantes. Las audiencias deben ser presididas por el Juez y si este no está el procedimiento es nulo. Se acabó aquello de que todos los que somos abogados conocemos que el funcionario toma las declaraciones, después se las lleva al Juez y sobre eso frecuentemente se decide, o algo por el estilo. De esta manera debe estar el Juez presente. La asistencia obligatoria a la audiencia es del Juez, del Ministerio Público y del imputado y hay una asistencia eventual o facultativa -si se quiere- de la víctima.

Las audiencias son públicas salvo las excepciones que establece el artículo 135 del proyecto que refieren a situaciones que pueden poner en peligro a las víctimas, casos en que se puede frustrar la prueba, se pueden destruir pruebas o situaciones similares que tendrá que considerar el Juez, quien dirige el proceso, en determinado momento. Contra la decisión del Tribunal con respecto a una serie medidas -como que se establezca la publicidad porque se puede comprometer un secreto protegido por la ley- existe el recurso de reposición.

La prueba aparece legislada en los artículos 146 y siguientes. Hay una disposición muy importante relativa a la prisión preventiva, que es la que aparece en los artículos 223 y siguientes, que quiero mencionar. En primer lugar, en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva. En segundo término, ¿cuándo cabe la aplicación de la prisión preventiva? Se expresa en el artículo 224: "[...] si hubiera elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad". Y en el artículo 25 figura: "[...] cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizarla mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios, o cuando exista la presunción de que podrá inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros, a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera desleal o reticente".

La prueba aparece en el artículo 146, que se refiere a la confesión, y en los siguientes. En este sentido, también hay un hecho muy importante, porque hasta ahora la confesión en sede policial constituye un indicio; eso es lo que se ha considerado en Uruguay. Sin embargo, el artículo 146.2 establece: "Para que la confesión tenga valor probatorio es preciso que el imputado, asistido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos de convicción la corroboren".

Junto a la confesión aparece el testimonio, el careo, el reconocimiento, la prueba documental, la prueba por informe, los indicios, la inspección judicial, la videovigilancia. Se encaran temas como la intervención de comunicaciones telefónicas y la incautación de documentos. En fin; como es sabido en materia de pruebas, Uruguay no tiene una valoración por lo cual

una valga más que otra. En realidad, prueba es todo elemento de convicción que sirva al Juez para llegar a la conclusión de que una persona es inocente o culpable. Eso es una prueba. Todas las pruebas son válidas y todas dependen del grado de convicción que provoquen en la persona que va a juzgar.

Como se dijo, el procedimiento es oral y público y aparece a partir de los artículos 256 y siguientes. La investigación de un hecho o el procedimiento se empieza a disparar cuando existe flagrancia delictual por denuncia o instancia, ya sea que la denuncia haya sido formulada por iniciativa del Ministerio Público o se haya tenido conocimiento de un hecho con apariencia delictiva por cualquier medio.

La indagatoria preliminar está a cargo del Fiscal —esto también es absolutamente nuevo—, que es el "jefe" —entre comillas— de toda la investigación que se realiza, hasta que se llegue a iniciar un proceso que podrá ser ordinario o extraordinario. Es decir que hay una indagatoria preliminar, constituida por todas las actuaciones que se cumplen ante la noticia de un presunto delito.

La investigación preliminar no podrá extenderse más de un año, contado desde su inicio. Concluida esta, y si hay mérito, el Fiscal formalizará la investigación, solicitando al Juez la convocatoria a audiencia preliminar, establecida en el artículo 266.

En la audiencia preliminar, la actitud del Fiscal es la que va a formalizar la investigación. En esa instancia, el Fiscal decidirá si va a seguir el procedimiento, a los efectos de declarar culpable o inocente a la persona que está siendo acusada.

Concluida la indagatoria preliminar, si a juicio del Ministerio Público resultare que se ha cometido un delito y que están identificados sus autores, presuntos autores, coautores o cómplices, se formalizará la investigación, solicitando al Juez competente que convoque a una audiencia. Naturalmente, la solicitud se hará por escrito, y deberá tener la individualización del imputado y su defensor, la circunstancia de hecho, las normas jurídicas aplicables, los medios de prueba a emplear y las medidas cautelares que el Fiscal entienda pertinentes. Esos son los requisitos que tiene el Fiscal para realizar su acusación. Luego de realizada la audiencia, se irá a una audiencia complementaria, para el caso de que la prueba no se haya podido diligenciar en su totalidad en la preliminar.

Finalmente, existe la posibilidad de un procedimiento extraordinario que tendrá lugar cuando así lo haya pedido el Fiscal y por resolución judicial. El procedimiento extraordinario implica un proceso abreviado. Es lo que se da tantas veces, por ejemplo, en el caso de la rapiña, cuando está identificado el autor, ya declararon todos los testigos, y hay prueba pericial que demuestra quién es el responsable. En ese caso, se comprime el procedimiento, a los efectos de que sea mucho más rápido.

En definitiva, creo que esto debería ser un orgullo para todos los legisladores, porque en un Estado donde la democracia funciona a pleno, vamos a aprobar un nuevo Código del Proceso Penal. Se trata de un avance muy grande. Este Código es moderno y ágil; la gente lo va a entender, porque las audiencias van a ser públicas y, en consecuencia, todo el mundo va a poder ver qué es lo que hace el Juez, el Fiscal, el defensor y el imputado y, además, la víctima va a participar en el proceso y, de alguna manera, defender sus derechos que hoy quedan en manos de un tercero que, evidentemente, no siempre están bien defendidos.

Este proyecto ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y, por lo tanto, insto a la Cámara a aprobar este Código que, por otra parte, entrará en vigencia recién en 2015, lo que es muy razonable. Este es un cambio auténticamente revolucionario, si por revolución se entiende el cambio de una estructura por otra. Pasamos de un procedimiento escrito, lento, burocrático a un procedimiento absolutamente ágil, con la presencia visible de todas las partes. Para que esto pueda funcionar, es necesario preparar, no solamente a los recursos humanos —Ministerio Público, Jueces, funcionarios administrativos— sino también —y no menos importante— a todos quienes por una u otra razón van a actuar en este proceso. Asimismo, hay que prestar debida atención a todos los locales en los que este proceso se va a desarrollar, porque se requiere de una infraestructura de la que hoy no disponemos.

En consecuencia, pido que se apruebe este proyecto tal cual viene del Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

9.- Sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Benna).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Minetti.

(Se lee:)

"Mociono para que se convoque a sesión extraordinaria para el día 17 de diciembre de 2014, a la hora 11 a fin de tratar los siguientes proyectos: 1. Ex trabajadores de la empresa Pluna (Prórroga de subsidio por desempleo). (Carp. 3006/2014), (Rep. 1449/2012).- 2. Seguro para el control de enfermedades prevalentes en bovinos. (Carp. 3011/2014), (Rep. 1454/2014).- 3. Sistema Nacional de Residencias Médicas. (Modificación). (Carp. 2953/2014). (Rep. 1425). 4. Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y la extensión y prórroga de los créditos de IVA vigentes. (Carp. 3012/2014)".

——En discusión.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: ¿Se puede volver a leer el orden del día de esa sesión extraordinaria?

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Léase nuevamente.

(Se vuelve a leer)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

10.- Código del Proceso Penal. (Aprobación).

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Cersósimo, quien me hace señas de que va a ser corto, pero yo, parafraseando al ex Vicepresidente de la República, don Enrique Tarigo, cuando le pidió la palabra un ex Senador ya fallecido, turbado por tantas horas de debate, le digo: ¡No le creo! Pero vamos a ver qué nos dice el señor Diputado Cersósimo.

SEÑOR CERSÓSIMO.- Señor Presidente: lo primero que le digo es que no voy a ser corto; voy a ser breve.

(Hilaridad)

——Coincido con el Diputado Orrico en la mayor parte de las consideraciones que hizo con respecto al proyecto, lo que no es frecuente en nuestras discusiones de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

Creí entender que expresó que la vigencia del Código será a partir del año 2015 y, en realidad —obviamente, habrá sido un descuido involuntario—, de acuerdo con el artículo 383 del proyecto, la vigencia será a partir del 1º de febrero de 2017. Precisamente por eso, es muy conveniente y oportuna la sanción y la aprobación en este momento, porque este proyecto requiere de previsiones presupuestales importantes para la infraestructura y para la designación de nuevos Jueces y Fiscales, ya que sé que va a requerir de un apoyo significativo por parte de la próxima Administración. En ese sentido, dadas todas las bondades que se han consagrado en este proyecto, esperamos que se contemple al Poder Judicial y a los Fiscales en la forma adecuada, haciendo honor a estas normas que estamos consagrando hoy, porque de lo contrario va a ser difícil que tengan aplicación.

Me parece importante señalar que en la redacción de este proyecto intervinieron todos los sectores involucrados. Además de los integrantes del Poder Ejecutivo, que le dieron la redacción en la Comisión, cabe mencionar a los representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía, a los de la Universidad de la República, de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la Asociación de Magistrados Judiciales, de la Asociación de los Defensores de Oficio, del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de la Asociación de Actuarios Judiciales y del Ministerio de Economía y Finanzas. Precisamente, su participación se debe a esa necesidad imperiosa e imprescindible de tener previsiones presupuestales importantes para que todo lo que hemos aprobado pueda llevarse adelante.

Indudablemente, esta es una modificación integral de la legislación procesal penal. Ya había habido actualizaciones a fines de la década del ochenta y en el año 1990. Es importante señalar que aquí se cam-

bia radicalmente con respecto al derecho internacional y al comparado, y se pasa al sistema acusatorio.

También se preservan, de mejor manera, las garantías. Los derechos se determinan con mayor precisión y para la función de los operadores también hay mayores garantías. Mejoran las posibilidades del defensor y, por ende, la consagración y respeto de los derechos humanos en su conjunto. Asimismo, se da una participación trascendente a las víctimas. A nuestro lado está el señor Diputado Cantero Piali, que ha sido redactor de un proyecto de ley en esa materia. Al respecto, quiero decir que hoy se aprobaron algunas de las soluciones de esa iniciativa, y las otras que no habían sido aprobadas en una ley separada, fueron incorporadas al proyecto. Con ello hay un avance importante en materia del estatuto de las víctimas de la delincuencia.

Esto es lo que quería decir brevemente. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados y, por nuestra parte, del Partido Colorado, aconsejamos la aprobación de esta iniciativa que es un importante avance en la legislación penal del Uruguay.

Señor Presidente: espero haber cumplido con su carta rogatoria y con la brevedad. Anteriores Presidentes —y el que usted citó— solían escuchar al Diputado que hacía uso de la palabra...

(Diálogos)

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Señor Diputado: usted ha cumplido con su palabra que, honrando su apellido, es lo que corresponde.

11.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 17.827:

Del señor Representante José Andrés Arocena, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Del señor Representante Rodrigo Goñi Romero, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor César Panizza.

Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Gabriel Gianoli.

Del señor Representante Felipe Michelini, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Walter Souto.

Del señor Representante Rodrigo Goñi Romero, por el período comprendido entre los días 16 y 29 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor César Panizza.

Del señor Representante Jorge Gandini, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero.

De la señora Representante Ana Lía Piñeyrúa, por los días 10 y 15 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Andrés Abt.

Del señor Representante Daniel Radío, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Renom.

Del señor Representante Pablo D. Abdala, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Guekdjian.

Del señor Representante Rubén Martínez Huelmo, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Evaristo Coedo.

Del señor Representante Víctor Semproni, por el día 10 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Nelson Alpuy.

Del señor Representante Sergio Mier, por el día 17 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Gabriel Duche.

Del señor Representante Felipe Carballo, por los días 17 y 22 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Saúl Aristimuño.

Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827:

Del señor Representante Richard Sander, por el período comprendido entre los días 15 y 17 de diciembre de 2014, para recorrer, invitado por el señor Intendente de Rivera, diferentes frentes de obras que se están realizando en la Capital y el interior del citado departamento, convocándose al suplente siguiente, señor Ruben Núñez.

Del señor Representante Daniel Peña Fernández, por el período comprendido entre los días 8 y 18 de diciembre de 2014, para participar en su calidad de miembro del Grupo de Amistad Parlamentaria Uruguay-Israel, del 5º Seminario Internacional de Senadores y Parlamentarios de América Latina, a celebrarse en la ciudad de Jerusalém, Israel, convocándose a partir del día 10 de diciembre de 2014 y hasta el día 18 de diciembre de 2014 al suplente siguiente, señor Auro Acosta.

Licencia en misión oficial, literal C) del artículo 1° de la Ley Nº 17.827:

Del señor Representante Germán Cardoso, por el día 10 de diciembre de 2014, para participar de la reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud, del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Schusman.

Del señor Representante Rubén Martínez Huelmo, por el período comprendido entre los días 15 y 18 de diciembre de 2014, para asistir en su calidad de Presidente del Parlamento del Mercosur a la Cumbre del CMC y Cumbre del Mercosur a realizarse en la ciudad de Paraná, República Argentina., convocándose al suplente siguiente, señor Evaristo Coedo.

Visto la solicitud de licencia Del señor Representante Carmelo Vidalín, por el día 10 de diciembre de 2014, ante la denegatoria por esta única vez de los suplentes convocados, y habiendo agotado la nómina de suplentes, ofíciese a la Corte Electoral a sus efectos.

Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 17.827:

De la señora Representante Ivonne Passada, por los días 17 y 22 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Bousses.

Del señor Representante Marcelo Bistolfi Zunini, por los días 17, 22 y 29 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Vela.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por el día 17 de diciembre de 2014, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Márquez.

Del señor Representante Eduardo Brenta, por los días 10 y 17 de diciembre de 2014, convocándose a la suplente siguiente, señora Eleonora Bianchi.

Licencia en misión oficial, literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827:

De la señora Representante Daniela Payssé, por el período comprendido entre los días 16 y 22 de enero de 2015, para participar en la presentación periódica de Informes sobre las medidas legislativas, judiciales y de otra índole que Uruguay haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Convención sobre los derechos del Niño y de sus Protocolos facultativos "relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relativo a la participación de niños en los conflictos armados", a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza, convocándose a la suplente siguiente, señora Eloísa Moreira".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva

autorizar licencia por motivos personales, para el día 10 de diciembre.

Sin más, saluda atentamente,

JOSÉ ANDRÉS AROCENA
Representante por Florida".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Florida, José Andrés Arocena, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 62, del Lema Partido Nacional, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Don Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia, el día 10 del mes en curso, por motivos personales.

Atentamente,

RODRIGO GOÑI ROMERO
Representante por Salto".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que por ésta única vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo que Ud. preside y de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Nacional, Cdor. Rodrigo Goñi.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente,

Gustavo Coronel".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Gustavo Coronel.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Gustavo Coronel.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor César Panizza.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a Ud. licencia por el día 10 de diciembre de 2014, por motivos personales.

Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Al haber sido convocado por el Cuerpo que Usted preside, por ésta única vez declino a la convocatoria por la que fui objeto para el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Raúl Giuria Barbot".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Al haber sido convocado por el Cuerpo que Usted preside, por ésta única vez declino a la convocatoria por la que fui objeto para el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Silvana Olivera".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Raúl Giuria Barbot y Silvana Olivera.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Raúl Giuria Barbot y Silvana Olivera.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Gabriel Gianoli.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Usted se me conceda licencia por motivos personales de acuerdo a la Ley N° 17.827, por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda atentamente,

FELIPE MICHELINI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,

Javier Chá".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,

Antonio Gallicchio".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
Elizabeth Villalba".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
Jorge Caffera".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
María Elena Martínez".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
Roque Ramos".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
Mónica Díaz".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Usted que no acepto por esta única vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Felipe Michelini por el día 10 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente,
Humberto Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Javier Chá, Antonio Gallicchio, Elizabeth Villalba, Jorge A. Caffera Juri, María Elena Martínez, Roque F. Ramos Espíndola, Elizabeth Villalba, Mónica Díaz y Humberto Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Javier Chá, Antonio Gallicchio, Elizabeth Villalba, Jorge A. Caffera Juri, María Elena Martínez, Roque F. Ramos Espíndola, Elizabeth Villalba, Mónica Díaz y Humberto Castro.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Frente Amplio, señor Walter Souto.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Don Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia, desde el día 16 al día 29 del mes en curso, por motivos personales.

Atentamente,

RODRIGO GOÑI ROMERO
Representante por Salto".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo que Ud. preside y de la cual he sido objeto en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Nacional, Cdor. Rodrigo Goñi.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente,

Gustavo Coronel".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 29 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Gustavo Coronel.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Rodrigo Goñi Romero, por el período comprendido entre los días 16 y 29 de diciembre de 2014.

2) Acéptase la denegatoria presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Gustavo Coronel.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor César Panizza.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el inciso 3° del artículo1º de la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda licencia por motivos personales por el día 10 de diciembre de 2014.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida,

JORGE GANDINI
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a Ud. licencia por los días 10 y 15 de los corrientes, por motivos personales. Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

ANA LÍA PIÑEYRÚA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 10 y 15 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ana Lía Piñeyrúa, por los días 10 y 15 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Andrés Abt.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi consideración:

Cúmpleme solicitar a Ud. tenga a bien, poner a consideración del Cuerpo que Ud. preside, concederme el uso de licencia por motivos personales, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por el día 10 de diciembre.

Saludo a Ud. atentamente,

DANIEL RADÍO
Representante por Canelones".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de diciembre de 2014.

Saluda a Ud. atentamente,

Pablo Sosa".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de diciembre de 2014.

Saluda a Ud. atentamente,

Walter A. Lascano".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Aníbal Pereyra

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Ud., mi renuncia, por única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes por el día 10 de diciembre de 2014.

Saluda a Ud. atentamente,

Teresita Luzardo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Pablo Sosa, Walter A. Lascano y Teresita Luzardo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Radío, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Pablo Sosa, Walter A. Lascano y Teresita Luzardo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 909, del Lema Partido Independiente, señor Raúl Renom.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Aníbal Pereyra

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia en el día de la fecha por motivos personales y asimismo pido se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo atentamente,

PABLO ABDALA

Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo D. Abdala, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Guekdjian.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Aníbal Pereyra

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que Usted tan dignamente preside me conceda licencia al amparo

de la Ley N° 17.827, por motivos personales, el día 10 de diciembre de 2014.

Sin más, lo saluda a Usted atentamente,

RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por ésta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Jorge Meroni".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por ésta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Jorge Simón".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Evaristo Coedo.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Sr. Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 10 de diciembre, por motivos personales.

Saluda atentamente,

VÍCTOR SEMPRONI
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, Víctor Semproni, por el día 10 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Vo-

tación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Nelson Alpuy.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley 17.827, solicito al Cuerpo que preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 17 de diciembre de 2014 por motivos personales.

Sin más, lo saluda atentamente,

SERGIO MIER
Representante por Treinta y Tres".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Sergio Mier.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Sergio Mier, por el día 17 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4090, del Lema Partido Frente Amplio, señor Gabriel Duche.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno, solicito al Cuerpo que usted preside, me conceda licencia por los días 17 y 22 de diciembre de 2014, por motivos personales.

Sin otro particular, le saluda muy cordialmente,

FELIPE CARBALLO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 17 y 22 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Carballo, por los días 17 y 22 de diciembre de 2014.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Saúl Aristimuño.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por al Ley Nº 17.827, artículo 1°, literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia

por razones notorias inherentes a la investidura política por los días 15,16 y 17 de diciembre a los efectos de participar en la recorrida de obras en distintos puntos del departamento de Rivera, de acuerdo a los detalles de la nota adjunta.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

RICHARD SANDER

Representante por Rivera".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, para recorrer, invitado por el señor Intendente de Rivera, diferentes frentes de obras que se están realizando en la Capital y el interior del citado departamento.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 15 y 17 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política al señor Representante por el departamento de Rivera, Richard Sander, por el período comprendido entre los días 15 y 17 de diciembre de 2014, para recorrer, invitado por el señor Intendente de Rivera, diferentes frentes de obras que se están realizando en la Capital y el interior del citado departamento.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000, del Lema Partido Colorado, señor Ruben Núñez.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Diputado Aníbal Pereyra
Presente

Estimado señor Presidente:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, artículo 1°, literal D), solicito a usted se me conceda licencia por obligaciones notorias en el exterior desde el 8 al 18 de diciembre.

Motiva tal solicitud la convocatoria recibida por la Embajada de Israel en la ciudad de Jerusalén, y en virtud de integrar el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Israel y la invitación al encuentro con un grupo de Diputados y Senadores representantes de la Colectividad Italiana de América Latina en Italia.

Adjunto al presente remito copias de las invitaciones recibidas.

Saluda atentamente,

DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ

Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández, para participar en su calidad de miembro del Grupo de Amistad Parlamentaria Uruguay-Israel, del 5º Seminario Internacional de Senadores y Parlamentarios de América Latina, a celebrarse en la ciudad de Jerusalén, Israel.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 18 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal D) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña Fernández, por el período comprendido entre los días 8 y 18 de diciembre de 2014, para participar en su calidad de miembro del Grupo de Amistad Parlamentaria Uruguay-Israel, del 5º Seminario Internacional de Senadores y Parlamentarios de América Latina, a celebrarse en la ciudad de Jerusalén, Israel.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación a partir del día 10 de diciembre, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004505, del Lema Partido Nacional, señor Auro Acosta.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 5 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por el día 10 de diciembre del corriente año y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley N° 17.827, artículo 1°, literal C) que establece la causal "misión oficial".

Motiva la misma, asistir a la Reunión de la Comisión de Equidad, de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá.

Saluda al señor Presidente con mi más alta estima,

GERMÁN CARDOSO
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, para participar de la reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud, del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Maldonado, Germán Cardoso, por el día 10 de diciembre de 2014, para participar de la reunión de la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud, del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor Jorge Schusman.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Debido a que, en mi calidad de Presidente del Parlamento del MERCOSUR, deberé asistir a la Cumbre del CMC y Cumbre del Mercosur, a realizarse en la ciudad de Paraná, República Argentina, solicito a usted y de conformidad con el artículo 1°, literal C) de la Ley N° 17.827, se me autorice el uso de licencia desde el 15 al 18 de diciembre a efectos de asistir a las referidas cumbres.

Sin otro particular saludo a usted con consideración y estima,

RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por ésta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Jorge Meroni".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por ésta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Jorge Simón".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo, para asistir en su calidad de Presidente del Parlamento del Mercosur a la Cumbre del CMC y Cumbre del Mercosur a realizarse en la ciudad de Paraná, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 15 y 18 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Montevideo, Rubén Martínez Huelmo, por el período comprendido entre los días 15 y 18 de diciembre de 2014, para asistir en su calidad de Presidente del Parlamento del Mercosur a la Cumbre del CMC y Cumbre del Mercosur a realizarse en la ciudad de Paraná, República Argentina.

2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Jorge Meroni y Jorge Simón.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Evaristo Coedo.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a Ud., tramite ante la Cámara que preside, licencia en mi cargo de Representante Nacional, por el día 10 de diciembre, amparado en el literal C) de la Ley N° 17.827, en virtud de haber sido invitado a participar del "Parlamento Latinoamericano" que se realizará en la ciudad de Panamá, Panamá.

Sin otro particular, y solicitando se convoque a mi suplente respectivo, lo saluda muy atentamente,

CARMELO VIDALÍN
Representante por Durazno".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

En mi calidad de suplente del Representante Nacional por Durazno, Lic. Carmelo Vidalín, le hago llegar a Ud. por intermedio de la presente mi decisión de no aceptar por esta única vez la convocatoria de la que fui objeto.

Sin más lo saludo con la más alta estima,

Miguel Irrazábal".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

En mi calidad de suplente del Representante Nacional por Durazno, Lic. Carmelo Vidalín, le hago llegar a Ud. por intermedio de la presente mi decisión de no aceptar por esta única vez la convocatoria de la que fui objeto.

Sin más lo saludo con la más alta estima,

Domingo Bocchiardo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

En mi calidad de suplente del Representante Nacional por Durazno, Lic. Carmelo Vidalín, le hago llegar a Ud. por intermedio de la presente mi decisión de no aceptar por esta única vez la convocatoria de la que fui objeto.

Sin más lo saludo con la más alta estima,

Susana Flores".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Durazno, Carmelo Vidalín, para participar de una reunión del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Miguel Irrazábal, Domingo Bocchiardo y Susana Flores.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial al señor Representante por el departamento de Durazno, Carmelo Vidalín, por el día 10 de diciembre de 2014, para participar de una reunión del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Miguel Irrazábal, Domingo Bocchiardo y Susana Flores.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por los días miércoles 17 y lunes 22 de diciembre de 2014, por motivos personales.

Atentamente,

IVONNE PASSADA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Julio Baráibar".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Daniel Montiel".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

José Fernández".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 17 y 22 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Julio Baráibar, Daniel Montiel Méndez y José E. Fernández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, por los días 17 y 22 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Julio Baráibar, Daniel Montiel Méndez y José E. Fernández.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Frente Amplio, señor Heber Bousses.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por el día 17, 22 y 29 del corriente mes y año.

Sin otro particular lo saludo con mi más alta consideración y estima,

MARCELO BISTOLFI ZUNINI
Representante por Salto".

"Salto, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, contador Rodolfo Martínez, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido legislador en la fecha que comprende del corriente mes y año.

Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima,

Rodolfo Martínez".

"Salto, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Mtra. Griselda Ocampo, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido Legislador en la fecha que comprende del corriente mes y año.

Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima,

Griselda Ocampo".

"Salto, 10 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Dra. Martha Richard, suplente del Diputado Marcelo Bistolfi Zunini, le informa que por esta única vez, no acepto la convocatoria efectuada por el Cuerpo que Ud. tan dignamente preside, durante la licencia solicitada por el referido Legislador en la fecha que comprende del corriente mes y año.

Sin otro particular, lo saludo con mi más alta consideración y estima,

Marta Richard".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 17, 22 y 29 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Marcelo Bistolfi Zunini, por los días 17, 22 y 29 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Rodolfo Martínez, Griselda Ocampo y Martha Richard.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 115, del Lema Partido Colorado, señor Pablo Vela.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 17 de diciembre, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Saluda atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Luis Enrique Gallo Cantera".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Juan Ripoll".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional José Carlos Mahía, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Gabriela Garrido".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de diciembre de 2014.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, por el día 17 de diciembre de 2014.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes señores Luis Gallo Cantera, Juan Ripoll y Gabriela Garrido.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día indicado, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121738, del Lema Partido Frente Amplio, señor Eduardo Márquez.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme licencia los días 10 y 17 de diciembre del corriente por motivos particulares.

Sin más, lo saluda atentamente,

EDUARDO BRENTA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Eduardo Brenta.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 10 y 17 de diciembre de 2014.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Montevideo, Eduardo Brenta, por los días 10 y 17 de diciembre de 2014.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los mencionados días, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77, del Lema Partido Frente Amplio, señora Eleonora Bianchi.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Aníbal Pereyra
Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 16 al 22 de enero de 2015, y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal C, que establece la causal "misión oficial" del legislador.

Motiva dicha solicitud mi participación en la presentación periódica de Informes sobre las medidas legislativas, judiciales y de otra índole que Uruguay haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño y de sus Protocolos facultativos "relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía" y "relativo a la participación de niños en los conflictos armados".

La misma se llevará a cabo los días 18, 19, 20 de enero de 2015, en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Se adjunta invitación.

Saluda atentamente,

DANIELA PAYSSÉ
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, para participar en la presentación periódica de Informes sobre las medidas legislativas, judiciales y de otra índole que Uruguay haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Convención sobre los derechos del Niño y de sus Protocolos facultativos "relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relativo a la participación de niños en los conflictos armados", a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 22 de enero de 2015.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daniela Payssé, por el período comprendido entre los días 16 y 22 de enero de 2015, para participar en la presentación periódica de Informes sobre las medidas legislativas, judiciales y de otra índole que Uruguay haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Convención sobre los derechos del Niño y de sus Protocolos facultativos "relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relativo a la participación de niños en los conflictos armados", a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Frente Amplio, señora Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 10 de diciembre de 2014.

VÍCTOR SEMPRONI, ORLANDO LERETÉ, GERMÁN CARDOSO".

12.- Código del Proceso Penal. (Aprobación).

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: nos sentimos realmente representados en el informe que ha realizado, en nombre de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el señor Diputado Orrico, complementado por la intervención del señor Diputado Cersósimo.

Quiero señalar que vamos a acompañar con nuestro voto la aprobación de este Código del Proceso Penal, una larga ley que, más de una vez ha estado postergada porque, en definitiva, ya tiene un antecedente: el Código de Proceso Penal fue aprobado, postergando su vigencia y, posteriormente, se derogó, sin que llegara a entrar en vigencia.

Nos parece que con la aprobación de este proyecto estamos dando un paso absolutamente necesario para mejorar la administración de justicia y, desde ese punto de vista, creemos que esta instancia es realmente definitoria.

Por cierto, este nuevo Código del Proceso Penal entraña un cambio cultural muy importante, y quienes participen en las instancias del proceso penal tendrán que asumirlo.

Por otra parte, al quedar postergada su vigencia en este momento, nos permitirá durante este tiempo examinar con detenimiento y, eventualmente, establecer los ajustes necesarios. Además, en el próximo Presupuesto será absolutamente necesario prever los recursos para que el nuevo Código entre en funcionamiento lo que, a su vez, requiere la voluntad política de todos los partidos para aprobar las normas que mejoren la infraestructura, no solo del Poder Judicial, sino también de las Fiscalías, porque tendrán un papel sustancial en la participación del proceso penal.

Con todas estas acotaciones ratificamos nuestro voto para apoyar este proyecto de reforma del Código del Proceso Penal.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento, al no haberse presentado propuestas para modificar el texto que vino del Senado en la Cámara ni en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, se debe votar en bloque tal como vino.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar del artículo 1° al 383.

(Se vota)

——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ORRICO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Borsari Brenna).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

——No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 15 y 9)

ESC. GUSTAVO BORSARI BRENNA

1er. VICEPRESIDENTE

Dra. Virginia Ortiz

Secretaria Relatora

Dr. José Pedro Montero

Secretario Redactor

Arq. Julio Míguez

Director del Cuerpo de Taquígrafos

Dep. Legal N° 322.569/01
Impreso en la División Ediciones
de la Cámara de Representantes